
***Se confirma la desaceleración de
la economía. La industria la más
afectada***

Madrid, julio de 2019

INDICE

Resumen Ejecutivo	3
Incertidumbres en la economía y la industria global	10
Situación de la industria y la competencia en tecnología	11
El poder tecnológico chino	13
La UE queda fuera de las grandes batallas globales	16
Evolución de la economía comunitaria	17
Escasa cohesión social y laboral en la UE	20
Flojos resultados para la industria europea	22
La economía española y las incertidumbres políticas	27
Más empleo y mayor precariedad en la economía	30
Menos desempleo y más desigualdad	32
Evolución de la renta salarial	34
Evolución de los expedientes de regulación de empleo	36
Las políticas de inversión en I+D	37
Situación de la industria española	41
Leve recuperación de la industria al inicio de 2019	44
Una prioridad para la industria española: innovación, investigación y desarrollos propios	46
Influencia de la inversión extranjera en España	48
El empleo industrial	48
Crecimiento de la precariedad del empleo industrial	54
El tejido empresarial en la industria española	59
Comercio exterior y balanza comercial española	61
Un nuevo proyecto para la cohesión económica, social e industrial....	64
Superar la fuerte debilidad del proyecto europeo	68
El pilar de los derechos sociales y la industrial europea	71
La misma incertidumbre que se genera en España	75
Políticas de reindustrialización	78
... y para la transición energética	80
Apuestas sindicales de actuación	83
Proyecto Industria, transición energética y movilidad sostenible (ITEMS)	85

Resumen Ejecutivo

El PIB mundial creció un 3,7% en 2018 y se espera que se recorte de forma sensible en el futuro, teniendo en cuenta los principales escenarios de incertidumbre: *la guerra comercial entre China y EEUU; los desvaríos de Trump, política y económicamente; la fragilidad de los mercados emergentes; las incertidumbres políticas en la UE,* En definitiva, el mundo vive cambios no solo vinculados a una guerra comercial sino de las consecuencias sobre los sistemas productivos. De hecho, las principales organizaciones mundiales han rebajado sus expectativas de crecimiento global.

El crecimiento a nivel mundial se ralentizó más de lo esperado en la segunda mitad de 2018, en parte como reflejo de las profundas recesiones que ocurrieron en algunas economías emergentes y la debilidad generalizada del sector industrial. En cuanto a la localización de la producción, China ha sido la más beneficiada en la recomposición desde la crisis, puesto que ahora aporta el 22% del valor añadido industrial mundial, frente al 12% que aportaba en 2008. EEUU se quedó en la misma cuota y Europa pierde comba.

Europa se queda atrás

En medio de los que confrontan por la hegemonía mundial se encuentra Europa. Los 19 de la eurozona cerraron 2018 con un crecimiento decepcionante, debido a la menor actividad con el resto del mundo y a debilidades políticas y económicas internas. En el primer trimestre de 2019, su economía acumula 24 trimestres de expansión (seis años) y el desempleo se redujo hasta el 6%, por primera vez en una década. Pero, en ese tiempo, la economía europea apenas ha crecido algo más del 10%, por debajo de otros actores globales como EEUU o China.

Ahora, Europa se enfrenta a las guerras comerciales entre EEUU y China y las tensiones políticas, económicas y sociales (Brexit, Alemania, Francia, Italia) en el seno de la UE. En el continente divergen las opiniones sobre la apuesta por políticas y leyes comunes respecto a China, y los que negocian bilateralmente con Pekín, incorporándose a la Nueva Ruta de la Seda, porque consideran que las políticas “*comunes*” sólo reflejan los intereses de los países más grandes. La UE es consciente de que la dependencia del capital chino, sobre todo en los del sur de Europa, introducirá una peligrosa cuña en la unidad de club.

A lo que se une un mercado laboral que envejece a marchas forzadas. Ha aumentado el empleo en 8,8 millones, pero el 72% está ocupado por mayores de 55 años. Una población envejecida innova menos y presenta una productividad baja al tener menor capacidad para adaptarse a los cambios. Además, como desciende la gente ocupada, se reduce el consumo y la inversión.

En enero pasado, 19 socios firmaron en París una declaración conjunta en la que sostienen que la UE debe “*construir una política industrial que aliente la creación de grandes jugadores económicos*”. Entre otros, suscribían ese documento Francia, Alemania, Italia y España: “*Así como las grandes potencias*

no dudan a la hora de defender a sus campeones nacionales, Europa debe tener en cuenta en su política de competencia la evolución del entorno competitivo global en términos de inversión, comercio e industria". El debate incluye analizar los proyectos enmarcados en una política industrial y comercial al margen de las actuales reglas de la UE para facilitar los llamados "supercampeones", defendido por Alemania y Francia, mediante empresas que puedan liderar la competencia mundial.

Se encuentra en juego recuperar la fortaleza que ha caracterizado a la industria europea en el entorno global para mantener un empleo de 32 millones de personas, en un momento en el que su contribución al PIB europeo ha caído en 20 años del 23% al 19%, dejando de liderar la economía mundial en esta vertiente en los últimos 15 años. Hay que hacer realidad el objetivo de transformar a Europa en la tercera voz de un mundo crecientemente dominado por Washington y Pekín.

La economía española crece y se acompaña de fuertes desigualdades

La economía española se cuenta en estos últimos años entre las más dinámicas de la UE; alcanzando en el trienio 2015-2017 tasas superiores al 3% y situándose en 2018 casi un punto por encima del comunitario, evolución que se mantiene en el primer trimestre de 2019.

La economía española resiste la ralentización mejor que el resto de la eurozona. La diferencia entre España y las principales economías europeas radica en la fortaleza de la demanda interna. El hecho de que los hogares destinen casi toda su renta al consumo genera un crecimiento desequilibrado, como ya ocurrió durante la burbuja financiera. En la eurozona, el ahorro de los hogares asciende hasta el 12,1%, esto es, casi el triple que en España. La moderación del crecimiento que se manifiesta desde 2018 viene del exterior, por la acusada ralentización de las exportaciones.

En el primer trimestre de 2019 el PIB crece más que el anterior, algo que no sucedía desde finales de 2017, lo hace empujado por la inversión empresarial y el empleo, sobre todo en la construcción. España se adapta bien a la nueva economía de servicios, caracterizada por ofrecer mucho puesto de trabajo poco cualificado. De hecho, el empleo en el comercio, transporte y hostelería mejora un 3% interanual por encima del total. La tasa de empleo sigue siendo baja, resaltando dos factores que ponen de manifiesto la precariedad del mercado de trabajo: *la posición de "desventaja" que aún sufren las mujeres respecto a los hombres y el uso generalizado de contratos temporales, que considera un freno para el crecimiento potencial y para la cohesión social del país.*

Se evidencian que nuestra economía no tiene problemas para crear empleo cuando la economía crece, este comportamiento se debe a la estructura productiva, más intensiva en empleo que en otras economías, y a la escasa calidad (y, en consecuencia, productividad) del empleo creado. En términos generales, creamos mucho y mal empleo. El descenso del paro se está produciendo a costa de la alta temporalidad y la acusada precariedad del empleo generado. El empleo a jornada parcial es otro de los responsables de la baja

calidad del mismo, no tanto porque su volumen relativo sea muy elevado, sino por su carácter eminentemente involuntario. Además, tres de cada cuatro empleos parciales son ocupados por mujeres, lo que constituye una de las fundamentales vías de segmentación y desigualdad laboral entre ambos sexos, en perjuicio de las mujeres.

En España, el crecimiento de los salarios estuvo estancado diez años, hasta prácticamente la segunda mitad de 2018, cuando finalmente se apreció un repunte. De hecho, el ritmo de revalorización de las retribuciones apenas ha servido para compensar la inflación y evitar así pérdidas de poder adquisitivo. Sin embargo, en los últimos cuatro trimestres, la partida total dedicada a la remuneración de los asalariados ha engordado a tasas anuales del 4%, por encima de la evolución del PIB.

La realidad es que la mayor parte del incremento de las rentas salariales se ha producido por la creación de empleo. La entrada en la ocupación, de alrededor de medio millón de trabajadores al año, es lo que ha permitido que la masa salarial se haya incrementado durante la recuperación. Si bien es cierto que la masa de salarios ha crecido menos que el PIB y, por tanto, ha perdido peso en la economía, también lo es que se ha logrado un reparto más distributivo, siempre a la baja.

La industria española crece poco en actividad y empleo

España ha quedado significativamente perjudicada en su posición en la cadena de valor industrial global, puesto que ha pasado de aportar el 2,4% del total a tan solo el 1,3%.

La industria española cayó en recesión en el último trimestre de 2018, reflejando los peores datos desde el año 2013. Mientras que el resto -servicios, agricultura y, especialmente, construcción- sigue tirando de la actividad, aunque a un ritmo cada vez menor. En ese año, también la aportación de la industria a la economía nacional sufrió el mayor retroceso desde 2006.

La industria se está ralentizando más rápido que el resto de la economía y uno de los síntomas de este frenazo es la caída en la inversión de bienes de equipo, provocando el desmantelamiento industrial, el cierre y la desaparición de empresas, mientras la producción cayó durante tres trimestres del año 2018. Además, nos encontramos ante una industria que incorpora un bajo desarrollo innovador y un escaso peso tecnológico, lo que va acompañado de un empleo precario y de bajos salarios. Lo que también se percibe en el crecimiento del empleo industrial en su conjunto, que ha caído a la mitad respecto al año anterior.

Todos los sectores presentan tasas anuales negativas. Los mayores descensos se dan en bienes de consumo duradero, destacando el sector de automoción, por la demonización del diésel y la nueva normativa de circulación -WLTP-; y energía, por las condiciones meteorológicas y el fuerte crecimiento en 2017. Es preciso recordar que casi el 40% (15% y 20%, respectivamente) lo ocupan el sector energético y el de automoción. Con golpes menos duros, se encuentran las caídas de los sectores químico, farmacéutico y metalúrgico.

Todos los sectores tienen más empresas que hace cinco años, pero no todos se han expandido con la misma intensidad. Proporcionalmente, el que más ha engordado ha sido el de la construcción. Por cada nueva industria que nace en España se crean 20 empresas constructoras, lo que se está dando desde la recuperación económica, al acabar 2013. A pesar de todo, el número de empresas del tejido empresarial industrial duplica la tasa que presenta la economía en su conjunto. El sector agroalimentario es de los más importantes en España, seguido de la industria de los componentes de automoción, el turismo, las infraestructuras y la ingeniería.

El número de personas que trabajan en el sector industrial era de 2,7 millones, a finales de 2018, lo que, en la práctica, es un estancamiento del empleo industrial. De todas formas, el desempleo industrial sigue ofreciendo mayor resistencia, siendo el que menos disminuye en la economía.

La crisis de las manufacturas españolas se debe principalmente a tres sectores industriales concretos: *alimentación, textil y motor*. Coincide, además, con tres de los sectores que más mano de obra emplean, lo que todavía empeora más la situación. La globalización y la transición del diésel son las mayores amenazas que sufre el sector del automóvil, una de las grandes industrias del país. Así se explica que en 2018 el empleo descendiera algo más del 12% de la plantilla total.

La temporalidad afecta al 20% de la población asalariada, aunque tiene mayor incidencia entre las mujeres, que soportan dos puntos más que sus compañeros. Otra faceta de la precarización laboral es la rotación, que sigue en una tendencia creciente, arrojando una tasa de 80 contratos por cada empleo nuevo. Si quitamos de la cuenta las conversiones a indefinido, nos encontramos con que tan solo el 5% de los contratos realizados son indefinidos, con las conversiones en el total se alcanza el 10%.

La apuesta gubernamental durante el período de transición y hasta las últimas elecciones legislativas, pasaron por la profusión de decretos. Hasta entonces, el gobierno tomó carrerilla y en un mes presentó la constitución de tres Agendas para Sectores Industriales entre diciembre de 2018 y enero de 2019. Como viene pasando en la mayoría de las decisiones gubernamentales que afectan a la actividad de los sindicatos, se sigue sin contar con los que *conocen en profundidad la realidad de los distintos sectores industriales*.

Por otra parte, el año 2018 terminó con 825.600 temporeros y temporeras en el sector agrícola. Los datos de la EPA confirman que el empleo se estanca en este sector, a pesar de la gran actividad estacional que se registró a final de año. La caída de la tasa de paro no se corresponde con el ligero aumento que experimentó la ocupación anual, lo que confirma que son miles quienes optan por abandonar el sector. La tasa de paro en el sector agrario se sitúa en el 17,3%. Entre las mujeres llega al 24,1% y en los hombres se sitúa en el 15%. También es mayor la precariedad que soportan los jóvenes, medida como subempleo por sobrecualificación. En esta situación se encuentran el 33%, mientras que entre el total de nuestra población laboral alcanza el 29%.

A modo de conclusiones. Las incertidumbres globales ...

Las batallas comerciales ralentizan a las economías desarrolladas. Mientras que los países emergentes continuarán liderando el crecimiento a medio-largo plazo y sectores como, sobre todo, el tecnológico -en todos sus aspectos (robótica, inteligencia artificial, tratamiento masivo de datos, transporte, relaciones sociales...)- seguirán teniendo un importante impulso y siendo grandes generadores de valor.

La UE es consciente de que sus empresas parten con una gran desventaja en el ámbito de la financiación. En Asia, sus compañías están repletas de capital público, mientras que EEUU cuenta con un mercado de capitales muy diversificado. Por otra parte, las grandes compañías mundiales diversifican sus negocios hacia actividades ajenas a las que vienen desarrollando, tratando de acomodarse al avance tecnológico y sus nuevas realidades.

Mientras tanto, la OCDE desvela en su informe de 2019 que en el club de los países con economías desarrolladas muchos de los actuales empleos acabarán automatizados. De media, el 14% de del empleo de los países de la OCDE (36 economías) están en riesgo de automatización. La horquilla se mueve entre el 6% de Noruega y el 34% de Eslovaquia. Además, otro 32% del empleo sufrirá *"una transformación radical por el avance de la tecnología"*.

La UE acomete procesos de difusión con demasiada lentitud y con cada vez más dificultades, no solo a la hora de mostrar posiciones comunes, sino que muestra divisiones demasiados profundas, con dificultades para acometer un proceso que pueda competir en el mercado mundial. La ciudadanía europea, el sindicalismo del continente, comparte las incertidumbres generadas por la evolución de la UE durante la última década.

Lo que se trata es de no olvidar los compromisos básicos del proyecto europeo, enmarcados en una clara política de pactos sociales. Para ello, es preciso acometer la puesta en marcha de directivas ligadas a la negociación colectiva, al seguro de desempleo europeo, a las condiciones de trabajo, a la estrategia de igualdad de género, en definitiva, de cohesión social y territorial en el continente.

Europa, la UE, ha perdido el norte sobre la potencialidad de la industria para la economía del continente, lo que está colocando a la que fue primero potencia industrial en algo complementario de los actuales líderes (EEUU, China, Japón, Corea, ...). Compartimos la adopción del Consejo en noviembre sobre *"Una futura estrategia de política industrial de la Unión Europea"*, en las que urgía a la Comisión a elaborar un plan de acción a largo plazo para ese ámbito. *"El problema no es de competencia, sino de fragmentación de mercados. Aún debe armonizarse legislación y han de romperse monopolios nacionales para dar a las empresas la escala que necesitan. Los mercados de EEUU y China están completamente integrados, mientras que el europeo está fragmentado"*.

Europa es consciente que está en juego el 25% del valor añadido bruto de la Unión, dos tercios de sus exportaciones y 37 millones de puestos de trabajo, de los cuales 1,7 millones se han creado en el último lustro. Varios países europeos

han ido perdiendo peso industrial, y calidad de empleo, por no reaccionar a tiempo contra factores que han intensificado su impacto, tales como la innovación, el desplazamiento geográfico de las industrias y la globalización.

Además, estamos viviendo un momento clave para la industria, con grandes desafíos: *la expansión internacional, la innovación, la digitalización, la transición energética y la economía circular*. En un momento en el que su contribución al PIB europeo ha caído en 20 años del 23% al 19%, dejando de liderar la economía mundial en esta vertiente en los últimos 15 años. Además, nos encontramos ante una nueva Revolución Industrial, la 4ª, que en parte llega por sí misma y, en parte, es atraída o empujada por las necesidades del planeta para que no sufra trastornos que perjudiquen a nuestro hábitat.

En este marco, el incremento de disputas comerciales y el Brexit no dejan de ser los principales desafíos y oportunidades que nos recuerdan la necesidad de garantizar una base industrial europea sólida, competitiva y sostenible como una cuestión de soberanía para Europa.

... tienen su efecto en la situación de la industria española

España se encuentra con una economía que sigue encadenada a un modelo productivo basado en los servicios de bajo valor añadido (hostelería, comercio, servicios auxiliares), con un peso muy bajo de la industria y los servicios de alto valor añadido, lo que nos condena a un empleo precario y de bajos salarios; con muchas fluctuaciones estacionales e insuficientes para dar una oportunidad de empleo a su población. En consecuencia, no se observa un cambio en el modelo productivo liderado por la industria y los sectores de contenido tecnológico alto, lo que pone en duda la solidez a medio plazo de la mejora de la afiliación a la Seguridad Social y la rebaja del paro, como se ha evidenciado en las etapas de recesión.

La falta de una política energética o de innovación y desarrollo tecnológico, y digital definida -temas de los que apenas se ha hablado en las recientes campañas electorales- nos condena a seguir siendo dependientes de decisiones externas. La referencia a la importancia de las políticas medioambientales, energéticas, de innovación o digitalización, los nuevos empleos y sus réditos económicos, se reflejan como un guion constante pero escasa o nulumamente concretado. En un momento en el que España necesita desarrollar una “*cultura industrial*” que explique, defienda y promueva, con las precisiones pertinentes, las realidades industriales en nuestro país.

Ante una situación de orfandad como la que padecemos nuestro país desde hace décadas y proveniente de las preocupaciones prioritarias de la agenda política, la industria está acostumbrada a moverse por sí sola para resolver problemas distintos y de diferente origen, desde la financiación hasta la seguridad laboral. En este marco, CCOO de Industria viene apostando, desde finales de 2016 - junto a las principales asociaciones patronales de la industria- por el desarrollo del Pacto de Estado por la Industria, que el Gobierno del PP dejó estancado y que el del PSOE no ha terminado de impulsar. El sindicato sabe que se requiere

de mucha voluntad política, que hay que reforzar el diálogo social y que la Administración debe comprometerse a coordinar las políticas que se definan.

CCOO de Industria. Echamos de menos medidas e instrumentos de actuación ministerial y gubernamental que afronten un futuro industrial digitalizado, por los efectos que se esperan en el empleo, en las relaciones laborales y en la organización de las empresas.

Por otra parte, la OCDE señala a España como una zona de alto riesgo. Con el avance de la tecnología y la robotización, tiene una perspectiva bastante complicada, donde el 21,7% de los puestos de trabajo registra un "*alto riesgo de automatización*". Solo Grecia, Eslovenia y Eslovaquia presentan un riesgo mayor. El análisis de riesgos y fortalezas arroja varios toques de atención a España, sobre todo, por la dualidad del mercado de trabajo que existe entre temporales e indefinidos y entre jóvenes y mayores. La OCDE calcula que, en España, solo el 45% de los empleados temporales y el 32% de los trabajadores por cuenta propia participan en alguna formación al año, frente al 56% de los empleados con contrato indefinido y a tiempo completo.

Propuestas de acción sindical. Industria, transición energética y movilidad sostenible

"Más gasto social y mayor progresividad presupuestaria" es la idea fuerza básica de la actualización del Programa de Estabilidad 2019-2022 para España que el Gobierno presentó a finales de abril a Bruselas. Para compensar que en España haya aumentado la *desigualdad en salarios, renta, consumo y riqueza, distribución generacional, territorio y género*. Así lo constatan los organismos internacionales y así lo venimos denunciando desde CCOO desde el año 2009.

Por todo ello, y en este marco, el sindicato ha iniciado un proceso de elaboración de posición de cara a la actuación futura de la federación ante lo que ha definido como: *Industria, transición energética y movilidad sostenible*. Porque la *transición energética implica una profunda transformación de la forma de producir y consumir energía, de la movilidad, de los procesos industriales*. Además de la forma de construir y rehabilitar edificios, y de los sistemas de climatización.

Trabajo que, durante los próximos meses, pretende definir el futuro de la industria, teniendo como principal referencia las consecuencias de una transición que CCOO de Industria viene defendiendo y proponiendo desde hace varios años, y la urgencia de acometer un proceso de movilidad sostenible que supone un cambio disruptivo de la política del transporte en el mundo, con efectos directos en el cambio de negocio, de empleo y desarrollo tecnológico en la industria.

Es preciso que el tejido empresarial, los sindicatos y la administración se impliquen en un proceso: *"que derive en una Transición Industrial que, además de buscar los objetivos de descarbonización, fortalezca el tejido industrial y tecnológico"*.

Incertidumbres en la economía y la industria global

El mundo vive momentos de incertidumbre que se refleja en cambios políticos que retrotraen al nacionalismo económico frente al desarrollo de la globalización y unos compromisos medioambientales que se vienen utilizando como arma de competitividad comercial frente a la necesidad de parar el cambio climático.

El mundo se ha hecho mucho más complejo y ya no se trata de que una guerra comercial impacte en la balanza comercial de otro país, sino que puede dañar a los sistemas productivos de una manera nunca vista si las empresas se han integrado en cadenas de valor cuyos elementos no son fáciles de reemplazar. El comercio mundial retrocedió casi un uno punto en el último trimestre de 2018. La incertidumbre arancelaria ha provocado el peor crecimiento de la inversión en China en 25 años, lo que a su vez ha impactado en las exportaciones alemanas, que suponen el 50% de su PIB, afectando a una industria que representa el 30% del PIB alemán.

La Organización Mundial de Comercio (OMC), institución que fija las normas para el comercio global, no pasa por su mejor momento. La crisis es tan grave que podría llevarla a desaparecer. Sería una amenaza para el libre comercio base de la globalización, por eso ha formado parte de la última cumbre del G-20 (junio 2019). No es solo por la guerra comercial entre Estados Unidos (EEUU) y China, influyen también factores como el incremento en los precios del transporte, el mayor peso de los servicios (muchos de carácter más local) en la economía global o la nueva normativa de la UE sobre inversiones extranjeras. La realidad es que las inversiones chinas en Europa y EEUU descendieron un 73% en 2018.

*"Cunde la preocupación sobre un impacto creciente del proteccionismo y un posible agravamiento de los conflictos comerciales"*¹. Las tensiones comerciales entre EE UU y China están lejos de desaparecer. Existe escasa disponibilidad a levantar los aranceles impuestos a Pekín *"estamos obteniendo miles de millones de dólares en aranceles y esto va a seguir así durante un periodo de tiempo"*, señala Trump. A pesar de ello, se trago sus afirmaciones en la mencionada reunión del G-20, echando marcha atrás a sus bravuconadas por el daño que venía haciendo a su propio país en período preelectoral, levantando ambos países las subidas de aranceles decididas tras la ruptura del pasado mayo².

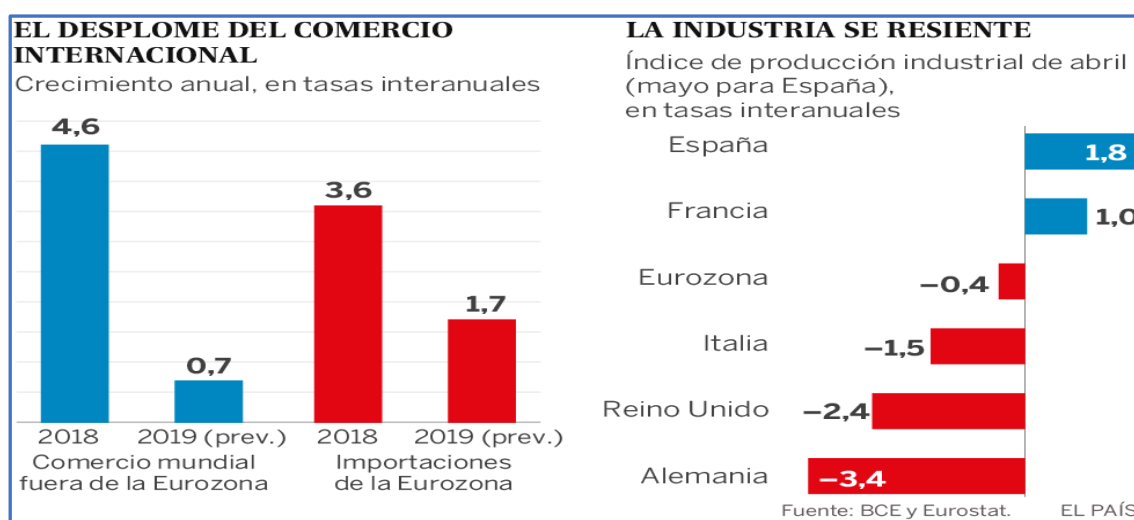
El PIB mundial creció un 3,7% en 2018, ante una inicial expectativa de recorte en el futuro, teniendo en cuenta los principales escenarios de incertidumbre: *la guerra comercial entre China y EE UU, la fragilidad de los mercados emergentes, los problemas de Canadá y Turquía*. Y, junto a esto, destaca Europa con sus propios contratiempos causados por la fragilidad de la economía italiana y la debilidad de Alemania. Algunos focos como el Brexit y la guerra comercial son persistentes y su propia existencia lleva a aplazar inversiones que restan fuelle

¹ Acta de la reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, del 24 de enero 2019.

² Washington aplicaba, hasta julio de 2019, un impuesto aduanero del 25% a la mitad de los productos que importa de China, unos bienes valorados en un total de 250.000 millones de dólares. Y por orden del presidente, estaba en marcha el proceso para extenderlos a los 300.000 millones restantes. Mientras que el déficit bilateral permanecerá en general sin cambios.

a la actividad. Sin contar las incertidumbres políticas que acompañan al continente.

El crecimiento a nivel mundial se ralentizó más de lo esperado en la segunda mitad de 2018, en parte como reflejo de las profundas recesiones que ocurrieron en algunas economías emergentes y la debilidad generalizada del sector industrial. En consecuencia, aun manteniéndose la economía en expansión, se ha producido, a principios de 2019, una desaceleración del crecimiento. La industria, pieza clave en el motor económico, deja un síntoma claro de agotamiento al marcar en febrero de 2019 su primer dato negativo desde noviembre de 2013³.



Situación de la industria y la competencia en tecnología

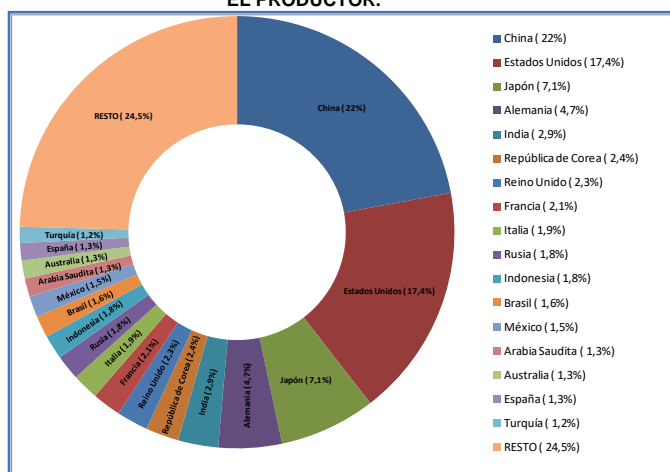
El valor agregado mundial de la industria se ha reducido desde el 29% en el año 2000 hasta el 25,4% en el año 2016, según datos del Banco Mundial. En cuanto a la localización de la producción, China ha sido la más beneficiada en la recomposición desde la crisis, puesto que ahora aporta el 22% del valor añadido industrial mundial (40,5% del valor agregado del PIB industrial en su país), frente al 12% que aportaba en 2008. EEUU se quedó en la misma cuota (con un 18,8% del PIB agregado en su país y la de la EU-28 se sitúa en el 19,6% en 2017).

El desplome del comercio mundial sigue pasando factura a la industria, a la vez que el sector de servicios mantiene su dinamismo. La producción manufacturera crece un discreto 1,4%, como consecuencia de la caída en el sector de bienes de consumo duradero (automóviles, textil y confección, etc.). Por su parte, los bienes de consumo no duradero, como alimentación y bebidas, así como los bienes de equipo, aguantan mejor el parón global. Destaca la pujanza del sector de productos electrónicos y ópticos, que crece a un ritmo que roza el 10% anual. Pero su peso relativo es insuficiente para cambiar el panorama de conjunto.

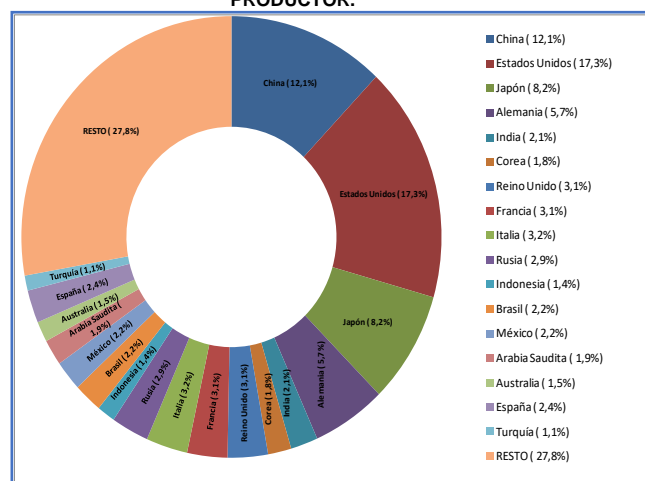
³ Según el índice PMI (indicador a partir de cuestionarios al sector privado que se elabora a nivel mundial).

La industria manufacturera de EEUU se mantiene en mínimos desde 2009. El sector manufacturero de la eurozona se deterioró en el primer semestre de 2019. Por países, Alemania se mantuvo como el más débil. Las fábricas de Austria alcanzaron su menor nivel en 55 meses, mientras que las de Países Bajos e Irlanda observaron los peores datos en los últimos 72 y 73 meses. Francia rompió en parte la tendencia general de estos países. Y La industria española agudiza su recesión y lastra el crecimiento del segundo trimestre, sufriendo su mayor contracción en seis años, debido a la incertidumbre política y las tensiones comerciales globales.

VALOR AÑADIDO INDUSTRIAL MUNDIAL 2017 (PRECIOS CORRIENTES Y MILLONES DE \$). DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL PRODUCTOR.



VALOR AÑADIDO INDUSTRIAL MUNDIAL 2008 (PRECIOS CORRIENTES Y MILLONES DE \$). DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL PRODUCTOR.



En este marco, hace casi una década que la economía alemana se preocupó por el “*peligro chino*” en su casa y en la UE, pero Europa no actuó. Durante los últimos años es EEUU quien ha descubierto “*los males*” de esta nueva economía global y su respuesta es la más estrambótica que pueda percibir una potencia económica. La inversión china en Europa ha aumentado un 600%, especialmente en los sectores estratégicos. Rusia también ha duplicado y concentrado su industria en el sector tecnológico, a menudo desde empresas públicas o vinculadas al Estado.

La adquisición de infraestructura, tecnologías o intereses estratégicos se está convirtiendo en un objetivo político. En 2017, EEUU ya vetó la adquisición por parte de inversión china de una compañía americana por motivos de seguridad nacional. En 2018, Alemania hizo lo mismo por primera vez ante una inversión china (la compra de la biotecnológica Aixtron y de Osram últimamente).

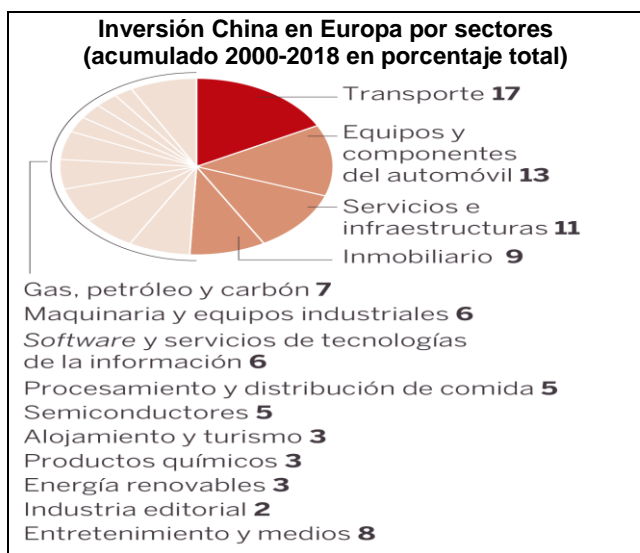
Con este objetivo, a mediados de marzo de 2019, la Comisión Europea dio un giro radical a su planteamiento sobre China, a la que ahora califica como “*rival sistémico*” en su documento oficial. El documento acusa abiertamente a China de competencia desleal (cierra sus mercados); de fomentar el endeudamiento insostenible en los países vecinos de la UE; y de embarcarse en una carrera armamentística que plantea cuestiones de seguridad para la UE⁴.

⁴ Comisión Europea - Comunicado de prensa: “*La UE revisa las relaciones con China y propone 10 acciones*”. Bruselas, 12 de marzo de 2019.

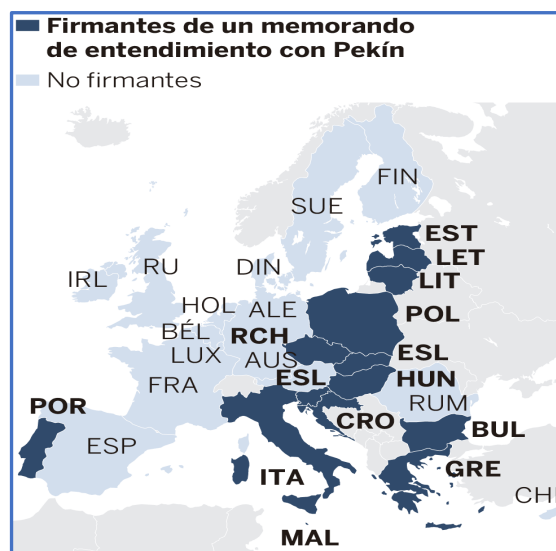
Este endurecimiento diplomático coincide con la puesta en marcha del primer mecanismo comunitario de escrutinio de inversiones extranjeras directas. Un control que llega después de que la inversión china en Europa haya pasado de 800 millones de dólares (707 millones de euros) en 2008 a un récord de 42.000 millones durante 2016⁵: *para garantizar seguridad y orden público; cubrir sectores clave de la economía europea y tecnologías desarrolladas por compañías opacas controladas por otros gobiernos; y vigilancia también de la inversión que afecte a programas y proyectos comunitarios*. En funcionamiento desde el 10 de abril de 2019.

El poder tecnológico chino

La potencia asiática ha definido una clara estrategia de política industrial a través del “*Made in China 2025*”, que tiene un claro objetivo: “*Convertirse de nuevo en una superpotencia*”. El impacto sobre el Viejo Continente de ese poder, que aspira a codearse con EEUU, es inevitable en todas las áreas, desde la tecnológica a la lucha contra el cambio climático.



Fuentes: Comisión Europea, Rhodium Group, Merics y Bloomberg. EL PAÍS



Fuente: El País

Tres años más tarde de la presentación del *Made in China 2025*, el presidente Xi Jinping reformuló el plan para convertir al país en una superpotencia tecnológica en la industria aeroespacial, la robótica, la biotecnología y la computación. En ese horizonte, con un presupuesto estimado de unos 300.000 millones de dólares (unos 260.000 millones de euros). Un programa que representa “*una amenaza existencial para el liderazgo tecnológico estadounidense*”, según rezan las proclamas de este país.

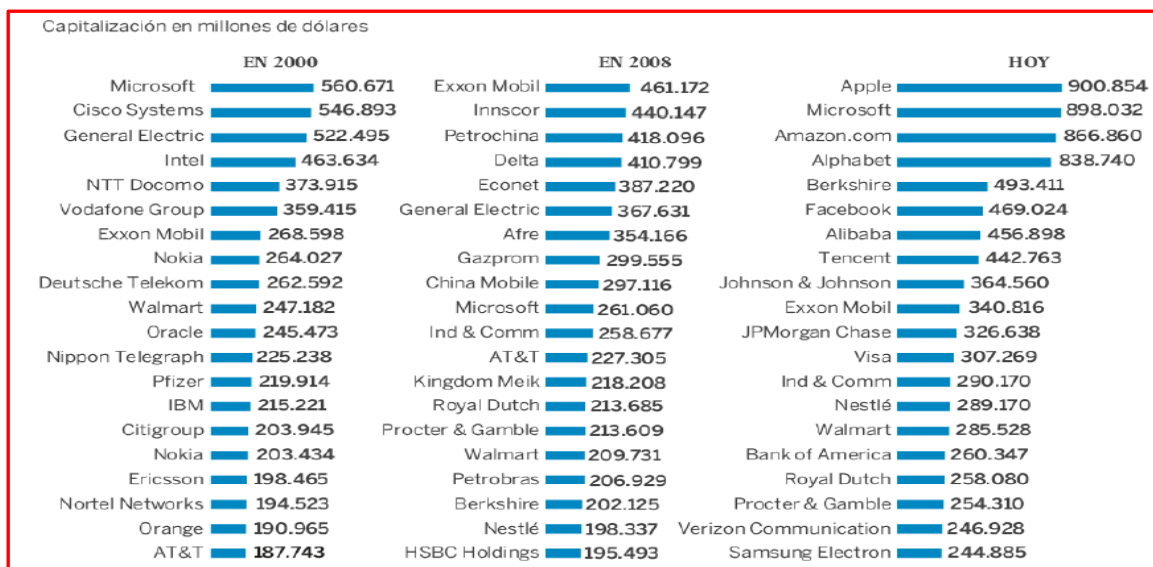
En este marco, EEUU y China han entrado en una gran carrera por la primacía en el desarrollo del 5G y por el control de las redes resultantes de la puesta en marcha de esta innovación. La actitud norteamericana frente a un competidor que, en muchos sentidos, puede llevarle la delantera, ha sido claramente

⁵ Parlamento Europeo: “*Más control de la UE sobre la inversión extranjera directa*”. Febrero 2019.

agresiva. Mientras que la inminente llegada de las redes de conectividad 5G va a impactar en las economías industrializadas en mucha mayor medida que las tecnologías anteriores, China comenzará formalmente con la investigación y el desarrollo de la tecnología móvil 6G en el 2020, con el objetivo de comercializarla en el 2030⁶.

En 2018, Trump blindó las telecomunicaciones de EEUU contra Huawei, en una nueva ofensiva contra China, declarando una emergencia nacional para proteger sus redes a través de una orden ejecutiva que entrega competencias al Gobierno federal para prohibir a empresas que contraten con proveedores extranjeros. La medida suponía una nueva escalada en la guerra comercial con el gigante asiático. La situación llega a ser tan absurda y fuera de lugar que llevó a que la administración norteamericana forzara a Google a suspender todos sus negocios con la marca china, generando inquietud entre todos los consumidores de esa compañía.

Detrás de la iniciativa contra la expansión de Huawei estaba el temor de que, a través de la compañía -debido a sus vínculos con el poder y al control que las autoridades tienen sobre las empresas chinas- Pekín pueda espiar las comunicaciones o directamente cortarlas en un escenario de conflicto⁷. En la comentada Cumbre del G-20, de junio de 2019, EEUU decide retirar la prohibición de ventas por las empresas americanas a las tecnologías chinas, aliviando los temores de no pocas multinacionales de todo el mundo.



Fuente: Bloomberg y EY

El País

⁶ El 5G no será “real” hasta 2020, multiplicando por diez la velocidad de fibra óptica más rápida para el público, con menor saturación, menor latencia y mayor eficiencia. Será también la puerta para controlar el IoT (Internet de las cosas), ya que ha sido diseñado para conectar billones de máquinas y sensores a un bajo precio y sin consumir baterías, convirtiéndose, así, en la herramienta esencial para el control digital de máquinas en tiempo real. Además, se configura como una revolución para los dispositivos móviles, mejorando la digitalización de las industrias tradicionales (existirán 75 millones de dispositivos IoT instalados a finales de 2020 dedicados a la agricultura inteligente).

⁷ Ninguna empresa estadounidense puede competir por ahora con las chinas en la tecnología 5G, que promete conexiones móviles mucho más rápidas y una nueva estructura de Internet que permita la conexión de millones de objetos, desde coches autónomos a cámaras de seguridad.

Están en juego dos modelos de desarrollo tecnológico, el de Silicon Valley, donde se han apoyado en una abundante financiación privada capaz de asumir riesgos. Y el modelo Shenzhen, la ciudad china que alberga a algunos de esos gigantes tecnológicos, crecidos al amparo de la protección estatal, la transferencia forzosa de tecnología de las multinacionales que quieren hacer negocios en el país y cuantiosa mano de obra barata y formada. Además, el Gobierno chino adoptó una ley en 2017 que, supuestamente, obligaría a las empresas de tecnología con sede en el país a cooperar técnicamente con los servicios de inteligencia chinos. Son dos modelos contrapuestos, uno basado en la iniciativa privada y otro impulsado por el sector público.

Por otra parte, China viene desarrollando el programa “One belt, one road” (*un cinturón, una carretera*, también llamado nueva ruta de la seda), basado en la creación de una enorme red de infraestructuras global que puede costar hasta un billón de dólares. Su concepción, en 2013, llamó la atención de todas las capitales del planeta tanto por su ambición como por las incógnitas que rodeaban al plan.

Los críticos aseguran que este plan es un instrumento de Pekín para dominar el mundo, mientras sus defensores defienden que es una especie de plan Marshall del siglo XXI que ayudará a desarrollar regiones olvidadas. China ha logrado en estos últimos años que 125 países respalden abiertamente su plan, entre ellos Italia, el único miembro del G-7 que lo ha hecho, provocando recelos tanto en Washington como en Bruselas.



Fuente: MERICS (Instituto Mercator para estudios sobre China). N. Catalán. EL PAÍS

Un total de 37 jefes de Estado y 5.000 participantes de 150 países se reunieron a finales de abril de 2019 en Pekín, considerándose el evento diplomático del

año, con el empeño de convencer a la comunidad internacional de que el proyecto está siendo un éxito y que no hay nada que temer. En la UE, lo han hecho 11 países del Este, además de Italia, Malta, Grecia y Portugal. El presidente francés hizo autocrítica y admitió que las políticas de austeridad impuestas durante la Gran Recesión desplegaron una alfombra roja al gigante asiático. “*Los únicos inversores que compraban sus activos eran inversores chinos*”, reconociendo el “*error estratégico*”.

Mientras tanto, Pekín ha desembolsado hasta el momento más de 70.000 millones de dólares para financiar proyectos como carreteras, puertos, líneas ferroviarias, puentes, oleoductos, centrales eléctricas o infraestructuras de telecomunicaciones en Asia, Europa, África e incluso Latinoamérica, región que queda muy lejos de la antigua Ruta de la Seda.

La UE queda fuera de las grandes batallas globales

la UE se ha erigido en garante de las reglas y el multilateralismo: *defiende el tratado nuclear con Irán, que EEUU trata de torpedear con sanciones; encabeza la lucha contra el calentamiento global, tras la retirada de Washington del Acuerdo Climático de París; ha sacado adelante un reglamento de datos que las multinacionales de Silicon Valley se han apresurado a adoptar; y se ha arrogado la condición de adalid del libre comercio firmando nuevos pactos con Canadá, Japón, Vietnam, Singapur, México y MERCOSUR, además de negociar otros con Australia, Nueva Zelanda.*

Los desaires de EEUU, bajo la doctrina del “*América Primero*”, no han quedado sin respuesta. La UE amenaza con una batería de aranceles si Trump elige finalmente internarse en esa vía. “*Europa debe responder con reglas al poder absoluto, con multilateralismo al unilateralismo, con derechos al autoritarismo, y con firmeza a la intimidación o la injerencia*”⁸. La estrategia china también levanta inquietudes. Su hiperactiva carrera inversora en África y América Latina, la penetración en Europa a través de la llamada Ruta de la Seda y la dependencia de Huawei para desarrollar la red móvil de 5G generan recelos.

Al mismo tiempo, los 28 han decidido realizar una evaluación de riesgos sobre los problemas potenciales para la red de infraestructuras de 5G. Un análisis que completará, a escala europea, la Agencia Europea de Ciberseguridad (ENISA) para octubre. Este doble ejercicio servirá para definir, antes del 31 de diciembre de 2019, “*una caja de herramientas*” con medidas para mitigar posibles riesgos que podría incluir certificaciones, exámenes, chequeos y la identificación de productos o suministradores no seguros⁹.

⁸ Informe del European Policy Centre, de abril de 2019, sobre cómo debe actuar la UE en los próximos cinco años.

⁹ De momento hay 11 Estados miembros -Austria, Bélgica, República checa, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Holanda, Lituania y Portugal- que tienen intención de subastar al menos un espectro en 2019, mientras que otros seis países -España, Malta, Lituania, Eslovaquia, Polonia y R. Unido- lo harán en 2020, fecha incluida en el plan de acción europeo para el lanzamiento comercial del 5G de la UE.

En junio de 2019 se puso fin a las dos décadas de negociaciones entre la Unión Europea y los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay)¹⁰, configurándose como el mayor acuerdo comercial alcanzado nunca por la UE-28. Dará acceso a las empresas europeas a un mercado de 260 millones de consumidores y con su firma, la UE se reivindica como bastión del libre comercio en una época marcada por las políticas proteccionistas, aunque el texto debe obtener todavía el visto bueno de los Estados miembros y el Parlamento Europeo, que podrían exigir cambios.

Según los firmantes, el acuerdo permitirá a las empresas europeas suprimir unos 4.000 millones en aranceles, que beneficiarán sobre todo a la industria automovilística -a la que hasta ahora se imponen unas tasas del 35%-, de maquinaria (14%-20%), química (18%) o farmacéutica (14%). Pero también derriba barreras en sectores como el textil, el calzado, vinos o licores¹¹. A cambio, dará impulso a las exportaciones, que son sobre todo de productos agrícolas y ganaderos, de los países de Mercosur a Europa, lo que preocupa al sector agrario español, por el volumen y las condiciones que se fijen para las importaciones de carnes de vacuno y de pollo, azúcar, arroz y especialmente zumos y cítricos.

La Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur y la Confederación Europea de Sindicatos (CES) lanzaron un comunicado conjunto sobre la nueva ronda de negociaciones del Acuerdo de Asociación birregional UE-Mercosur, reivindicando el respeto a los derechos laborales y pidiendo que las relaciones UE- Mercosur sirvan para construir un modelo de desarrollo más equilibrado que contribuya a una mayor cohesión y justicia social. En este marco, se comprometen a seguir reivindicando el respeto a los derechos laborales y que las relaciones UE- Mercosur sirvan para construir un modelo de desarrollo más equilibrado que contribuya a una mayor cohesión y justicia social.

Evolución de la economía comunitaria

En medio de los que confrontan por la hegemonía mundial se encuentra Europa, la UE, con un crecimiento decepcionante. Los 19 de la eurozona cerraron 2018 con un avance del 1,8%, cinco décimas menos que en 2017, según Eurostat. El ritmo de crecimiento de la zona seguirá cayendo por debajo del 2%, alcanzado en los últimos ejercicios (2,2% en 2017), debido a la menor actividad en el resto del mundo y a debilidades políticas y económicas internas.

En el primer trimestre de 2019, la economía de los 19 acumula 24 trimestres de expansión (seis años) y el desempleo en la UE se encuentra en el 7,7% por

¹⁰ Mercosur es un proceso de integración regional fundado en 1991. Es una potencia económica con un PIB de 4.580 billones de dólares, lo que representa el 82,3% del PBI total de Sudamérica. Cubre un territorio de casi 13 millones de km² y cuenta con más de 275 millones de habitantes (cerca del 70 % de América del Sur). Siete de cada diez sudamericanos son ciudadanos del Mercosur.

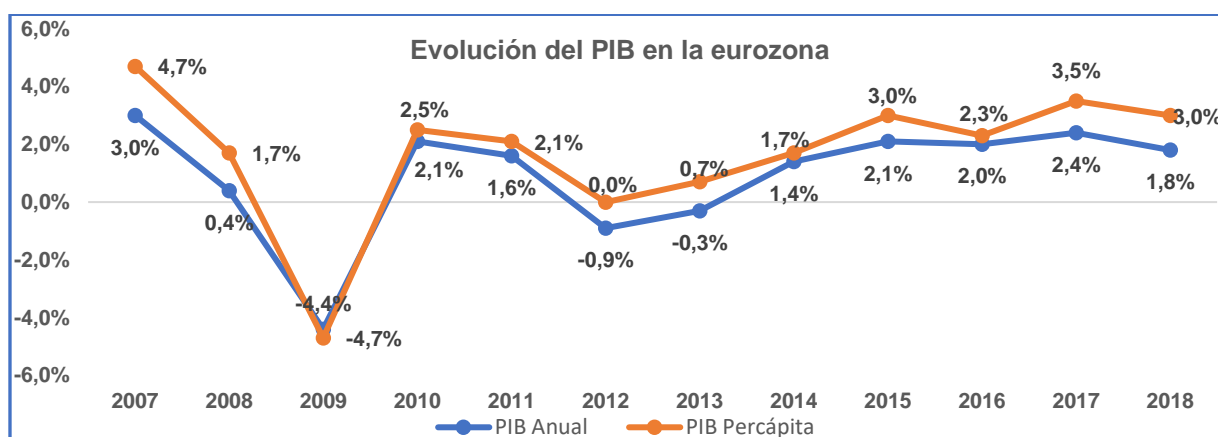
¹¹ Las exportaciones de Mercosur a la UE alcanzaron los 42.600 millones de euros en 2018, mientras que en sentido contrario llegaron a 45.000 millones de euros. Prácticamente la mitad del comercio desde Mercosur corresponde a agricultura y ganadería, mientras que en el caso de la UE esos productos apenas suponen el 5% de las ventas.

primera vez en una década. Pero, en ese tiempo, la economía apenas ha crecido algo más del 10%, por debajo de otros actores globales competidores como EEUU o China. La Unión tiene dos frentes que debe cerrar: *el medio punto de crecimiento que cada año le viene sacando EEUU y la insatisfactoria convergencia que puede llevar a “amenazar la cohesión social”*.

A pesar de todo, el primer trimestre de 2019 ha supuesto una tregua para la zona euro, con un avance del PIB del 0,4% (aunque un escaso 1,2% interanual). Los países del euro cortan así la racha de dos trimestres endebles que resucitaron los fantasmas de un inminente retorno de la crisis. Alemania, la principal economía de la moneda única, salió del estancamiento de los últimos seis meses. El PIB del país se expandió un 0,4% en el primer trimestre de 2019, al mismo ritmo del conjunto de la zona euro, que tomó impulso, además, con la salida de la recesión de Italia. El ritmo de crecimiento se duplicó y permitió coger aliento en pleno recrudecimiento de las hostilidades comerciales entre EEUU y China. A pesar de todo, las previsiones de la Comisión Europea apuntan a una desaceleración provocada por las tensiones económicas y sociales dentro y fuera del continente.

Aunque en este continente la recesión ya es cosa del pasado. En 2013, el PIB todavía retrocedía en nueve de las 28 economías de la UE; sólo en tres en 2014, en dos en 2015 y en una en 2016 (la griega). En 2017 todas obtuvieron registros positivos. Pero, la dinamización del PIB no ha acrecentado la demanda de empleo por parte de las empresas y Administraciones públicas¹².

En el conjunto de la UE, a lo largo de quinquenio 2013-2017, la compensación media por empleado en términos reales ha aumentado tan sólo un 3,5%, un 0,7% cada año. En la española, en el mismo periodo, los trabajadores han perdido capacidad adquisitiva (0,5% por año).



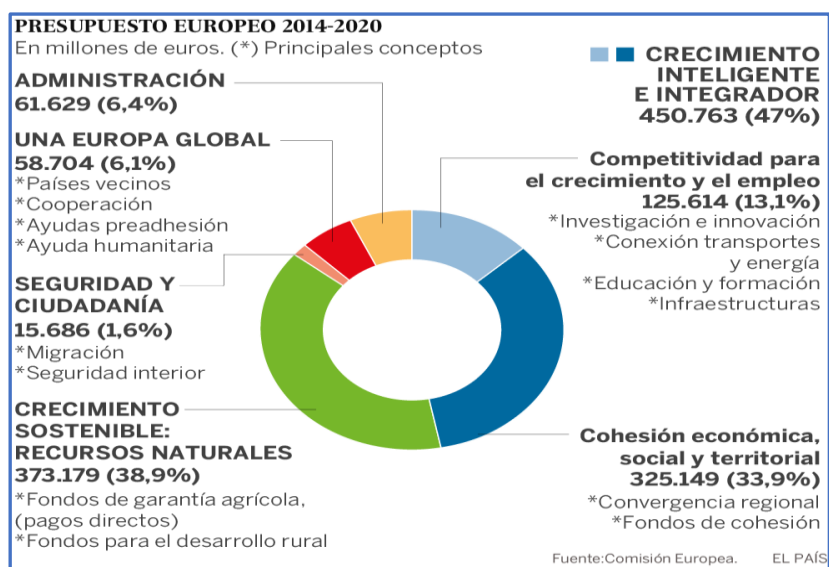
Fuente: Eurostat

En 2018, la situación ha cambiado. Italia, la segunda economía europea más endeudada, entró en recesión en el tramo final de 2018. Y Alemania, cuya política presupuestaria se aferra a la disciplina fiscal, la bordeó y quedó literalmente estancada en el último trimestre, con un crecimiento anual del

¹² “Las economías mejoran y los salarios se estancan”. Fernando Luengo en infoLibre, el 22/12/18.

1,4%¹³. Pero el euro es una sola moneda y la economía que la respalda se dirige a una desaceleración más pronunciada de lo previsto tras un dato que supone el menor avance desde 2014.

Mientras tanto, el presupuesto de la UE equivale aproximadamente al 1% del PIB del club comunitario. En el año presupuestario 2017, 11 de los 28 fueron contribuyentes netos, con Alemania a la cabeza y todo el grupo de los países más prósperos, entre ellos Francia, R. Unido e Italia. Ese año España todavía fue beneficiaria, aunque se encamina hacia el grupo con saldo pasivo. La salida de los británicos -contribuyentes netos pese al célebre cheque anual que negoció Thatcher y que sigue subsistiendo- agriará esa disputa.



La entrada en recesión técnica de Italia ratificó, a principios de año, que la eurozona estaba ante un problema de desaceleración económica más rápida y profunda de lo esperado. El otro agujero es Italia, con el agravante que aún no ha recuperado el nivel de riqueza que tenía antes de la crisis. En el primer trimestre sale de la recesión y sube dos décimas. Aunque España y Francia mantenían tasas de crecimiento por encima de la media, lo cierto es que el enfriamiento económico había caído sobre el euro. Las últimas esperanzas estaban puestas en que Alemania remonte los dos malos trimestres anteriores y consiga al menos mantener una tasa de crecimiento del 1% en 2019.

Alemania viene mostrando un crecimiento constante desde 2014. La explicación del frenazo está en el sector exterior, porque la industria de este país está marcada por su alta dependencia de del comercio internacional. Las exportaciones han pasado del 15% en 1970 al 47% a partir de 2017. Su poderosa industria del automóvil está aprisionada entre las amenazas de los aranceles de Donald Trump y medidas medioambientales, que están penalizando la tecnología diésel. A lo que se une la desaceleración del crecimiento chino, su principal mercado, y las amenazas de represalias de Trump contra ese país.

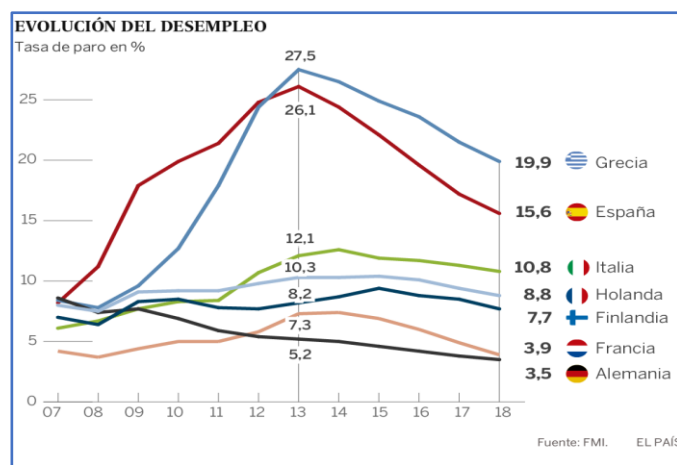
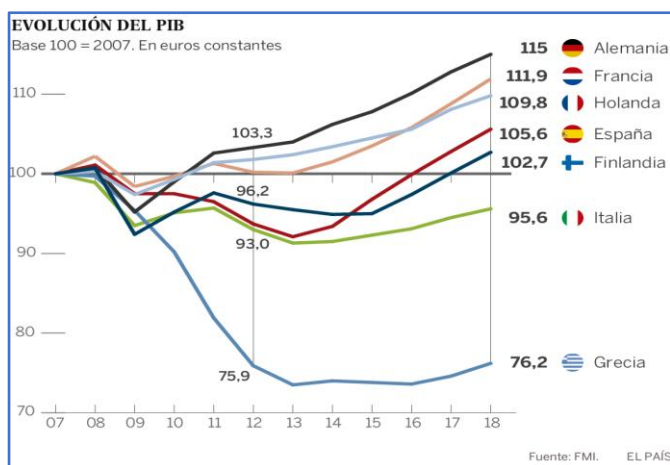
¹³ El consumo creció ligeramente, mientras que el comercio exterior no contribuyó a la ligera mejoría. Los malos datos se deben también a la adaptación que tuvo que realizar el sector del automóvil a la nueva normativa de certificaciones y a la sequía extraordinaria que frenó el transporte en algunos grandes ríos del país.

Escasa cohesión social y laboral en la UE

Según Eurostat, entre 2013 y 2018 el número de empleos en la zona euro ha aumentado en 8,8 millones. De esos, 6,4 millones (72%) están ocupados por mayores de 55 años. En su informe anual, el BCE alerta: *“Un análisis del crecimiento del empleo durante la recuperación revela que el avance se ha concentrado en las personas de más edad. En torno a tres cuartas partes del crecimiento acumulado del empleo se corresponde con el colectivo de edades comprendidas entre 55 y 74 años”*.

Porque la gente permanece en activo más años, justificado por las reformas de pensiones, que han elevado la edad legal de retiro o han endurecido la jubilación anticipada, provocando una subida de la proporción de personas trabajando en esas edades. Una población envejecida innova menos y presenta una productividad baja, al tener menor capacidad para adaptarse a cambios tecnológicos. Además, como desciende la gente ocupada, se reduce el consumo y la inversión. Y también disminuye la demanda de bienes que necesitan inversión.

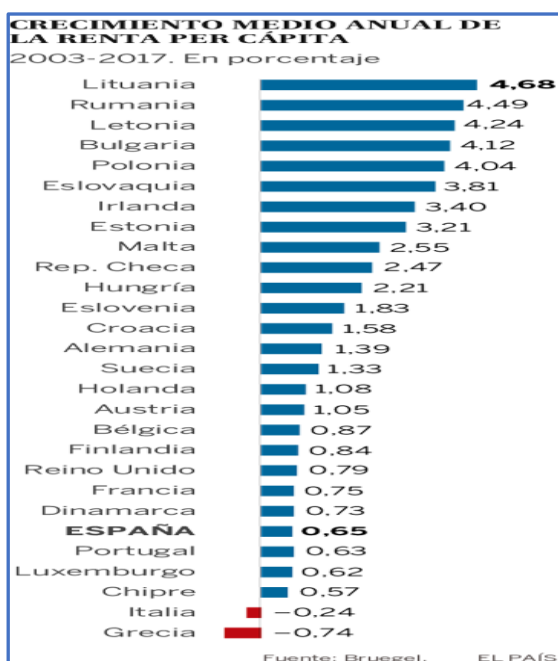
Algunas de las economías más endeudadas siguen sin aprovechar el viento a favor para reducir su pasivo. Continúa rezagada, el impacto del Brexit está por dilucidar, y pese a la mejora del empleo, la tasa europea de desempleo dobla a la de EEUU, con enormes bolsas de parados, especialmente jóvenes del sur del continente, aislados de los beneficios de la bonanza.



La tasa de desempleo oficial de la zona euro en los cinco primeros meses del año 2019 cae a mínimos de julio 2008, situándose en el 7,5%. Mientras que en el conjunto de la UE descendió hasta el 6,3%, lo que supone su mejor lectura desde que en el año 2000 comenzara a elaborar sus registros Eurostat. 15,7 millones de personas carecían de empleo en la UE en mayo de 2019, de los que 12,3 millones se encontraban en la zona euro. En comparación con abril del año pasado, la cifra de desempleados en la Unión descendió en 1,4 millones de personas y en la zona euro bajó en 1,1 millones.

Los países del Este de Europa han sido los que más han avanzado en este proceso de convergencia. Las menores tasas de paro del primer trimestre de

2019 se observaron en la R. Checa (2,2%), Alemania (3,1%) y Países Bajos (3,3%), mientras que las más altas fueron las de Grecia (18,1%), España (13,6%) e Italia (9,9%). En comparación con 2018, el paro bajó en 23 Estados miembros, se mantuvo estable en Austria y se incrementó en Dinamarca (de 5% al 5,1%), Luxemburgo (del 5,6% al 5,7%), Polonia (del 3,6% al 3,7%) y Suecia (del 6,2% al 6,3%).



La renta per cápita de países como Lituania, Letonia, Rumanía, Polonia o Bulgaria han crecido por encima del 4% anual entre 2003 y 2017. Esa diferencia de hasta tres puntos con las principales economías ha permitido ir convergiendo con las economías más ricas. En el otro extremo están los países del furgón de cola, instalados en el sur de Europa. Se encuentra España, cuya renta per cápita ha aumentado 0,65% anual. Pero también Portugal (0,63%) o Chipre (0,57%). El saldo anual incluso es negativo para Grecia (-0,74%) Italia (-0,24%). En ese periodo, la renta per cápita alemana creció un 1,39% anual; la austriaca, un 1,05%

y la holandesa, un 1,08%. Esa diferencia del 0,74% en un año entre España y Alemania puede parecer insignificante, pero supone que en 15 años la brecha creció un 11,1%.

Además, persisten diferencias territoriales, donde se aprecian los casos de Francia -medio país se ha quedado atrás- o España, con una comunidad andaluza rezagada y, en cambio, el País Vasco ha mostrado un comportamiento a la altura de las grandes economías del centro y el norte de Europa.

De “*gran importancia*” se considera mantener vivas iniciativas que permitan que se pueda seguir gravando la riqueza las herencias y los beneficios corporativos. “*Un incremento de la carga fiscal en la clase media trabajadora sería compatible con la promesa de una economía social y de mercado en Europa*”¹⁴.

El Laboratorio sobre la Desigualdad Global, de Thomas Piketty y Lucas Chancel, ha constatado que los más frágiles han sufrido de lleno la progresiva erosión de los seguros de desempleo, de las pensiones, de los sistemas nacionales de salud. Los derechos laborales también se han hecho menos protectores. La crisis ha agudizado notablemente el foso que separa a los empleos cualificados de los trabajos precarios, como lo señala con alarma el Banco Mundial en su último informe sobre Europa. En definitiva, los desequilibrios económicos y sociales no solo persisten, sino que se ensanchan.

¹⁴ Documento elaborado por Bruegel -firmado por Guntram Wolff, André Sapir y Maria Demertzis- que traza las medidas que deberían debatir los países para aproximar sus economías.

Flojos resultados para la industria europea

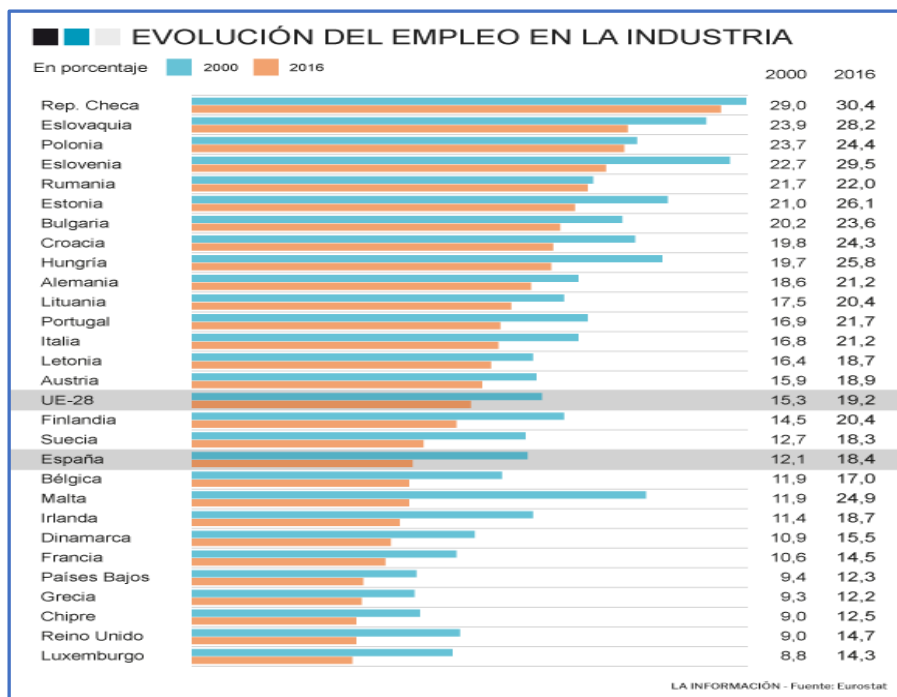
Estamos viviendo un momento clave para la industria, con grandes desafíos: *la expansión internacional de la innovación, la digitalización, la transición energética, la economía circular y un giro radical de la forma de producir y consumir*. Lo que comporta no solo recuperar la fortaleza que ha caracterizado a la industria europea en el entorno global, sino mantener un empleo de 37 millones de personas, en un momento en el que su contribución al PIB europeo ha caído en 20 años del 23% al 19%, dejando de liderar la economía mundial en esta vertiente en los últimos 15 años.

Finaliza 2018 con Alemania, Italia y España provocando el peor dato de la industria en la eurozona desde el año 2009, reflejando una situación complicada para la industria europea en la fase final del último año, afectada también por factores coyunturales que podrían desaparecer en 2019, lo que así parece constatar en el primer trimestre de este año. Los indicadores de producción industrial de la UE arrojan una atonía desde mediados de 2018. Si bien la fabricación de vehículos en Alemania se vio interrumpida en el tercer trimestre por la entrada en vigor de nuevas normas medioambientales, la industria volvió a dar señales negativas, según Eurostat, en noviembre y diciembre.

Las empresas industriales alemanas reducen puestos de trabajo por los efectos de la guerra comercial entre EEUU y China y la incertidumbre del "brexit", pero otros sectores contratan empleados (servicios y construcción), por lo que no se prevé un aumento del desempleo. En junio de 2019, el fabricante automovilístico Opel (600 empleos menos), el grupo químico BASF (6.000 empleos en todo el mundo, 3.000 en Alemania), el grupo turístico TUI y la estadounidense Ford (12.000 empleos en Europa), han anunciado fuertes recortes de empleo en todo el mundo que afectan especialmente a Alemania. Otras compañías como Volkswagen (5.000 empleos en cuatro años), Siemens (5.600 en todo el mundo), ThyssenKrupp o los grandes bancos Deutsche Bank y Commerzbank, reducen empleos desde hace tiempo.

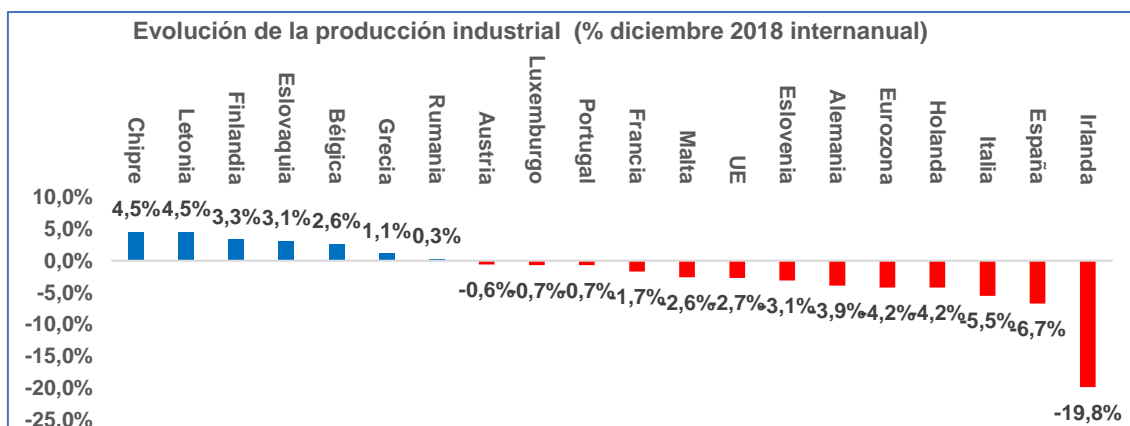
La industria alemana acusa al Gobierno de Merkel de dañar la economía y derrochar la confianza prestada: *"El Gobierno debe estimular las inversiones y las innovaciones. El gasto social crece y crece, mientras que la coalición solo quiere invertir 1.000 millones de euros adicionales en 2023 para la promoción de la inteligencia artificial"*, sentenció el presidente de la patrona (BDI). Kempf se quejó del aumento de los costes de energía, de la pesada carga fiscal y de la pésima infraestructura digital alemana, donde muchas empresas deben soportar una de las redes de Internet más lentas de la UE. Abogó por la abolición total del impuesto de solidaridad y pidió que la fiscalidad media de las empresas se reduzca de un 31% a un 25%, *"para salvaguardar la prosperidad y el empleo en Alemania"*.

Por otra parte, las tensiones comerciales internacionales y las incertidumbres en torno al Brexit están afectando a las exportaciones alemanas. Con una escasez de mano de obra cualificada y el deterioro de las infraestructuras públicas de comunicación y transporte. A lo que se une un mercado laboral que envejece a marchas forzadas.



Fuente Eurostat

La guerra comercial iniciada por EEUU ha provocado el resurgimiento de las políticas arancelarias que afectan especialmente a la eurozona, ya que es la región con mayor superávit por cuenta corriente, superior incluso que el de China. Además, el gigante asiático está viviendo una importante ralentización en los últimos trimestres que ha provocado un frenazo en las importaciones de productos europeos. Estos dos factores han congelado la demanda sobre la industria europea y, ante la caída de los pedidos, las empresas han optado por limitar su producción.



Fuente: Eurostat Get the data Created with Datawrapper

Europa es la más afectada por la guerra comercial porque es la primera potencia comercial mundial y la economía más abierta de todas. Todo el liberalismo que obstaculice el comercio internacional la perjudica proporcionalmente más que al resto. La amenaza proteccionista contra los coches europeos es muy insidiosa por su cuantía: *mientras que la tarifa-base a los productos chinos solo ha aumentado dos veces y media (del 10% al 25%), la pensada para la automoción*

europea la multiplica diez veces (del 2,5% al 25%). Aunque EEUU viene retrasando su imposición, lo cierto es que sigue generando incertidumbres que afectan al mercado europeo. Y también por quién es su principal perjudicado: Alemania¹⁵.

En el conjunto del año 2018, la producción industrial registró un crecimiento medio del 1,1% en la zona euro y del 1,3% en el conjunto de la UE. Los peores datos, de entre las grandes economías del euro, ocurrieron en Italia y España. Se trata de dos países con un peso alto del sector exportador sobre el PIB. Según las cifras de Eurostat, la producción en España tuvo el peor dato de toda la eurozona, solo superado por Irlanda (los indicadores de este país son muy volátiles, como consecuencia de que su economía tiene un elevado peso financiero).

Por otra parte, en enero de 2019, 19 socios firmaron en París una declaración conjunta en la que sostienen que la UE debe *“construir una política industrial que aliente la creación de grandes jugadores económicos”*. Entre otros, suscribían ese documento Francia, Alemania, Italia y España: *“Así como las grandes potencias no dudan a la hora de defender a sus campeones nacionales, Europa debe tener en cuenta en su política de competencia la evolución del entorno competitivo global en términos de inversión, comercio e industria”*.

La realidad es que se vienen produciendo proyectos destacados en el marco europeo y apoyados por políticas europeas, como el de microelectrónica, en el que Francia, Alemania, Italia y el R. Unido aportaron 1.750 millones que permitieron desbloquear otros 6.000 millones para la investigación. En el radar hay ya un plan de Alemania, Francia y Polonia para financiar *“baterías de próxima generación”* para vehículos eléctricos. Dentro de ese marco también podría entrar el desarrollo del 5G.

Pero en las plataformas digitales y la inteligencia artificial va por detrás de los americanos y los chinos, lo que hay que remediar cuanto antes. La autonomía estratégica, la soberanía económica y la creación de campeones europeos son los objetivos. Al mismo tiempo, la UE renuncia a aprobar una tasa comunitaria a los gigantes tecnológicos. Se preveía obligar a plataformas como Google, Facebook o Twitter a pagar más impuestos en Europa. Pero la iniciativa ha chocado desde el principio con el rechazo frontal de países que, como Irlanda - junto a Dinamarca, Finlandia y Suecia-, se sirven de rebajas de impuestos y prácticas fiscales agresivas para atraer a multinacionales. El último compromiso conjunto que Francia y Alemania pusieron sobre la mesa, el pasado diciembre de 2018, reducía considerablemente el nivel de ambición de la propuesta original de Bruselas. La nueva tasa gravaría únicamente la publicidad digital: *se libraban así la venta de datos y la actividad de las redes sociales*. Debía entrar en vigor en 2021 si antes no se logra un pacto a nivel internacional y expiraría automáticamente en 2025¹⁶.

¹⁵ Su mercado americano es muy relevante: para Daimler, el 25% de su exportación; para BMW, el 17%. Y ya se ha comprobado cómo un resfriado de este sector productivo alemán provoca la neumonía de la eurozona.

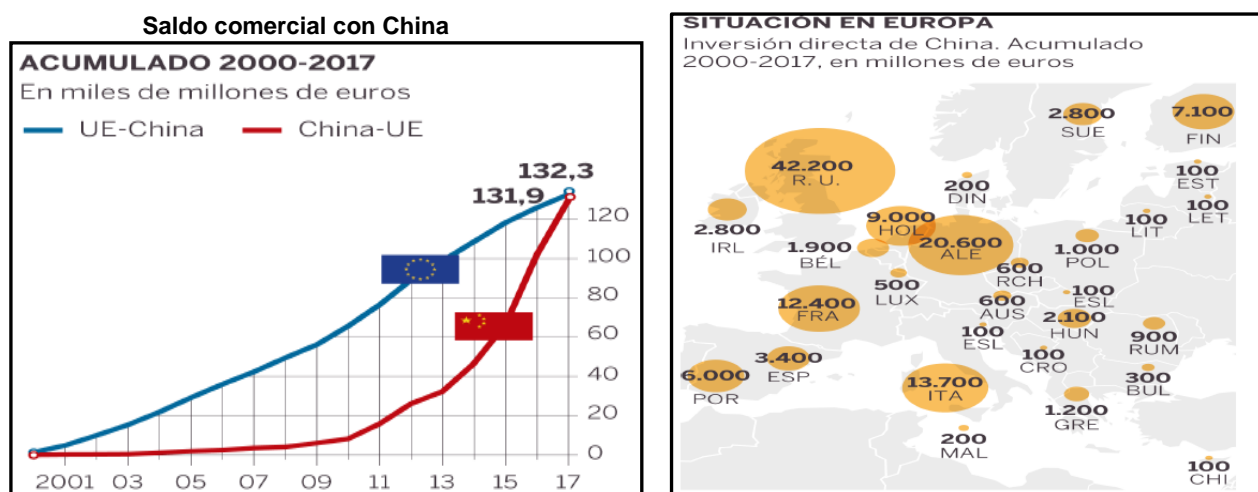
¹⁶ El Parlamento francés acaba de aprobar la *“tasa google”* y la reacción de Trump no se ha hecho esperar, amenazando con nuevos aranceles a Francia.

Por otra parte, y como consecuencia de la fallida aceptación, por parte de la Comisión Europea, de la fusión Siemens-Alstom -que venía fraguándose desde 2017 para crear un grupo con una facturación conjunta de 15.300 millones de euros y 60.000 empleados-, el gobierno alemán primero que, en febrero pasado ya generó la “Estrategia Industrial Nacional 2030”, y ahora el francés, decidieron aunar proyectos enmarcados en una política industrial y comercial al margen de las actuales reglas de la UE, facilitando los llamados “supercampeones”, empresas que puedan liderar la competencia mundial frente a EEUU y China.

El inicio de 2019 conlleva a Europa a buscar mecanismos para proteger sectores estratégicos y redes de comunicaciones y asegurar que las empresas compitan en igualdad de condiciones. A partir de marzo, la política de la UE hacia China inició un drástico giro hacia posiciones de fuerza frente al gigante asiático¹⁷. La cumbre europea impulsó una estrategia para transformar a Europa en la tercera voz de un mundo crecientemente dominado por Washington y Pekín.

Bruselas sigue creyendo que entre los 28 se impone la convicción de que solo si actúan unidos podrá surgir una tercera voz que compita con dos superpotencias como EEUU y China. En el último Consejo Europeo, intentó atar, de los países miembros, el compromiso de poner en marcha varias medidas para abordar las relaciones con un país al que consideran a la vez un socio estratégico y un “rival sistémico”.

El debate sobre las relaciones entre la UE y China tiene como dilema central si se debe negociar con Pekín de manera conjunta, de forma comunitaria, o cada Estado por su cuenta.



Países como Alemania o Francia defienden una postura común, ya que consideran que no se puede negociar con un coloso como Pekín de manera individual, puesto que las fuerzas estarán totalmente descompensadas. Por eso apuestan por políticas y leyes comunes respecto a China y creen que negociar

¹⁷ El sistema para penalizar -o incluso cerrar- el mercado público a los países que bloqueen a firmas europeas lleva atascado en el Consejo de la UE desde 2013. Sin embargo, Francia y Alemania, que hasta hace poco rechazaban alcanzar una posición común, son ahora los países que están cimentando ese frente.

bilateralmente con Pekín -o meterse de manera individual en la Nueva Ruta de la Seda- es tener una mirada a corto plazo, que sólo busca arrancar algo de inversiones y dinero a China.

Pero, países con un peso menor -como los ya citados Portugal, Malta o Grecia, o muchos de Europa del Este- consideran que cuando se hacen políticas “*comunes*”, finalmente sólo reflejan los intereses de los países más grandes de la Unión. Por ejemplo, países como Alemania o Francia (o Italia hasta hace poco) pedían que se llevara a cabo una supervisión más estricta de las inversiones chinas. Eso, argumentan algunas economías pequeñas, haría disminuir las inversiones chinas lo que les afectaría a ellas especialmente.

Por otra parte, Italia no es el único país que ha sucumbido a la diplomacia económica china, firmando un acuerdo con este país para facilitarle la llamada “*ruta de la seda china*” (BRI). Una de las vertientes que más preocupa a los socios comunitarios y a EEUU es que el acuerdo se alce, entre otras cosas, como caballo de Troya para la posible entrada de Huawei en la infraestructura de telecomunicaciones italiana.

Se pretende castigar en las contrataciones públicas a las compañías de países que cierran sus mercados a las europeas y estudiar las posibilidades que ofrece la legislación de la UE para impedir la competencia desleal que suponen las empresas chinas de capital estatal. La rivalidad se refuerza cuando se dispone de empresas con un músculo financiero casi ilimitado por el capital inyectado por Pekín. Además, la Comisión realizará un análisis sobre el despliegue del 5G para proponer una posición común europea.

Nº	Empresa	Países Bajos	Sector	Capital Bursátil
1	Microsoft Corp	Estados Unidos	Tecnología, software	733,27
2	Apple Inc	Estados Unidos	Tecnología hardware	709,69
3	Amazon.Com Inc	Estados Unidos	Tecnología y distribución	697,54
4	Alphabet Inc	Estados Unidos	Tecnología, internet	685,44
5	Berkshire Hath	Estados Unidos	Financiero	446,6
6	Facebook Inc	Estados Unidos	Tecnología, internet	409,59
7	Alibaba Grpdr	China	Tecnología y distribución	380,37
8	Tencent	China	Tecnología, internet	357,65
9	Johnson & Johnson	Estados Unidos	Farmacia	323,03
10	JPMorgan Chase	Estados Unidos	Banco	309,99
11	Exxon Mobil Corp	Estados Unidos	Energía	290,57
12	Visa Inc	Estados Unidos	TIC	256,9
13	Walmart Inc	Estados Unidos	Distribución retail	256,55
14	ICBC	China	Banco	250,8
15	Bank Of America	Estados Unidos	Banco	248,59
16	Nestle Sa-Reg	Suiza	Alimentación	240,33
17	Unitedhealth Grp	Estados Unidos	Salud	229,76
18	Royal Dutch Sh	Países Bajos	Energía	227,14
19	Procter & Gamble	Estados Unidos	Consumo	217,57
20	Pfizer Inc	Estados Unidos	Farmacia	216,46
21	Samsung Electron	Corea del Sur	Tecnología hardware	215,66
22	Boeing Co/The	Estados Unidos	Aeroespacio y defensa	208,55
23	Roche Hldg-Genus	Suiza	Farmacia	206,55
24	Intel Corp	Estados Unidos	TIC	205,17
25	Novartis Ag-Reg	Suiza	Farmacia	202,33
26	Chevron Corp	Estados Unidos	Energía	201,41
27	Verizon Communic	Estados Unidos	TIC	201,29
28	Mastercard Inc	Estados Unidos	TIC	201,24
29	Wells Fargo & Co	Estados Unidos	Banco	199,14
30	Cisco Systems	Estados Unidos	TIC	196,27
31	At&T Inc	Estados Unidos	TIC	195,96
32	CCB	China	Banco	192,54
33	China Mobile	Hong Kong	TIC	191,95
34	Home Depot Inc	Estados Unidos	Consumo	191,92
35	Merck & Co	Estados Unidos	Farmacia	183,29
36	Toyota Motor	Japón	Automóviles	172,14
37	Coca-Cola Co/The	Estados Unidos	Alimentación	170,07
38	Petrochina	China	Energía	169,13
39	Tsmc	Taiwán	TIC	168,63
40	Abc	China	Banco	164,54
41	Oracle Corp	Estados Unidos	Software	163,93

Fuente: Economipedia. Datos de cierre del 15 de febrero de 2019. En miles de millones de EUROS.

En este marco, se constata que “Hoy, entre las 40 mayores compañías del mundo, solo cinco son europeas”¹⁸ y entre las 20 empresas con mayor valor en Bolsa del mundo, la única representante de la UE es la angloholandesa Royal Dutch Shell.

La economía española y las incertidumbres políticas

A partir del 2013, la economía nacional inicia su recuperación tras la fuerte recesión sufrida durante casi cinco años, siendo el dato del PIB 2018 un 17,8% superior al punto mínimo de los últimos años, alcanzando un valor absoluto 1,2 billones de euros ese año.

La economía española se cuenta en estos últimos años entre las más dinámicas de la UE, alcanzando en el trienio 2015-2017 tasas superiores al 3%, situándose en el 2,5% en 2018 -casi un punto por encima del comunitario- y encadenando nuevos años de aumento. El empleo aumenta a un ritmo del 2,6% en ese año. La demanda interna continuará actuando como uno de los principales soportes del crecimiento, consecuencia del aumento del empleo, y apaciguando el deterioro de la exportación.

Desde finales de 2015, cuando el PIB superó el 4% interanual, el crecimiento se ha desacelerado, aunque el país puede presumir de crecer por encima de la media UE (ocho décimas de la eurozona). España tiene recorrido para seguir siendo un país aventajado a pesar de la caída del ritmo de crecimiento, condicionada por el enfriamiento de la economía europea. Pero, la Comisión Europea, advierte de que si se tiene en cuenta el ciclo económico “*el déficit del Gobierno de España sigue persistentemente alto*”, en especial porque el nivel impositivo es bajo respecto a los gastos.

La recuperación del empleo y los salarios, una política fiscal expansiva, el escaso ahorro, el aumento del crédito al consumo, la recuperación de la construcción, unos tipos de interés reales negativos y el abaratamiento del petróleo contribuyen a este impulso añadido. Los servicios mantienen el pulso expansivo por el auge del consumo público y privado, y la creación de empleo en situación similar al resto de Europa. El problema surge en la industria y en el sector exportador que han entrado en un estancamiento estructural, consecuencia del parón del comercio internacional desde finales de 2018. Una situación que también viene acompañada del resto de la Unión.

De todas formas, resiste la ralentización mejor que el resto de la eurozona. A partir de los datos conocidos entre enero y marzo, la proyección de crecimiento de España mejora mientras que la de la eurozona empeora, según el Banco de España. Las bases del crecimiento son buenas, en tanto que se sigan registrando superávits con el exterior, y, por lo tanto, continúe bajando la deuda externa, auténtico talón de Aquiles que deja a la economía española muy vulnerable a las turbulencias de los mercados.

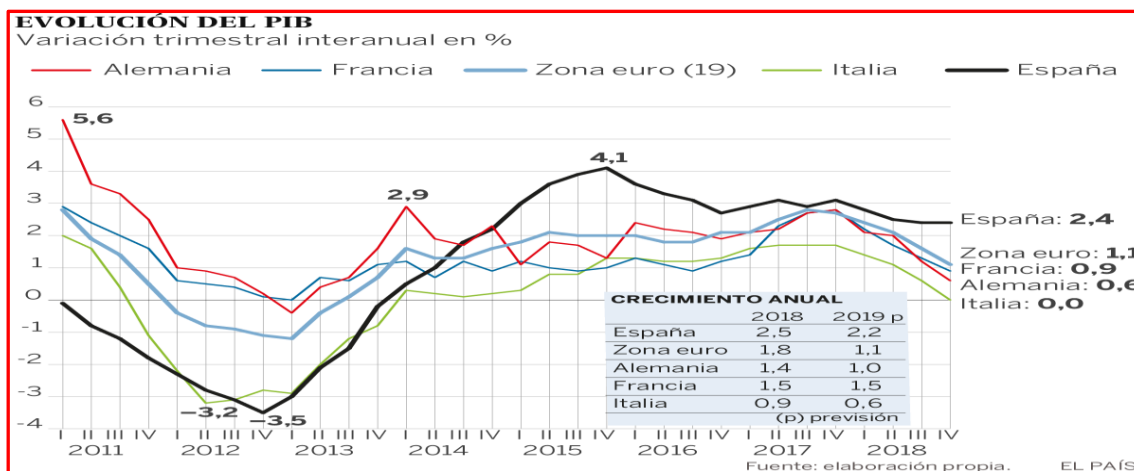
¹⁸ Empresas más grandes del mundo 2019. Economipedia.

La diferencia entre España y las principales economías europeas radica en la fortaleza de la demanda interna: *el consumo y la inversión de los agentes domésticos*. El hecho de que los hogares destinen casi toda su renta al consumo genera un crecimiento desequilibrado, como ya ocurrió durante la burbuja financiera. La tasa de ahorro de los hogares se ha hundido hasta el 4,7% en 2018, lo que significa el dato más bajo de la serie histórica. En la eurozona, el ahorro de los hogares asciende hasta el 12,1%, esto es, casi el triple que en España.

El consumo interno creció un 4%. La demanda nacional contribuye en 2,9 puntos al crecimiento del PIB de 2018, respecto a 2017, dato similar al del año anterior. Esta fortaleza del consumo explica por qué la demanda interna ha permitido mantener un ritmo de crecimiento muy alto en la segunda mitad del año a pesar de la ralentización del resto de Europa. En 2018, el consumo aportó el 90% del crecimiento del PIB, lo que explica por qué el consumo interno crece más que en otros países a pesar de que la masa salarial vaya más retrasada.

La demanda interna desplaza a la inversión y a las exportaciones. La demanda externa presenta una aportación de -0,4 puntos, cinco décimas inferiores a la de 2017. El valor del PIB a precios corrientes para el conjunto del año 2018 se sitúa en 1.206.878 millones de euros, un 3,5% superior al de 2017. La moderación del crecimiento viene del exterior, por la acusada ralentización de las exportaciones. La lenta agonía del sector exportador se tomó un respiro en el inicio del año 2019 y logró que la demanda externa generase la primera aportación positiva al PIB en dos años.

Ese movimiento no ha sido más que un espejismo. Las empresas exportadoras se están preparando para un verano complicado por la caída de los nuevos pedidos y por el incremento de los costes de producción y ya anticipan la primera destrucción de empleo desde el inicio de la recuperación, hace ya más de seis años. Pesimismo que surge del parón registrado en la entrada de pedidos en el sector exportador. Como no hay demanda de producción, las empresas no están pensando en contratar, sino en despedir. El indicador de entrada de pedidos para los próximos tres meses se ha frenado hasta su peor nivel desde 2012, justo cuando la crisis europea estaba en su peor momento.



La incertidumbre del Brexit es un condicionante para el crecimiento regional y de la capacidad exportadora de bienes y servicios. El R. Unido, además de generar una quinta parte de los ingresos por turismo, es una de las economías con las que España mantiene un superávit comercial y donde se sitúa la mayor inversión directa española en el extranjero. A lo que también se añade las incertidumbres en materia de política comercial que propicia EEUU. Todo ello, en un marco de inestabilidad política interna.

Contra todo pronóstico, la actividad se aceleró en medio de la ralentización global. En el primer trimestre de 2019 el PIB creció un 0,7%, una décima más que en el trimestre anterior, algo que no sucedía desde finales de 2017. Entre enero y marzo, la ocupación creció un 0,7%, lo mismo que el PIB. Es decir, solo se creció por el incremento del empleo, pero no porque mejore la productividad. Y lo hace empujado por la inversión empresarial y el empleo, sobre todo en la construcción, que además se beneficia de un fuerte aumento de la población. La inversión recobra impulso y suma un 1,5% trimestral, a pesar de no hacerlo las exportaciones. La de maquinaria, la más dedicada a exportar en el futuro, crece un 3,8%. Íntimamente ligado a estos datos de inversiones, la industria rebota con un robusto 1,4% trimestral.



España se adapta bien a la nueva economía de servicios, caracterizada por ofrecer mucho puesto de trabajo poco cualificado. Registró en 2018 su quinto incremento anual consecutivo (6,1%) y el segundo más elevado en doce años tras el de 2017 (6,4%), según datos del INE. El sector acumula ya 64 meses de ascensos interanuales. El empleo creado por los servicios creció un 2,2% el año pasado, también su quinto incremento anual consecutivo, aunque algo más moderado que el conseguido en 2017. Fue más acusado en los otros servicios (2,6%) que en el comercio (1,6%).

Todas las actividades del sector servicios experimentaron incrementos en su facturación el año pasado. Así, las ventas del comercio avanzaron una media del 6,3% respecto a 2017, con aumentos del 8,1% en la venta y reparación de vehículos, del 7,7% en el comercio mayorista, y del 2,7% en el comercio minorista. De hecho, el empleo en el comercio, transporte y hostelería mejora un 3% interanual. La otra rúbrica que apuntala la creación de puestos de trabajo son las actividades profesionales, con un avance del 4,5%. Aunque, se seguiría

creando empleo, buena parte se haría a bajos costes y ocupando a extranjeros atraídos por la recuperación de sectores que requieren mano de obra poco productiva.

Uno de los motivos del mayor vigor exhibido reside en la construcción, que sigue mostrando una gran fortaleza al anotarse en el primer trimestre de 2019 un incremento del 1,8% y dispararse la ocupación del sector un 11,3% interanual. En actividades inmobiliarias, el empleo protagoniza un salto del 9,8%. Semejante recuperación no se está viendo acompañada de una fuerte alza del endeudamiento, como en otras épocas, y todavía se está lejos de las cotas de producción alcanzadas durante la burbuja. Llama la atención que el gasto de las familias no haya aumentado más después del incremento del salario mínimo y todas las transferencias públicas en pensiones y salarios de las Administraciones.

La realidad es que la mayor parte del incremento de las rentas salariales se ha producido por la creación de empleo. La entrada en la ocupación de alrededor de medio millón de trabajadores al año es lo que ha permitido que la masa salarial se haya incrementado durante la recuperación. Si bien es cierto que la masa de salarios ha crecido menos que el PIB y, por tanto, ha perdido peso en la economía, también lo es que se ha logrado un reparto más distributivo. Es así porque quienes han accedido al empleo estaban en el paro, esta es, sin duda, la mejor receta contra la desigualdad.



Es preciso destacar la evolución de la inversión directa extranjera, que representó en 2018 una quinta parte del total de inversiones realizadas en nuestro país durante ese año, y un 71% más que en 2017. Esta tendencia muestran que las expectativas que genera la economía siguen siendo relativamente favorables. El incremento de la inversión extranjera es uno de los pilares de la expansión por su aportación tanto a la demanda

interna como a creación de empleo y a la competitividad de las empresas. También contribuye al diferencial de crecimiento, con respecto a nuestros principales socios europeos, donde la entrada de capital internacional ha tendido a disminuir, en especial en Italia y R. Unido.

Más empleo y mayor precariedad en la economía

Cinco años de crecimiento han permitido que España recupere, e incluso supere, el PIB previo a la crisis. Pero las cicatrices de la Gran Recesión aún son muy profundas. Un informe de la Comisión Europea advierte de los peligros para la cohesión social que entrañan el elevado desempleo.

Bruselas solo ve “*ligeras mejoras*” en el terreno laboral y social. La tasa de empleo sigue siendo baja, resaltando dos factores que ponen de manifiesto la actual precariedad del mercado de trabajo: la posición de “*desventaja*” que aún sufren las mujeres respecto a los hombres y el “*uso generalizado de contratos temporales*”, que considera un freno para el “*crecimiento potencial*” y para la “*cohesión social*” del país. Además de la alta proporción de ciudadanos que permanecen “*en riesgo de pobreza o exclusión social*” a pesar de la época de bonanza.

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2018 fueron positivos, cerrando un ejercicio muy favorable en materia de empleo. Al menos, en lo que se refiere a la creación de empleo y la reducción del paro, que no es poco. Se evidencian que nuestra economía no tiene problemas para crear empleo cuando la economía crece, como sucede desde 2014. No es una circunstancia que tenga que ver con ninguna reforma laboral realizada, ni con ningún cambio de política económica (aunque esto último sí incide en el hecho de que la actividad crezca más o menos y, por tanto, indirectamente sobre el volumen de empleo generado). Este comportamiento se debe a la estructura productiva, más intensiva en empleo que en otras economías y a la escasa calidad y, en consecuencia, productividad del empleo creado. En términos generales, creamos mucho y mal empleo. Y poco se hace para cambiar este estado de cosas.

En 2018 había 22,9 millones de activos en el mercado laboral español (64,5% hombres) y 19,6 millones de ocupados (54,4% hombres, 16,7 millones de personas a tiempo completo y 2,9 a tiempo parcial) y 16,5 millones de personas asalariadas (12 millones con contrato indefinido y 4,4 millones de temporales y el 27,5% de temporales, frente al 14,4% de la UE). En 2018 persisten 3,3 millones de personas desempleadas (16,3% la tasa de paro femenino y 12,8% masculino), situándose la tasa de paro en el 14,5%, frente al 6% de la UE. Un 34,6% son jóvenes menores de 25 años, frente al 15,3% de media UE en octubre del mismo año. Solo el 56,7% de los y las paradas recibieron algún tipo de prestación¹⁹.

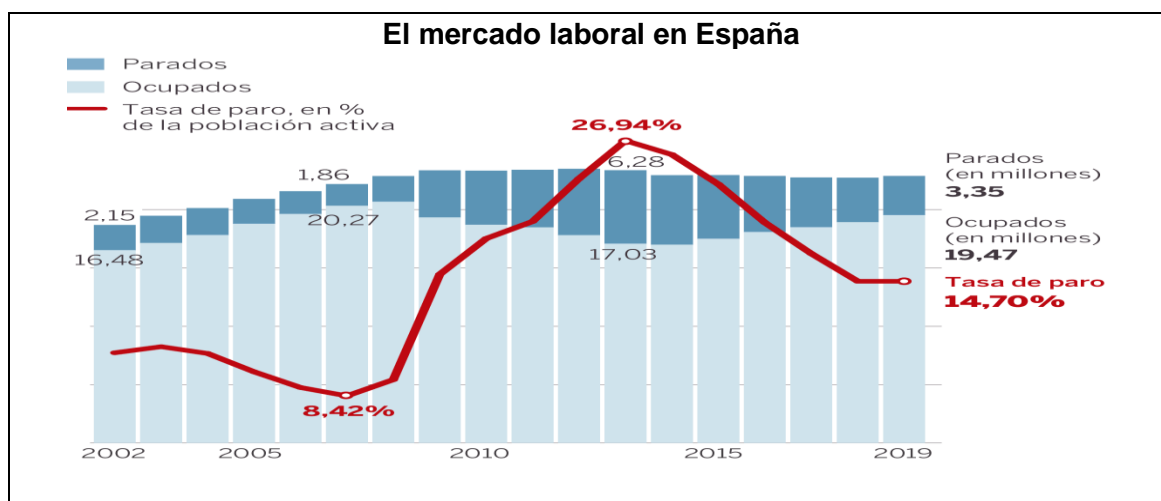
El indicador más preocupante es la alta tasa de paro, agravada por su larga duración y el agotamiento de las prestaciones por desempleo²⁰, pero hay otros muchos indicadores de la precariedad: *la desigualdad laboral, la brecha de género, la alta temporalidad, las jornadas parciales, las horas extras no pagadas o el deterioro de los indicadores de salud laboral y de accidentes de trabajo.*

Entre diciembre de 2007 y diciembre de 2013 se destruyeron 3,5 millones de puestos de trabajo. Entre diciembre de 2013 y 2018 se han creado 2,6 millones de empleos, a lo que ha contribuido el aumento de las plantillas en la Administración en los últimos tiempos. Prácticamente todas las regiones tienen ahora menos ocupados de los que tenían antes de que estallara la recesión

¹⁹ Fundación Altedia Creade. “*Informe sobre Estadística de Contratos. Datos Acumulados. Periodo: Año 2018*”.

²⁰ La duración de la crisis y la profunda destrucción de empleo han enquistado el paro de larga duración -que todavía afecta a la mitad de la población en paro-. Poco más de la mitad de ella cobra una prestación y la mayoría solo la asistencial.

económica. De hecho, solo Madrid, Illes Balears y Canarias han recuperado por completo sus mercados laborales y tienen más empleo del que registraban a finales de 2007.



Fuente: INE. EPA

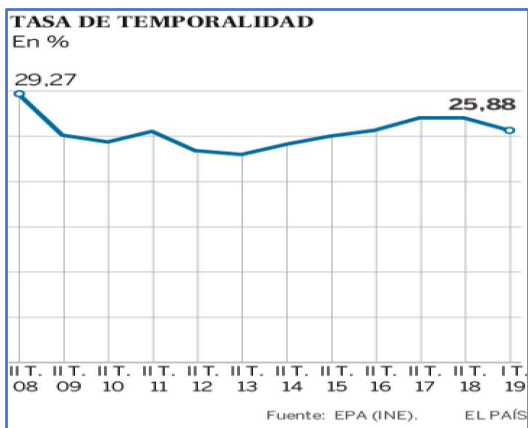
Respecto a enero del año 2007, se siguen perdiendo más de 700.000 ocupados (-6,9%), el 95% de ellos en los sectores agrario (el 11% de los ocupados), industria (uno de cada cinco ocupados) y construcción (uno de cada dos). Servicios supera el 10% el número de ocupados en este período. Mientras tanto, 1.053.400 familias tienen a todos sus miembros en paro. Esta cifra es casi la mitad desde el dato máximo de principios de 2013, cuando se superaron los dos millones. Y 593.500 hogares en los que no hay perceptor alguno de ingresos (773.000 en 2013).

Los datos de creación de empleo en el acumulado de los últimos cinco años de recuperación económica muestran una imagen más diversificada por ramas de actividad de la que existía al inicio de la recuperación. En términos relativos, las ramas que más incrementan su empleo asalariado en esta época son actividades inmobiliarias (92%), hostelería (36%) y construcción (27%), lo que ejemplifica claramente cuáles son las apuestas económicas que se están impulsando. Por el contrario, las ramas de servicios financieros y de seguros, empleo doméstico y suministro de electricidad, gas, vapor y aire cuentan en 2018 con menos empleo asalariado del que tenían al final de la recesión.

Menos desempleo y más desigualdad

El descenso del paro se está produciendo a costa de la alta temporalidad y la acusada precariedad del empleo generado, con registros más negativos que en el año 2017. El 26,9% de todos los asalariados tienen un contrato con fecha de caducidad. Es cierto que este porcentaje no supera el 30% con el que comenzó la crisis, pero su aumento constante -en paralelo al empleo- demuestra que la crisis y la recuperación no han traído un cambio de patrón al mercado laboral²¹.

²¹ Informe de coyuntura laboral. Diciembre 2018. Gabinete Económico Confederal de CCOO.



Fuente: INE. EPA

La tasa de temporalidad aumentó poco, apenas una décima respecto al año anterior; pero el problema es que es casi el doble de la media de la UE, y que no para de aumentar tendencialmente desde mediados de 2013. En la ocupación se sustituyen los contratos fijos y temporales a jornada completa por temporales y a tiempo parcial. Donde antes había un contrato hoy hay dos o tres, pero peor retribuidos.

El empleo a jornada parcial es otro de los responsables de la baja calidad del mismo. No tanto porque su volumen relativo sea muy elevado (supone el 14,8% del total, y se viene reduciendo suavemente desde 2014, tras crecer mucho en el quinquenio anterior), sino por su carácter eminentemente involuntario. Más de la mitad de este tipo de empleo (52,8%) es aceptado a falta de un empleo a jornada completa, que es la preferencia del trabajador. Y tres de cada cuatro empleos parciales son ocupados por mujeres, lo que constituye una de las fundamentales vías de segmentación y desigualdad laboral entre ambos sexos. La tasa de actividad de las mujeres es inferior en 11 puntos porcentuales a la de los hombres; el empleo en la industria y en la construcción está muy por debajo del registrado en 2007, y en estos momentos el paro de larga duración en España (parados que llevan más de 12 meses buscando empleo), aunque ha bajado en el último trimestre, todavía es el 6% de la población activa, más del doble de la media de la UE.

En el primer trimestre de 2019, España creó casi 600.000 empleos (3,14%), la cifra más alta desde 2007, pero el paro sube. El desempleo aumenta entre enero y marzo de forma importante -la mayor subida desde 2013- y eleva la tasa de desempleo al 14,7%. La tasa de temporalidad se ha reducido muy poco en este período (25,9%), mientras que los 12.124.000 asalariados con contrato indefinido en España, refleja el máximo de la serie histórica.

La creación de empleo sigue impulsada por el dinamismo del sector servicios, en los últimos 12 meses. El sector de la construcción mantiene su recuperación y la industria incorporó pocos empleos. El empleo público creció hasta situarse en 3,2 millones en el primer trimestre, el máximo desde el último trimestre de 2011. La evolución del empleo durante 2018 es reveladora: *apenas el 5% los generó el sector industrial*. Más de un 20% nacieron en la construcción y más de un 70% en el sector servicios.

La OCDE hace un diagnóstico bastante duro de la calidad del empleo en España. Alerta de la elevada presencia de infraempleo o el empleo precario: *tiene una de las tasas de empleo temporal más altas (11,2% de media en la OCDE); y también abundan los autónomos que dependen de un solo cliente (TRADE), un grupo que se considera muy vulnerable y que se han disparado un 40% desde el 2010, hasta suponer el 10,1%.*

Recuerda que las mujeres siguen siendo el grupo con mayor riesgo de empleo precario, de bajos salarios y de desocupación; pero cada vez más jóvenes sin estudios superiores y cada vez más hombres, también, se están sumando al grupo de riesgo. El organismo estima que la tasa de jóvenes que no estudian ni trabajan (Nini) en España es del 19,9%, *"la tercera más alta de la OCDE y cuatro puntos porcentuales más alta que en 2007"*. Y la formación no garantiza en España un salario alto: *"Incluso los trabajadores jóvenes altamente cualificados enfrentan serias dificultades: en 2016 el riesgo de recibir un salario bajo fue del 44%, 20 puntos porcentuales más alta que en 2006"*.

La realidad sigue manifestando que la reducción del desempleo se está logrando en gran medida a costa de disparar de nuevo los niveles de precariedad en un mercado de trabajo ya muy castigado tras años de crisis y despidos masivos, altas tasas de paro, devaluación salarial, aumento de la explotación laboral y de las horas extras no pagadas, ... Más de la mitad del empleo asalariado es precario en España, considerando la población afiliada al régimen general de la Seguridad Social por tipo de contrato y excluidos los sistemas especiales Agrario y de Empleados de Hogar. Las empresas multiservicios, los falsos autónomos, los becarios, la economía de plataformas, etc., han introducido nuevas vías de fractura de las condiciones del empleo para las que no hay aún indicadores consolidados de análisis, pero que sin duda han elevado el grado de precariedad laboral e intensificado la devaluación salarial en nuestro país y en todo el mundo²².

AÑO	Contrato indefinido			Contrato temporal		Formación y prácticas	Otros
	Completa	Parcial	Fijo discontinuo	Completa	Parcial		
2007	49,8%	7,4%	1,4%	26,0%	8,0%	1,3%	6,1%
2009	53,1%	8,7%	1,7%	19,7%	8,4%	1,0%	7,3%
2011	51,9%	9,6%	1,9%	17,6%	9,6%	1,0%	8,4%
2013	51,6%	10,8%	2,2%	15,1%	11,0%	1,1%	8,2%
2015	48,9%	11,0%	2,3%	16,7%	11,3%	1,8%	7,9%
2017	47,9%	11,0%	2,4%	18,4%	11,4%	1,4%	7,5%
sep-18	48,1%	11,1%	2,4%	18,9%	11,1%	1,2%	7,3%

Fuente: Gabinete Económico de CCOO, a partir de los datos de la Seguridad Social

Evolución de la renta salarial

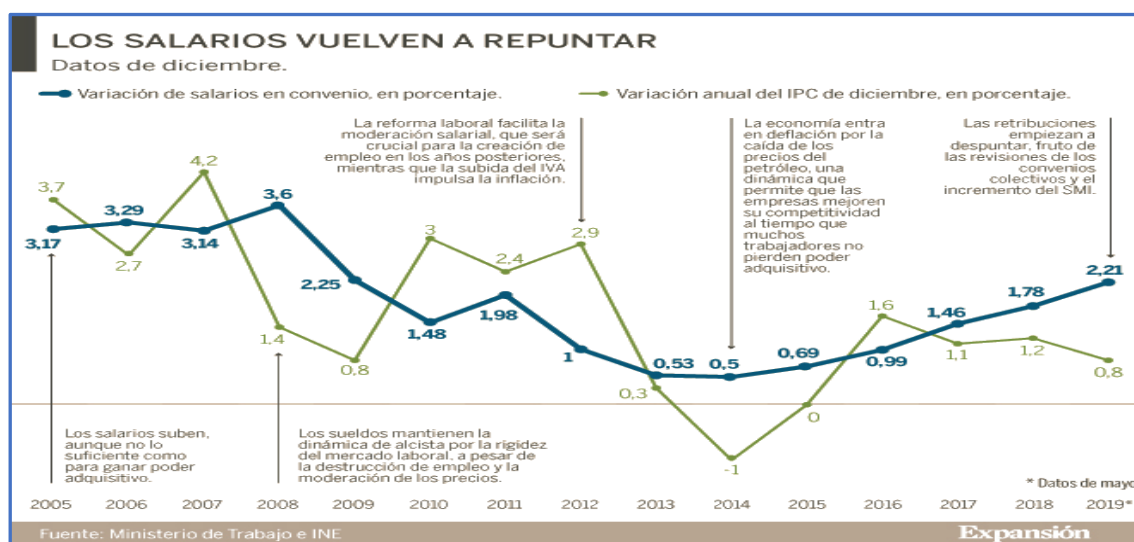
En 2017, la ganancia media anual fue de 23.646,50, un 2,1% sobre el año anterior. El salario más frecuente se situó entrono a los 17.482 euros. El de la mujer fue de 20.600 y de 26.400 el de los hombres (78,1%). El 18,8% de las mujeres tuvieron ingresos salariales inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), frente al 7,8% de los hombres. La actividad económica con mayor salario fue el suministro de energía eléctrica, seguido de las actividades financieras y de seguros, de las TIC e industria extractivas. Hostelería y otros servicios tuvieron los menores salarios (14.500 y 12.600 euros, respectivamente)²³.

²² Economistas Frente a la Crisis. Enero 2019.

²³ *Informe Encuesta Anual de Estructura Salarial. Año 2017*. Alberto Pérez García. Director de Relaciones Institucionales. Director General Fundación ALTEDIA-CREADE.

En España, el crecimiento de los salarios estuvo estancado hasta prácticamente la segunda mitad de 2018, cuando finalmente se ha apreciado un repunte. De hecho, el ritmo de revalorización de las retribuciones apenas ha servido para compensar la inflación y evitar así pérdidas de poder adquisitivo. Fruto de la subida del salario mínimo, del incremento de cotizaciones y de las mejoras de los convenios, la remuneración por asalariado se eleva un 1,3%.

Las rentas salariales crecieron sistemáticamente a un ritmo inferior al PIB, por lo que el matiz está en cómo se ha repartido esa renta entre la sociedad. La mayor parte de la nueva renta salarial se ha destinado a contratar a nuevos trabajadores, no a subir los salarios. Pero la renta de los hogares no se incrementa únicamente por la creación de empleo, sino por la subida de los salarios y las pensiones.



Las retribuciones crecen al calor de la mayor presión sindical en la negociación colectiva, la mejora de los sueldos en la Administración públicas y la subida del salario mínimo. Las retribuciones avanzan a un ritmo de entre el 2,2% y el 2,4%²⁴, Esta cifra, junto con el hecho de que la inflación se sitúa en el 0,8% (también según el INE), ha provocado que el poder adquisitivo de los asalariados avance al menos un 1,4% en lo que va de año 2019.

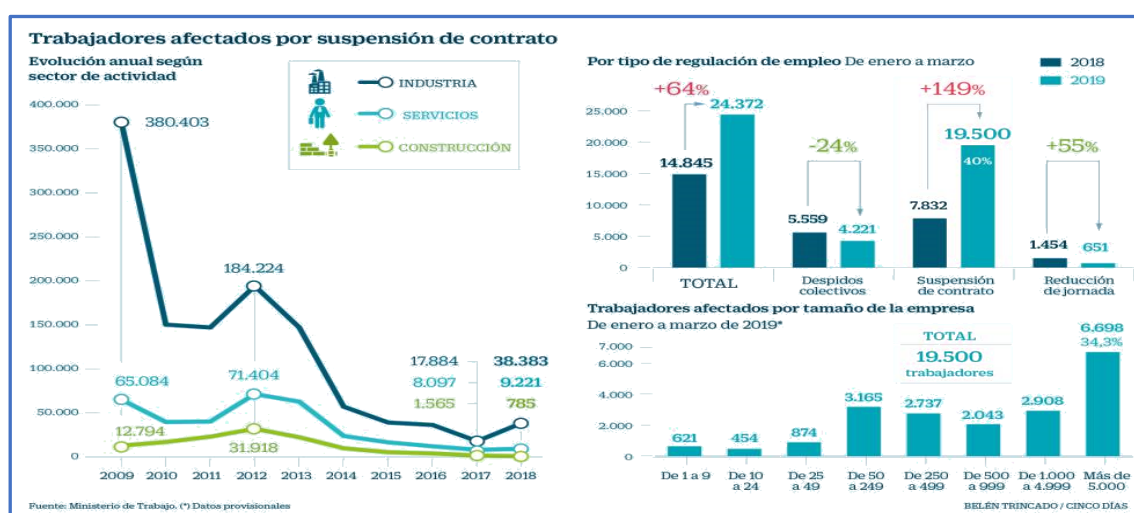
En los últimos cuatro trimestres, la partida total dedicada a la remuneración de los asalariados ha engordado a tasas anuales del 4%, por encima de la evolución del PIB. Y eso se debe a que los excedentes de las empresas llevan justo esos cuatro últimos trimestres avanzando a ritmos menores que la actividad. Algunos economistas advierten de que las subidas de salarios no están acompañadas de incrementos similares en la productividad. Cuando eso ocurre, la empresa se enfrenta al final a dos opciones: *o bien se come los márgenes e invierte y contrata menos; o bien sube precios y se arriesga a perder competitividad.* Otros expertos

²⁴ Según se tome la estadística de salarios pactados en convenio hasta mayo, que publica el Ministerio de Trabajo, o el Índice del Coste Laboral del primer trimestre del año, que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE).

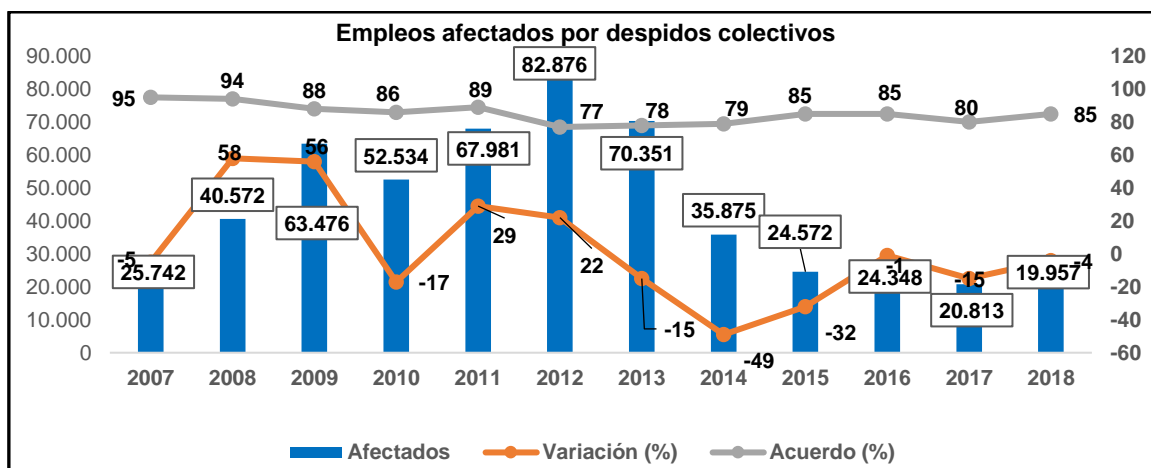
defienden que en tanto que los salarios suban menos que en la zona euro, tal y como está sucediendo, se estaría preservando la competitividad.

Evolución de los expedientes de regulación de empleo

Uno de los indicadores que ha marcado la recuperación del mercado laboral ha sido el constante descenso de los expedientes de regulación de empleo (ERE), ya fueran despidos colectivos o suspensiones temporales de empleo y recortes de jornada. Sin embargo, ya el año pasado se interrumpió esta senda de descensos consecutivos de los ERE desde 2009, y los trabajadores afectados por uno de estos ajustes crecieron casi un 27% en 2018, hasta 72.896 empleados (75% el de suspensión de jornada y reduciéndose el de despido un 4%).

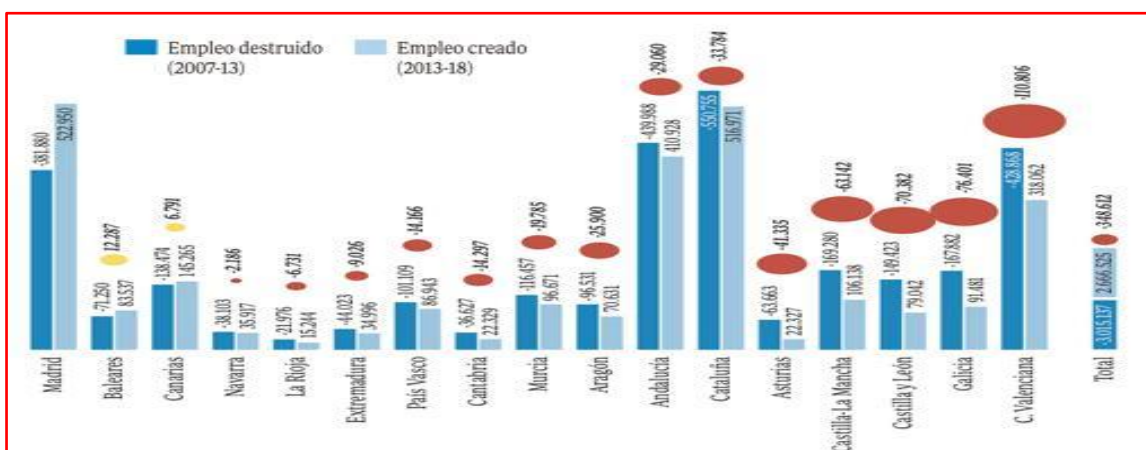


El despido colectivo ha afectado, sobre todo, al sector de servicios, con casi el 68% del total; seguido del industrial, con casi un 29% y resultados similares a los del año 2017; el de construcción, con el 3%; y en el agrario con un escaso 1%. La PYME ha acaparado el 59% de los ERE, donde el 85% lo fue con acuerdo, el 66% pertenecen a empresas de más de 50 empleos y el 57% fue despido en cinco provincias (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Murcia).



Fuente: MITRAMISS

Este indicador de la marcha de la economía, lejos de mejorar, ha empeorado en el primer trimestre de 2019. Pero todo este aumento obedece a que, en el arranque del año, se han disparado las suspensiones temporales de empleo (ERTE) por su uso recurrente en la industria, la mayoría son del sector del motor. Los trabajadores afectados crecieron un 29% (77% hombres) mientras que los despidos se redujeron un 24% (60% hombres). Con un incremento de los de suspensión del 149% (81% hombres), frente a la disminución del 55% de los de reducción de jornada (62% hombres). El 69% del despido colectivo se produjo en PYME y el 89% con acuerdo. Por otra parte, los despidos colectivos incrementaron un 20% en el sector agrario, un 22% en la construcción y se redujeron un 43% en la industria y un 22% en los servicios.



Fuente: España aún necesita crear 350.000 empleos para cerrar las heridas de la crisis. ABC, 16 de enero de 2019

En el Acuerdo de Negociación Colectiva 2018-2020, los sindicatos y la patronal hicieron una petición conjunta al Gobierno para que subvencionará los expedientes de regulación de empleo temporal y evitar así despidos, reclamando “una nueva medida” en forma de prestación que compensara el recorte salarial del trabajador inmerso en un ERTE y al tiempo, le financiara formación en los días que no acudiera a trabajar por el ajuste.

Además, la inmensa mayoría del empleo se ubica en sectores de actividad de bajo contenido tecnológico. Los años de recuperación económica muestran que sigue sin consolidarse un cambio real del modelo productivo y de la creación de empleo: *el 92% de los puestos de trabajo netos creados pertenecen a actividades de contenido tecnológico bajo y solo el 8% del empleo creado se concentra en ramas de contenido tecnológico medio y alto de la industria y los servicios.* Eso explica que en estos casi cinco años de recuperación económica el peso del empleo en sectores de media y alta tecnología apenas haya variado y se mantenga en el 7%.

Las políticas de inversión en I+D

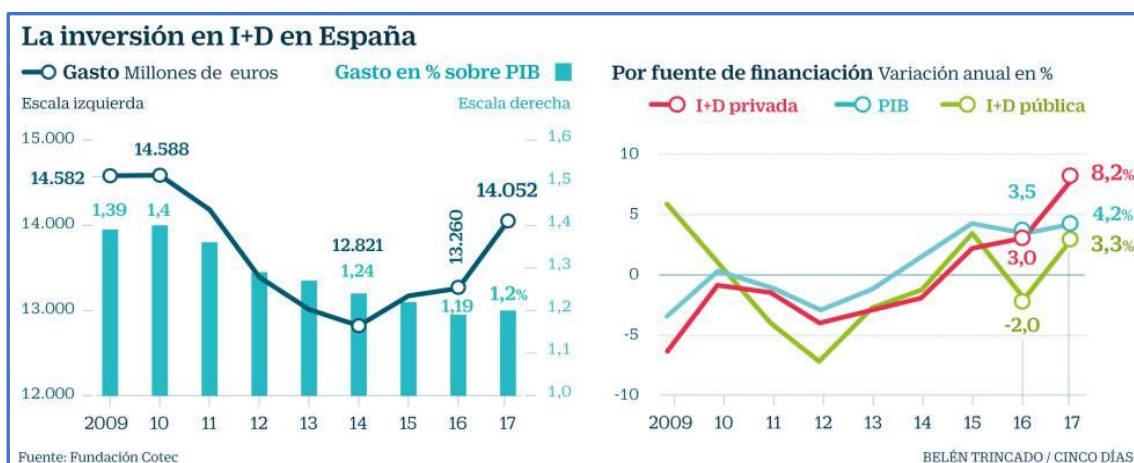
Desde 2009, la inversión española en I+D+i ha caído un 5,8%, mientras que en la UE ha subido un 22%. La partida consignada en 2015 recortaba el montante de inversión pública a menos de 6.400 millones de euros. Se imponía una salida

del déficit público y la reducción del gasto era una vía. “La política de I+D+i ha tenido una contribución excesiva al proceso de consolidación fiscal”, asegura la fundación para la innovación tecnológica COTEC en su Informe Innovación en España de 2019. A tenor de lo expuesto, nuestro país ha reducido su gasto presupuestario en este concepto un 32% desde el comienzo de la crisis.

Por otro lado, del gasto consignado en los PGE sólo se ejecutaron 3.278 millones, el 46%. Esto supone que únicamente uno de cada dos euros destinados a estas políticas llegó a cumplir su cometido. “Ha habido una severa reducción de recursos públicos destinados a la I+D+i”. Y la disminución de partidas, sumada al menor grado de ejecución de las mismas, ha dado como resultado una caída del 60%.

Recibió durante 2017 -últimos datos disponibles- un total de 14.052 millones de euros, un 6% más que en el ejercicio anterior, sumando así tres años consecutivos de crecimiento. Además, por primera vez en siete años, aunque de forma muy tenue, el porcentaje destinado a investigación crece en relación al PIB, pasando del 1,19% de 2016 al 1,20% de 2017. Lejos queda, no obstante, el máximo del 1,40% de 2010. Es la primera vez en siete años que la I+D aumenta su peso en la estructura productiva. El objetivo de destinar el 2% del PIB a la I+D+i en 2020 es ya “un reto imposible de alcanzar”, según el informe anual de COTEC.

Por primera vez, es el sector privado el que ha marcado el ritmo al aumentar en un 8,2% sus dotaciones en 2017, muy por encima del 3,3% de las entidades públicas. Existe un mayor dinamismo privado en los últimos años. Sin embargo, casi 5.000 compañías menos hacen I+D hoy respecto al inicio de la crisis. Se trata de un 30% menos de empresas con programas de innovación que en 2008 y las que lo hacen han aumentado más de un 40% su presupuesto innovador.



En nuestro país la financiación privada de la I+D está por debajo de la media europea, que se sitúa en el 55%, y de la mundial. Contrasta de forma clara con el 60% que representa en EEUU y Alemania. Pero mucho más con las tres cuartas partes que el capital privado supone en la innovación de Japón, Corea del Sur y China. En España ronda el 46% desde comienzos de siglo, lo que califica de situación de estancamiento. El 8% restante de la inversión en I+D+i procede del extranjero. Esta fuente casi se ha duplicado desde el año 2000.

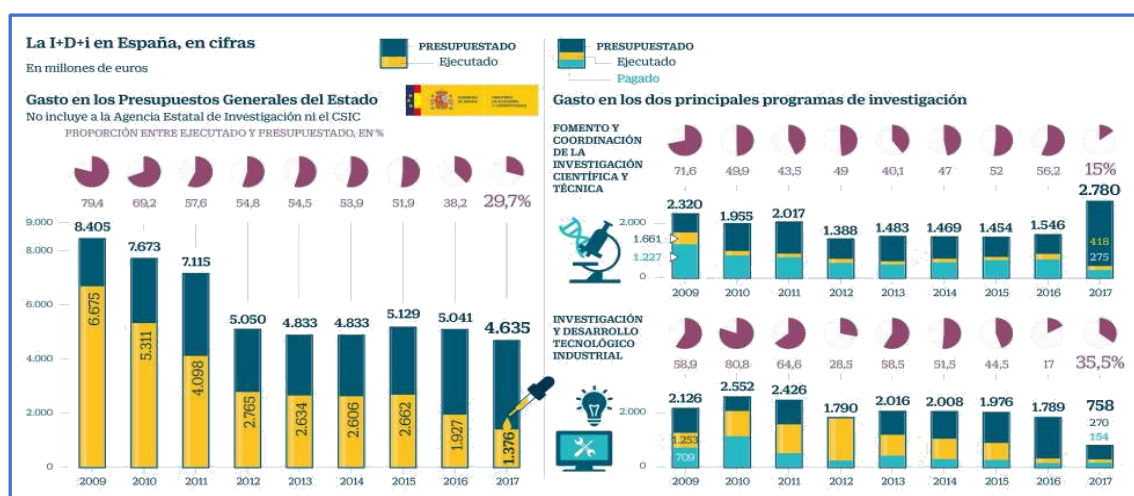
España forma parte de un grupo de países en los que la aportación exterior varía su peso entre el 6% y 10%.

Mejoría que queda ensombrecida al compararlo con el panorama europeo. España es uno de los tres países de los 28 que componen la Unión que no ha recuperado todavía las tasas de inversión anteriores a la crisis económica, junto con Finlandia y Portugal. Así, mientras que entre 2009 y 2017 España acumula un 5,8% de caída, la media europea se sitúa en un 22% de incremento. Todos los países líderes han crecido: *Alemania lo ha hecho un 31%, R. Unido un 16%, Francia un 10% e Italia un 12%.*

La brecha con la UE ha ido creciendo desde el comienzo de la crisis y ha alcanzado su mayor distancia desde 2001. Esto no se explica en base al potencial económico, ya que la renta per cápita española alcanza los 93 puntos en una escala de 100, mientras la inversión en I+D por habitante se queda en 49: *Alemania creció un 31%, R. Unido un 16%, Francia un 10% e Italia un 12%.*

El descuelgue de España respecto a Europa coincide además con un despegue en cuanto a inversión en I+D+i de los países asiáticos más pujantes, con China a la cabeza, que aumentó su inversión en esta área un 99% entre 2009 y 2015. La brecha entre España y Europa en términos absolutos se sitúa en que la inversión en I+D+i por habitante español es de 302 euros anuales, frente a los 622 de media del continente. En cuanto al empleo, el número de investigadores en las empresas está hoy un 7,4% por encima del registrado en 2009, mientras que el de investigadores públicos todavía se encuentra un 4,5% por debajo.

La cifra de temporalidad entre los investigadores sigue siendo muy elevada (en algunos centros llega al 90%), mientras que la fiscalización de Hacienda está provocando retrasos que han llevado al colapso a organismos públicos de investigación como el Instituto Nacional de Investigación Agraria y Tecnológica (INIA). Además de la escasa participación de las empresas en la I+D, competencia del CDTI.



En España tuvimos que esperar a la primera década del siglo XXI para identificar un apoyo decidido en favor de los presupuestos públicos para la I+D+i. Las cifras crecieron en términos absolutos en un 250% en un periodo de nueve años,

además se consolidó una práctica que introdujo la innovadora combinación de los incentivos basados en el crédito y los fondos no reembolsables destinados a los distintos solicitantes de apoyo público. Esa combinación, virtuosa en un país basado de forma exagerada en la financiación bancaria, tenía todo el sentido al introducir una modalidad de la financiación de la I+D+i bajo otros análisis distintos del que la banca tradicional lleva a cabo para verificar el riesgo de su inversión.

La aparición del protagonismo extremo del control del déficit en los países del entorno euro, motivada por la crisis del 2009, llevó en España al uso de los créditos como herramienta prioritaria en los instrumentos de apoyo a la I+D+i, basándose en el hecho de que sus cuantías no producían déficit sus cifras se multiplicaron por tres en pocos años. Ese crecimiento fue ficticio al dedicar importantes cantidades de dinero a potenciales usuarios de las mismas, que en realidad no podían usarlas por motivos diversos: *los Centros Públicos de Investigación y las Universidades, por su incapacidad estatutaria para endeudarse; las empresas, al requerir como condición previa para la concesión del crédito de garantías bancarias que los bancos no estaban dispuestos a dar a compañías seriamente afectadas por la crisis*²⁵.

Esa falta de sintonía entre la oferta de ayudas públicas y la demanda real por parte de los usuarios ha conducido a la situación, desenfocada, de la escasa ejecución presupuestaria, denunciada reiteradamente en los últimos años. Responsabilizar al responsable de la inejecución en lugar de denunciar la falta de adecuación de los instrumentos no ha hecho sino perjudicar a la propia idea de apoyar con fondos públicos la I+D+i del país.

La situación actual de crecimiento de la economía española reduce los niveles de endeudamiento y, por lo tanto, permitiría aplicar partidas presupuestarias para alcanzar las cifras de participación de los fondos públicos equivalentes a las de los países avanzados. De todas formas, el déficit público no debieran ser el criterio protagonista para vigilar el correcto uso de los fondos públicos en su tarea de impulsar el desarrollo de las naciones. La apuesta decidida por invertir en el corto plazo -en partidas donde se pueden obtener beneficios a medio y a largo plazo- debe permitir cambiar la cualificación del déficit para esas partidas presupuestarias que así lo hagan. Esta visión coincide con la defendida por España en el seno de la Comisión Europea, para que no se considere déficit el incremento de las partidas destinadas a la I+D+i en aquellos países que estén por debajo de la media comunitaria.

El caso español, que ocupa una posición muy atrasada en la lista de países europeos y mundiales líderes en la I+D+i, debería formular unos PGE donde las partidas dedicadas a estos asuntos tuvieran dos novedades esenciales:

- El crecimiento, hasta llegar a lo largo de esos cuatro años a una cifra coherente con nuestra posición económica global -un 2% del PIB- con incrementos anuales acordes con las definiciones de nuevos instrumentos sintonizados con las nuevas realidades de la revolución digital.

²⁵ “Innovar en los Presupuestos Generales”. Grupo de Reflexión AMETIC. Cinco Días 26 junio 2019.

- Que las cifras dedicadas a fondos no reembolsables tengan un notable incremento, primando estos sobre las cantidades orientadas a los créditos que, no obstante, se deberían respetar; pero también complementar con nuevas inversiones en capital en sus distintas versiones: *semilla, venture, etc.* Los fondos no reembolsables deberían permitir el crecimiento de los esfuerzos dedicados a la Investigación Básica, tanto pública como privada, pues en los dos ámbitos se hace.

La OCDE recuerda que España gasta poco en investigación y desarrollo (I+D): *“España fue uno de los países que menor apoyo público prestó a la I+D del sector privado en relación a su PIB”*. Lo que afecta negativamente a la evolución de la productividad, orientando hacia una mayor coordinación de las políticas estatales y autonómicas para evitar duplicidades, favorecer una mayor dimensión y especialización de las universidades para elevar la calidad de la innovación, atribuir los recursos en función de los resultados y de la aplicación de evaluaciones internacionales o dar más oportunidades de carrera a los investigadores muy cualificados.

Cabe destacar el esfuerzo inversor de los ámbitos farmacéutico y de medios de transporte, además de vehículos a motor, química o alimentación, con menores importes de inversión. Respecto al bajo gasto en I+D, es preciso que se refuerce su evaluación; que los fondos se destinen menos a préstamos y más a subvenciones directas basadas en resultados. Al mismo tiempo, la Universidad debe fomentar una mayor especialización y tamaño.

Situación de la industria española

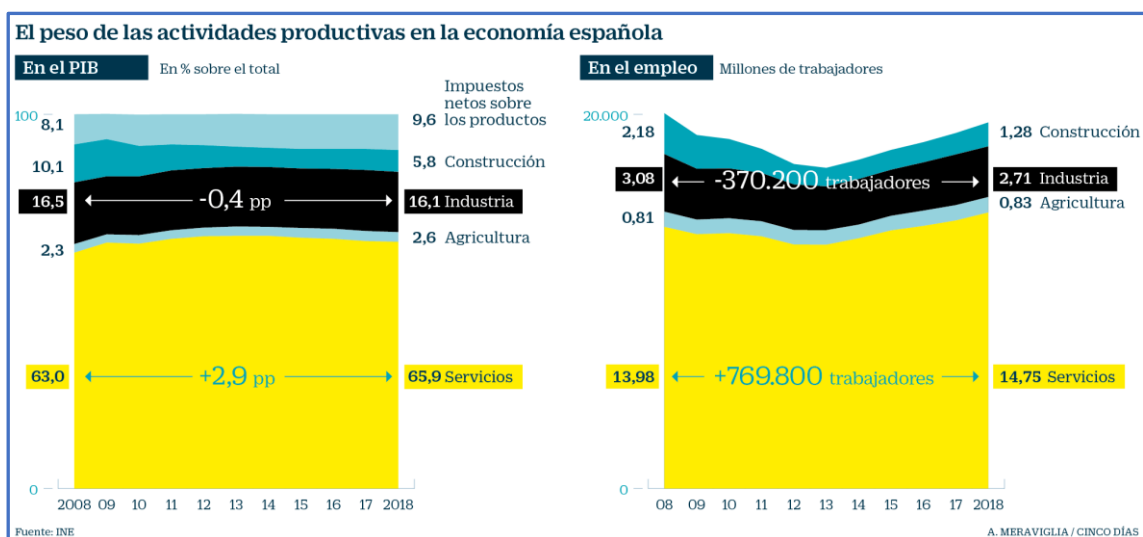
La industria española cayó en recesión en el último trimestre de 2018, reflejando los peores datos desde el año 2013. Mientras que el resto -servicios, agricultura y, especialmente, construcción- sigue tirando de la actividad, aunque a un ritmo cada vez menor. Desde el año 2008, los servicios han ganado casi tres puntos porcentuales, al pasar del 63% al 65,9% del PIB. La brecha frente a la industria es aún mayor si se analiza en términos de empleo.

Al mismo tiempo, España ha quedado significativamente perjudicada en su posición en la cadena de valor industrial global, puesto que ha pasado de aportar el 2,4% del total a tan solo el 1,3%, pese a que en los últimos años el producto industrial español presenta tasas de crecimiento reales significativas, pero acotadas respecto a la que presenta el producto global.

La competitividad de la industria es esencial para garantizar un crecimiento sostenible e integrador. El sector industrial aporta el 14,4% del VAB -un 2% más si tenemos en cuenta el sector energético- (200.000 millones de euros en 2018). Las fábricas no han dejado de crecer y crear empleo desde el año 2013.

Aporta un 16,1% del PIB en 2018, aunque su evolución es algo inferior a la media, 6,7% superior en 2018 al de 2010 (tres décimas inferiores a 2017) y en el sector manufacturero del 12,6% (dos décimas inferiores), datos muy alejados del objetivo de la estrategia Europa 2020 (20%) que, actualmente, lo cumplen

únicamente tres Comunidades Autónomas: Navarra, País Vasco y La Rioja. Dentro del sector, la industria manufacturera evoluciona mejor, superando en casi el 11% en 2018 al año base. Si bien es cierto que la volatilidad en los últimos años ha sido mayor que en el resto del sector industrial.



El sector se ha quedado este año a solo un 3% de alcanzar esos niveles, pero justo llegó su recesión y ha vuelto a alejarse. La recesión se produce justo cuando los niveles de producción iban a recuperar las cifras anteriores a la crisis. El pico de la producción manufacturera se produjo en el año 2007, justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria global.

Hoy en día, solo la industria manufacturera y la construcción siguen sin recuperar los niveles de producción de 2007. Por el contrario, los servicios producen actualmente un 16% más aportando el 66% del PIB 2018 y evoluciona a un ritmo similar a las manufacturas. Mientras que la construcción aun dista un 14% del dato 2010 y la agricultura, un 12% más.

El dato pone fin a dos ejercicios de discretos avances, supone el mayor recorte en la aportación de la industria al PIB desde 2006 y aleja más a España de la media europea. El primer trimestre de 2019 vuelve a registrar tasas de crecimiento negativo (-0,1%) de la producción industrial, tras la subida de febrero del mismo año. Corregida de efectos estacionales y de calendario, descendió un 3,1% respecto a marzo de 2018.

En 2019, se ha producido una alerta en la industria española: *la actividad manufacturera cae por primera vez en 5 años y el empleo cayó en junio por segundo mes consecutivo, y al mayor ritmo de los últimos cinco años y medio.*

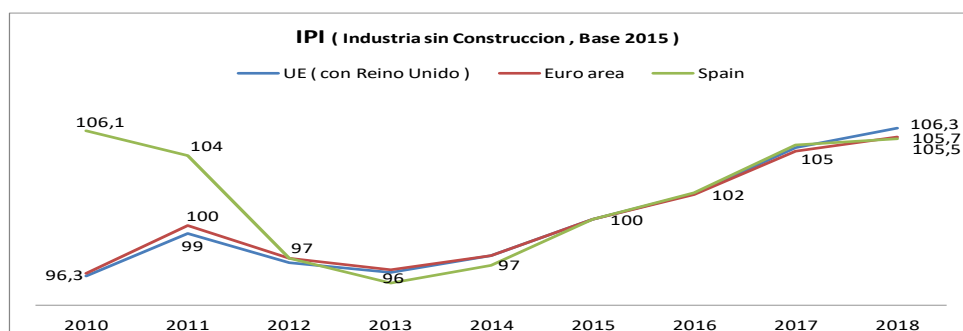
La industria ocupaba a más de tres millones de trabajadores antes de la crisis de 2008 y ahora apenas supera los 2,7 millones (14,1%, el 91% por cuenta ajena), con un saldo negativo de 370.200 trabajadores. En el otro lado, los servicios empleaban a 13,9 millones de ocupados y a finales de 2018 la cifra creció hasta los 14,7 millones, con un saldo positivo de casi 770.000 empleados.

El valor añadido bruto (VAB) de la industria respecto del total de la economía ha caído hasta el 14%. Por lo tanto, cerca de la mitad del porcentaje que existía en 1980 (25,9%). O hasta el 12,6% con relación al producto interior bruto, lejos del 17,8% registrado en el año 2000. Es más, la industria manufacturera todavía no ha recuperado el peso relativo en el VAB total que tenía en 2008 (14,5%), justamente el año de inicio de la crisis.

El VAB del total de la economía se ha incrementado un 17,8% en la comparativa 2018-2013, con el inicio del crecimiento. Sin embargo, la recuperación del empleo es más lenta, alcanzando únicamente un 13,4%. En consecuencia, el valor añadido generado por empleado (productividad) aumenta y más aún en la industria manufacturera, donde la diferencia entre ambas de tasas de crecimiento es casi el doble (ocho puntos de diferencia).

Variación 2013-2018	OCUPADOS	VAB
Total	13,4%	17,8%
A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	7,4%	22,8%
Industria (B-E, CNAE 2009)	10,3%	18,1%
Energía y Suministro Agua (ByE , CNAE 2009)	2,3%	7,1%
C Industria manufacturera	11,3%	21,5%
F Construcción	24,1%	31,8%
Servicios (G-T, CNAE 2009)	13,5%	15,1%

La evolución de la producción industrial nacional no acompaña al resto de la UE hasta el 2014, siendo los dos primeros años de recuperación más intensos en España. A partir del 2015 la evolución mantiene patrones similares, terminando en 2018 prácticamente igual a la zona euro. Sin embargo, la diferencia entre la UE y España es que la comparativa de los mismos, con respecto al 2010, indica que mientras España aún no ha equiparado el volumen de producción de aquel año, la media de la UE lo supera en 10 puntos.



Fuente: Eurostat. Elaboración Propia

En el conjunto del año 2018 la producción industrial aumentó un 0,8%, con tendencia a una suave desaceleración, pero se desplomaba en diciembre (-5,9%), cayendo un 1,2% respecto al año 2017, la peor caída desde 2013 y el peor dato desde 2012, afectando a todos los sectores. Lo mismo ocurre con la cifra de negocios, con crecimientos inferiores en cuatro puntos porcentuales que en 2017. De los cuatro trimestres del año, en tres de ellos la producción industrial sufrió caídas (IPI)²⁶. La industria española pone fin a más de cinco años de crecimiento del sector.

²⁶ El Índice de Producción Industrial mide, a través de una encuesta entre 115.000 establecimientos, la evolución en el corto plazo del valor añadido en las ramas industriales.

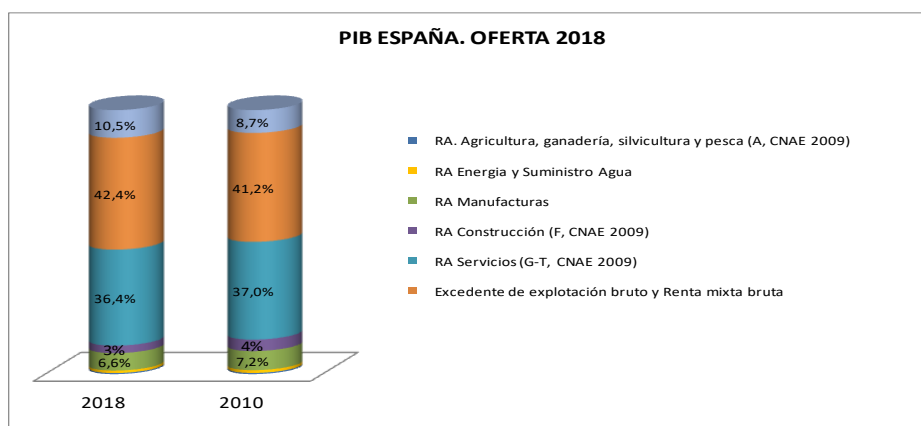
Leve recuperación de la industria al inicio de 2019

La industria española se está ralentizando más rápido que el resto de la economía y uno de los síntomas de este frenazo es la caída en la inversión de bienes de equipo, provocando el desmantelamiento industrial, el cierre y la desaparición de empresas. En el último trimestre de ese año, el IPI tuvo una caída superior a la francesa, británica o alemana (-3%). El primer trimestre de 2019 refleja que el consumo de energía eléctrica cae un 2,1%, cuando en 2017 este mismo dato crecía a ritmos del 1,8% y en 2018 del 0,3%.

El pasado año, la aportación de la industria a la economía nacional sufrió el mayor retroceso desde 2006 al caer tres décimas, hasta el 16,1%, cuatro décimas menos que en el inicio de la crisis, tras dos ejercicios de discretos avances. En la UE de los 27 se situó en el 17,5%, frente al 20% que recomienda la Comisión Europea para el año 2020, una meta que para España se antoja ya inviable.

Además, las sinergias que genera la convierten en una palanca aún más relevante en términos relativos. Pero nos encontramos ante una industria que incorpora un bajo desarrollo innovador y un escaso peso tecnológico, lo que va acompañado de un empleo precario y de bajos salarios. Lo que también se percibe en el crecimiento del empleo industrial en su conjunto, que ha caído a la mitad respecto al año anterior, pasando del 5,5% al 2,1%. Mientras que, en el último semestre de 2018, se habían perdido el equivalente del 1,5% de sus empleos.

La evolución del valor añadido por sectores indica que es el sector primario el que mayor crecimiento registra desde el 2010, superando el índice 2018 en 20,7 puntos porcentuales al periodo base, sin embargo, su incidencia en el conjunto de la economía es únicamente del 2,6% del PIB total generado. Con el dato de marzo de 2019, la facturación de la industria encadena tres meses de tasas interanuales positivas, mientras que los pedidos suman dos meses de alzas tras un mal arranque de año.

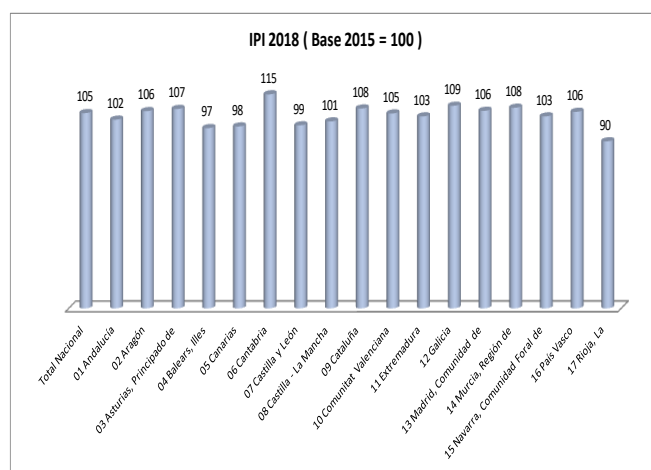
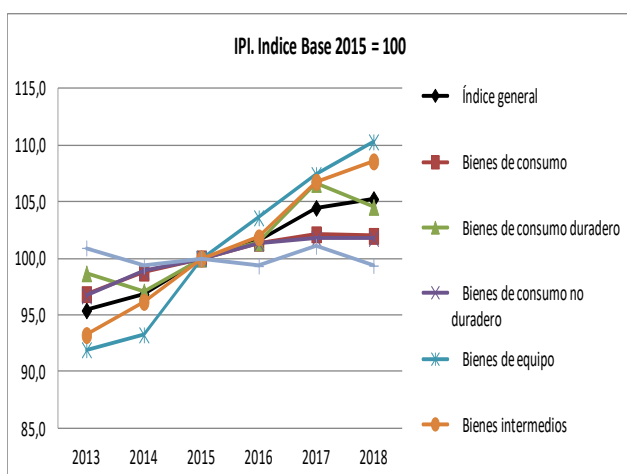


Fuente: INE. Contabilidad Nacional. Elaboración Propia

La inversión en bienes de equipo se expande a un ritmo anual superior al 5%, lo que la convierte en el componente más dinámico del crecimiento. Es la que

mayor incremento acumula desde el 2013, con una diferencia de 20 puntos, frente a los 10,3 del general. Le sigue en importancia de evolución la industria de Bienes Intermedios, también con un importante aumento en estos cinco años de 16,5 puntos. El sector de la energía, siguiendo objetivos marcados, se reduce en 1,5 puntos desde el 2013, a pesar del incremento de la actividad desde ese año, mejorando, por tanto, la eficiencia energética.

Los IPI por Comunidades Autónomas reflejan evolución negativa desde el 2015 en cuatro Comunidades Autónomas: Castilla y León, Canarias, Baleares y La Rioja, que no consiguen igualar en 2018 el valor del 2015, siendo importante la diferencia en el caso de la última, con 10 puntos.



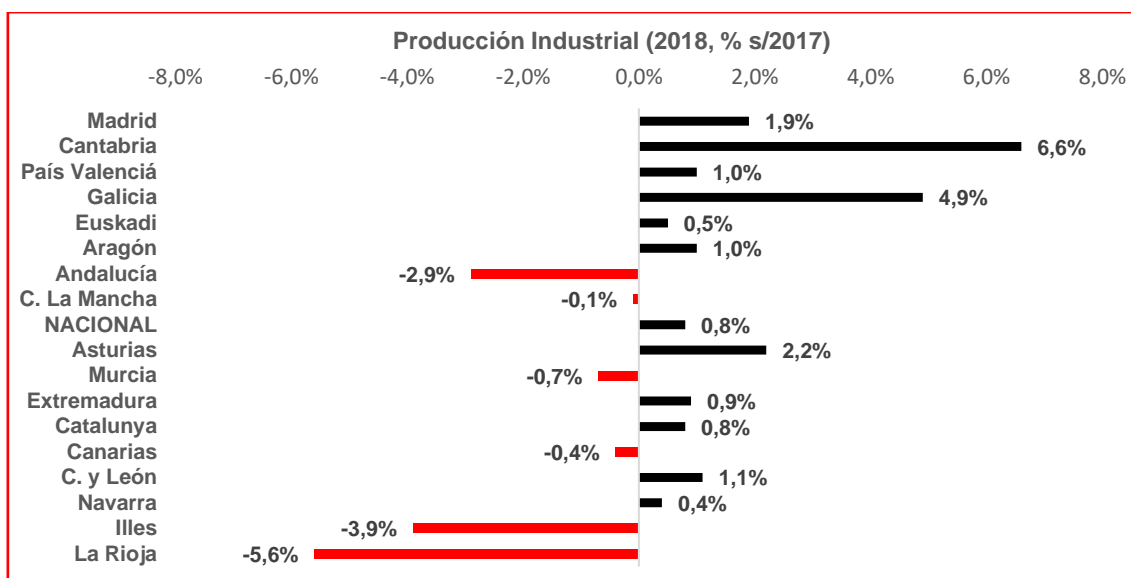
Fuente: INE. Elaboración Propia

La producción industrial bajó en ese período en siete comunidades autónomas en tasa interanual, con Extremadura (-9,1%), Galicia (-6,9%) y Baleares (-6,1%) liderando los descensos. Por el contrario, diez registraron aumentos, especialmente Aragón y Murcia (+3,8%), Andalucía (+3,6%), Asturias (+2,7%) y País Vasco (+2,6%). Por el contrario, Cantabria es la que más crece, con una diferencia de 15 puntos porcentuales en los índices de ambos periodos, siendo en total ocho Comunidades las que se sitúan por encima de la media nacional.

	% Industria s/ PIB			% Manufacturas s/ PIB		
	2017	2018	VARIACION 17-18	2017	2018	VARIACION 17-18
NAVARRA	29,2%	29,0%	-0,19	26,1%	26,1%	0,02
P. VASCO	26,4%	26,1%	-0,36	23,3%	23,1%	-0,2
LA RIOJA	26,6%	25,2%	-1,33	23,4%	22,3%	-1,06
CANTABRIA	21,2%	21,6%	0,36	18,2%	18,5%	0,34
ARAGON	22,0%	21,8%	-0,26	17,6%	17,6%	-0,04
CATALUÑA	20,0%	19,7%	-0,29	17,3%	17,1%	-0,2
P. ASTURIAS	21,6%	21,5%	-0,13	15,9%	16,1%	0,27
C. LEON	19,8%	19,5%	-0,35	15,3%	15,1%	-0,21
C. MANCHA	20,0%	19,6%	-0,4	15,2%	14,9%	-0,35
MURCIA	18,4%	18,2%	-0,2	14,4%	14,4%	0,02
C. VALENCIANA	17,8%	17,5%	-0,27	14,6%	14,3%	-0,29
GALICIA	18,3%	18,5%	0,23	14,1%	14,2%	0,12
NACIONAL	16,3%	16,0%	-0,29	12,8%	12,6%	-0,2
ANDALUCIA	12,0%	11,6%	-0,48	8,3%	7,9%	-0,34
EXTREMADURA	13,2%	13,1%	-0,06	7,2%	7,2%	0,04
C. MADRID	9,6%	9,3%	-0,3	6,7%	6,4%	-0,24
CANARIAS	7,1%	7,0%	-0,17	3,5%	3,4%	-0,09
I. BALLEARS	6,5%	6,3%	-0,22	2,8%	2,6%	-0,21
CEUTA	5,5%	5,5%	-0,05	1,5%	1,5%	-0,01
MELILLA	5,2%	5,2%	-0,07	1,0%	1,0%	-0,01

Fuente: INE. Contabilidad Regional. Elaboración Propia

La producción del sector industrial habría crecido de forma determinante en mayo de 2019. El IPI en serie original (sin corregir de efectos de calendario y estacionales) fue un 1,8 superior al de mayo de 2018 y un 10,6% superior al de hace un mes (abril de 2019). Sin embargo, si tomamos como referencia el crecimiento acumulado durante lo que va de año, no obtendremos unas series con unas tasas de crecimiento o de variación tan acusadas. Así, el IPI medio en lo que va de año hasta mayo de 2019 ha crecido un 0,4% respecto al mismo índice de 2018.



Una prioridad para la industria española: innovación, investigación y desarrollos propios

Durante siglos se ha pasado de compartir conocimiento, democratización del saber y del desarrollo, a desconocer una parte importante del mismo, sobre todo, por la amplitud de los desarrollos técnicos (revolución industrial, energética y tecnológica), expansión industrial que incorpora transformaciones estructurales profundas que modifican de forma sensible la vida de la sociedad.

Es de reconocer que la creciente complejidad de la tecnología hace difícil que se pueda conocer todo. Decidir cuánto es suficiente y cómo conseguir ese conocimiento no es sencillo. Las visiones formativas sobre la tecnología son siempre limitadas y centradas en su aspecto técnico-instrumental y no como un vehículo para facilitar la interpretación de la sociedad.

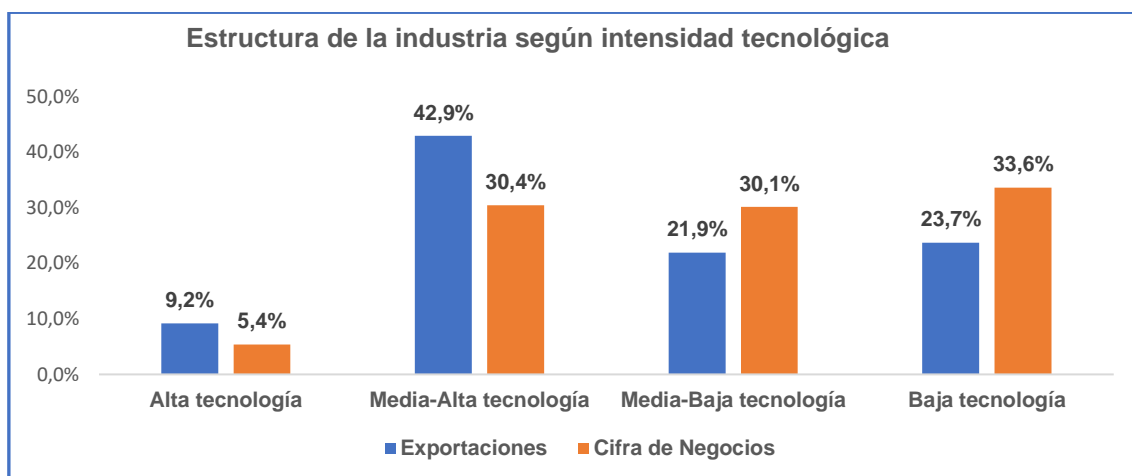
Existe la necesidad de un gran acuerdo para acometer la "*alfabetización tecnológica*" para tener una sociedad informada sobre lo que les afecta diariamente. Sin ella, no se conseguirá una presión ciudadana suficiente para que se "*exigiese*" un mayor esfuerzo en investigación e innovación (es difícil priorizar lo que no se entiende): *Los esfuerzos de penetrar en el mundo educativo han sido pequeños y menos se ha hecho para los adultos*²⁷.

²⁷ Gonzalo León. Es miembro del Foro de Empresas Innovadoras.

La evolución de la tecnología es cada vez más rápida. La influencia de las tecnologías “*horizontales*”: electrónica, informática, materiales, telecom, micro y nano tecnologías, biotecnología... se superpone a la evolución de las tecnologías directamente sectoriales, lo que hace que la visión de los responsables de éstas esté condicionada por la influencia de aquellas, respecto a las cuales tienen menos capacidad de juicio.

Hubo un tiempo en que desde el ministerio de Industria se hacía política tecnológica, muy sectorializada, en colaboración con el Plan Nacional de I+D, y, desde la entrada de España en la Comunidad Europea en 1986, con el programa Esprit (base de los posteriores programas marco). Cuando las políticas sectoriales de Industria eran compatibles y complementarias por medio de la colaboración entre ese ministerio y la Secretaría del Plan Nacional de I+D. Una colaboración que no siempre era fácil, pero que funcionaba bastante bien²⁸.

La propensión de la industria española hacia actividades con intensidad tecnológica baja o media-baja es relevante, debido a que está acreditado que, a mayor intensidad, mayores exportaciones. En concreto, apenas el 5,4% de la cifra de negocios de la industria tiene que ver con intensidad tecnológica alta, cuyo peso en las exportaciones prácticamente se dobla (9,4%). Por el contrario, las industrias con intensidad tecnológica baja, cuya cifra de negocios representa el 33,6%, solo suponen el 23,7% en términos de exportaciones. Malos tiempos para la industria en plena revolución tecnológica.



La combinación de productividad y salarios explica que la gran empresa industrial española sea más competitiva que las grandes empresas de Alemania o R. Unido, pues sus costes laborales unitarios son un 38% y 21% inferiores, respectivamente. Pese a ello, la economía “*sigue encadenada a un modelo productivo basado en los servicios de bajo valor añadido (hostelería, comercio, servicios auxiliares) con un peso muy bajo de la industria*”, lo que condena el país a un empleo precario y de bajos salarios.

²⁸ Juan Mulet Melia. Foro de Empresas Innovadoras.

Influencia de la inversión extranjera en España

Las destacadas inversiones extranjeras que comentamos en apartado anterior reflejan un aspecto dudoso, ya que sus beneficios para la economía española dependen de su efecto multiplicador sobre el tejido productivo, y ahí es donde fracasa: *porque solo el 41% de la inversión extranjera se traduce en creación de nuevas empresas o ampliaciones de capacidad existente, es decir, una adición directa e inmediata de capital productivo*. El 59% restante se debe a fusiones y adquisiciones de empresas existentes, por lo que el efecto multiplicador es generalmente indirecto y reducido. El impacto de este tipo de operaciones dependerá de la incorporación de nuevas tecnologías y de un hipotético aumento de productividad generado por el hecho de que una empresa esté gestionada por un inversor extranjero.



China y Hong Kong aportaron más del 4% del total de inversión directa extranjera en nuestro país. Entre los sectores receptores figuran el suministro de energía y las infraestructuras de transporte. Los flujos de han acelerado, una tendencia que contrasta con la disminución registrada en los principales países de nuestro entorno, como consecuencia de la adopción de una regulación más restrictiva en sectores considerados como estratégicos (tecnología, medios de comunicación y actividades

de defensa). La normativa también se ha endurecido con respecto a la inversión de empresas públicas chinas.

En fechas recientes, la UE aprobó un nuevo marco destinado a filtrar los proyectos de entrada de capital chino apoyado por el Estado. Según una estimación, el marco podría cubrir hasta el 82% del total de inversiones realizadas en Europa por empresas del país asiático. Todo ello pone a España ante la disyuntiva de fortalecer la normativa existente y, así, contener la presencia de China en sectores estratégicos o mantener la actual posición para seguir atrayendo nuevas inversiones. En definitiva, conviene vigilar el impacto de esas inversiones sobre el tejido empresarial, así como su coherencia con el modelo productivo y los intereses estratégicos del país.

El empleo industrial

Mientras el mercado laboral de la economía española mejora, con 19,3 millones de personas afiliadas a la SS (19,4 ocupadas), la cifra más alta desde julio de 2008, en el cuarto mes de 2019 la industria tiene más de 400.000 afiliados menos -del 13,9% de aquel año al 11,8% actual-. El empleo en construcción se ha

reducido a la mitad (1,3 millones) y el de servicios ha tirado de la afiliación, incrementando 1,5 millones (75%).

Hasta 2018, una veintena de sectores industriales no ha logrado todavía recobrar el nivel de actividad previo al estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008. De hecho, esta recuperación no alcanza aún la mitad de los 811.000 empleos destruidos por el sector entre 2009 y 2014, ya que desde esa fecha sólo se han generado 361.000 puestos de trabajo netos.

Son dos vectores los que han confluído: *la salida de hombres del empleo, siendo sustituidos por mujeres, y la salida o baja de población autónoma del sector, con gran dinamismo en el empleo asalariado, pero con caída importante del trabajo por cuenta propia*. En los últimos doce meses, el empleo femenino crece en 14.400 mujeres (un 2,1%), en tanto que el empleo masculino cayó en 17.400 hombres (un 0,9%). La población empleada industrial, en el cuarto trimestre de 2018, queda integrada por 697.900 mujeres y 2.010.400 hombres.

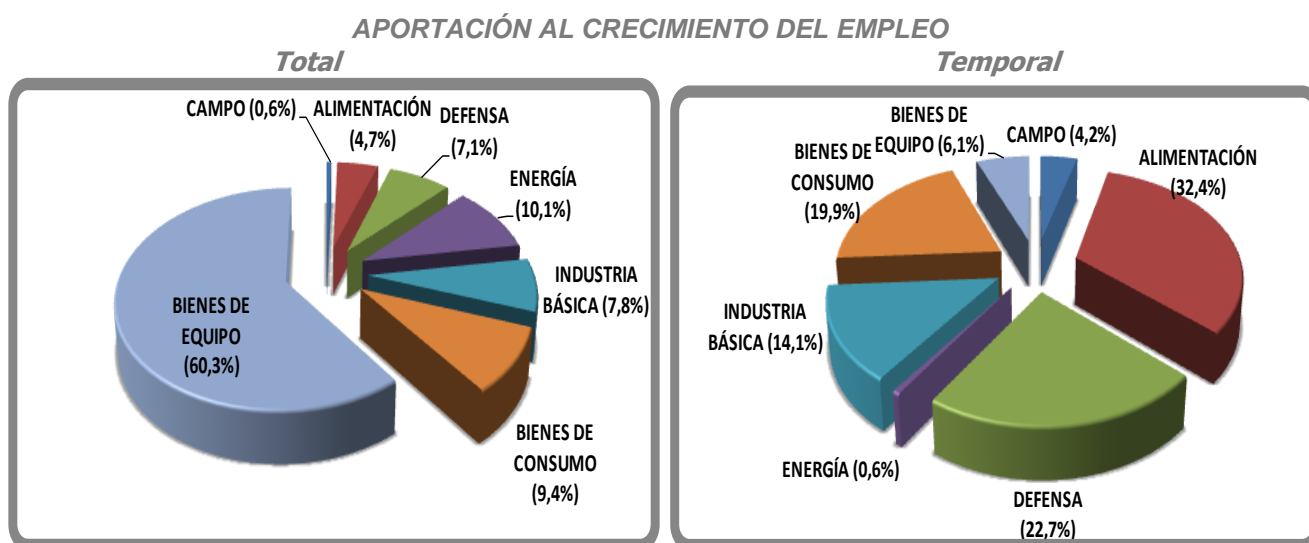
En cifras absolutas, en 2018 se crearon más de 450.000 empleos netos en España, pero, de todos ellos, solo 22.900 se crearon en la industria. Así que, un año más y pese a la recuperación económica, el sector industrial siguió rezagado: *su cifra de ocupados aumentó en 2018 un 1% interanual, mientras que en la construcción creció un 9,3% y en servicios lo hizo en un 2,4%*. El pasado año empleaba a un 14% de la población activa (2,7 millones de personas), cortó el pasado ejercicio una racha de tasas de crecimiento superiores a los del PIB y acabó el año destruyendo empleo por primera vez desde el cuarto trimestre de 2012.

El empleo del sector manufacturero tocó fondo a finales de 2014. Desde entonces no ha parado de crecer los puestos de trabajo en la industria. Sin embargo, el ritmo ha ido bajando de manera progresiva en los últimos meses. Según la Seguridad Social, la industria manufacturera contaba con 1.849.518 personas trabajando por cuenta ajena en abril de 2019, lo que supone un 2,61% más que el año pasado. Sin embargo, los autónomos que desarrollan su actividad en este sector ascienden a 222.224 trabajadores, un 5% menos que hace un año. Estos profesionales son los primeros en dejar de contar para las fábricas al sufrir ajustes o caídas de producción.

Por su parte, la población que trabaja por cuenta propia en el sector industrial ha disminuido en 31.600 personas (12%), durante el último año. Lo que significa que han salido -en un balance neto- un total de 3.000 personas, puesto que la población asalariada crece en un 1,2% al incorporar 28.600 trabajadoras y trabajadores por cuenta ajena al sector (21.200 mujeres y 7.400 hombres). El ritmo de incremento de mujeres asalariadas es superior al de los hombres (tanto en contratación temporal como indefinida). Aunque crece la representación de mujeres en el sector aun es baja ya que solo el 25,8% de los ocupados de la industria en 2018 son mujeres, frente a 24,5% del 2013.

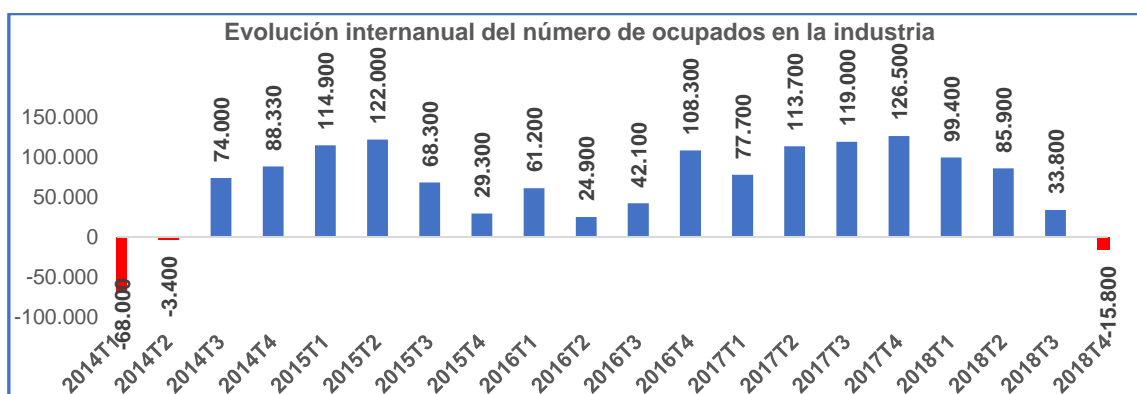
La industria de alimentación es la más importante en términos de ocupación (18%), seguida a distancia de la fabricación de productos metálicos (10%) y ocupando la industria de automoción el tercer puesto (9%). El 63% restante está

muy dividido entre los demás subsectores, con tasas variables entre el 1% y el 5%, salvo el subsector de maquinaria y equipamiento que llega al 7%.



El sector manufacturero acumula el 90% del empleo del sector industrial 2018. A pesar de la evolución positiva desde el 2013, el análisis de la calidad de empleo aporta conclusiones negativas, ya que, si bien es cierto que a partir de ese año se crea empleo, el peso relativo del empleo temporal en el sector se incrementa al aumentar esta forma de contratación a un ritmo muy superior que el empleo fijo, un 47,7% frente al 11%.

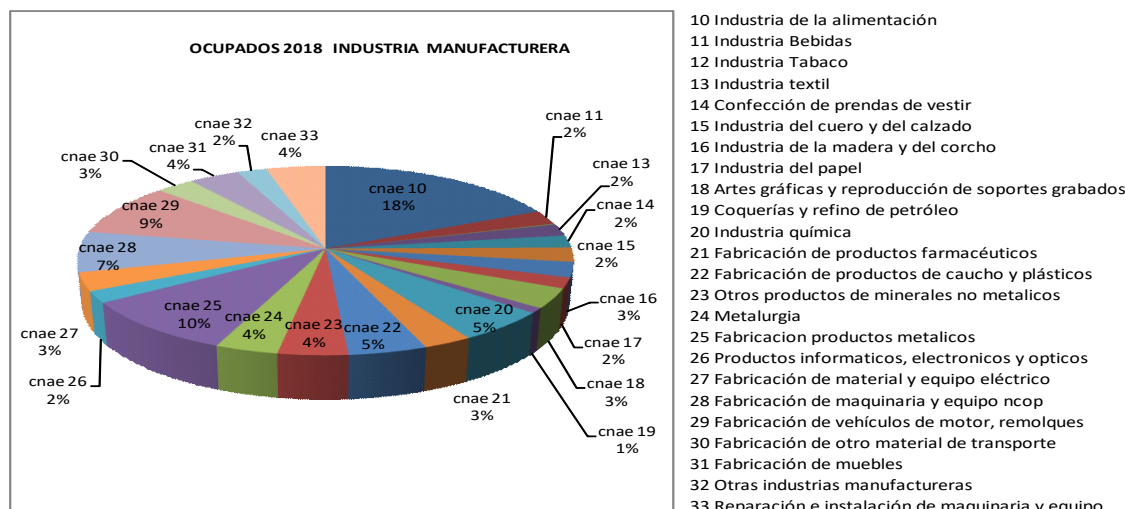
La variación del empleo de la industria desde el periodo 2013 (punto de inflexión de la recesión), difiere significativamente según el régimen de afiliación, registrando un incremento del 17% los asalariados, frente a un descenso del 3% de autónomos. La industria manufacturera obtiene la mayor cuota de empleo del sector industrial, con el 11% de los ocupados en 2018. La componen 23 subsectores, divididos en cuatro grupos según la intensidad tecnológica del producto elaborado.



Fuente: INE

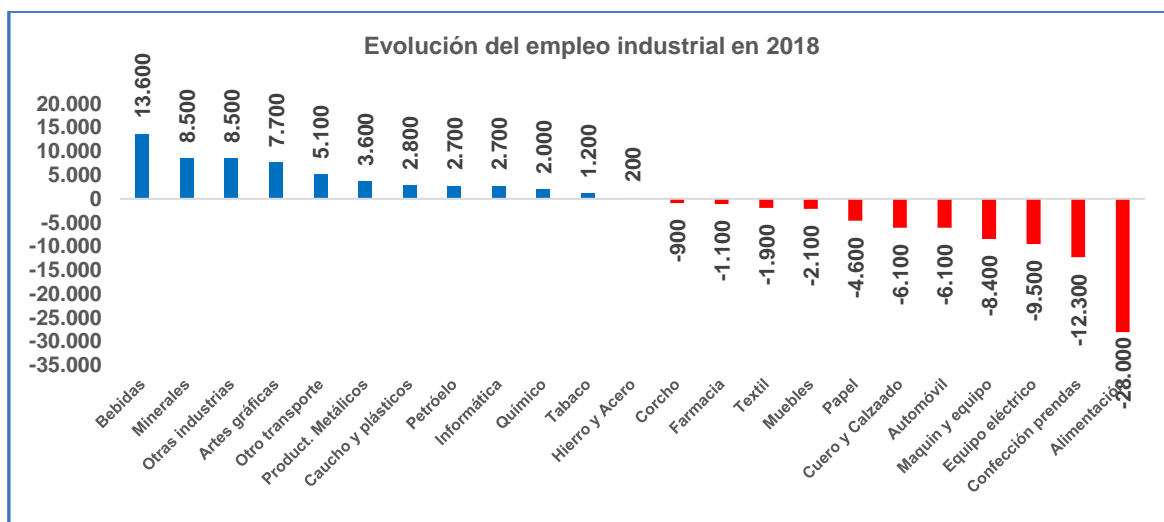
Aunque la situación mejora, la tasa de paro sigue siendo elevada, cerrando el 2018 en el 14,5%, dato que mejora 2,1% con respecto al mismo periodo el 2017, pero con un valor que únicamente supera en el 1,6% al de hace ocho años. En términos anuales, los ocupados se incrementan un 2,7% con respecto al 2017,

siendo desigual el crecimiento por sectores. Construcción aun registra un dato 26% inferior al de 2010.



La crisis de las manufacturas españolas se debe principalmente a tres sectores industriales concretos: alimentación, textil y motor. Coincide, además, con tres de los sectores que más mano de obra emplean, lo que todavía empeora más la situación.

Los ejemplos de Vestas, en León (vendida al grupo siderúrgico Network Steel Resources) y la planta de Siemens-Gamesa en Miranda de Ebro (ambas en Castilla y León); las fábricas de Alcoa en Gijón y A Coruña (Asturias y Galicia); la cementara Cemex en Gádor y Loseta (Almería y Mallorca); La Naval en Sestao y Tubos Reunidos (Bilbao); la de Gallina Blanca en Sant Joan Despí (Catalunya); nueve centrales térmicas en Galicia, Asturias, Aragón o Castilla y León (la muerte anunciada de fábricas ronda comarcas como la de Narcea, en Asturias). Impulsada por la regulación medioambiental, Naturgy pondrá fin a la actividad de su térmica alimentada con carbón y ha anunciado un plan para suprimir puestos con recolocaciones o salidas pactadas.... son solo la punta del iceberg que muestra los problemas de la industria española.



Fuente: INE

Las tasas positivas en materia de empleo se registran en la Comunidad de Madrid (2,2%) y Cantabria (0,3%). Por el contrario, los mayores descensos se producen en La Rioja (-20,2%), Illes Balears (-16,5%) y Comunidad Foral de Navarra (-10,6%). En el conjunto del año 2018 la producción industrial aumentó en 12 CCAA. Entre el resto, por una parte, Extremadura, Andalucía y Canarias no alcanzan el 15% de empleo manufacturero sobre el total, antes de empezar a reducirse dicha proporción; y ello les ocurre con una renta menor a la que lo hace España.

En un segundo grupo, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Galicia no alcanzan el umbral del 20% de empleo manufacturero; y su nivel de empleo industrial cae, sin llegar a alcanzar la renta media de España. Por otra parte, Illes Balears y Madrid constituyen claras excepciones (por la importancia del turismo y el efecto capitalidad, respectivamente): *a pesar de un menor peso de las manufacturas que el promedio nacional, superan el nivel promedio de renta.*

En 11 de las principales actividades industriales se han destruido más de 12.000 empleos en el último año. Uno de los sectores más afectados ha sido el de la fabricación de vehículos de motor, que padece una parálisis en las ventas con nueve meses consecutivos de retrocesos afectados por la reducción de las ayudas al sector y las acometidas políticas contra el diésel²⁹. Cuya afiliación media se ha reducido en 3.914 personas según los datos por el Ministerio de Trabajo correspondientes a mayo (2.600 en el primer trimestre). Esta caída está ligada a la crisis de producción que atraviesa el sector por el estancamiento económico y la incertidumbre política de mercados receptores de vehículos made in Spain como R. Unido o Italia, aunque la industria de componentes y la de mantenimiento de vehículos (reparaciones) lo ha incrementado en 24.000 empleos en el mismo período.

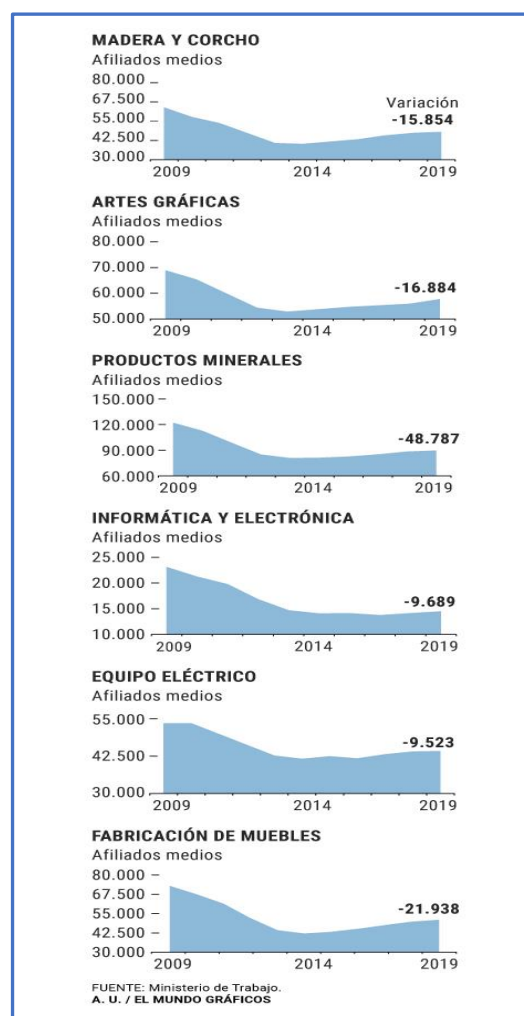
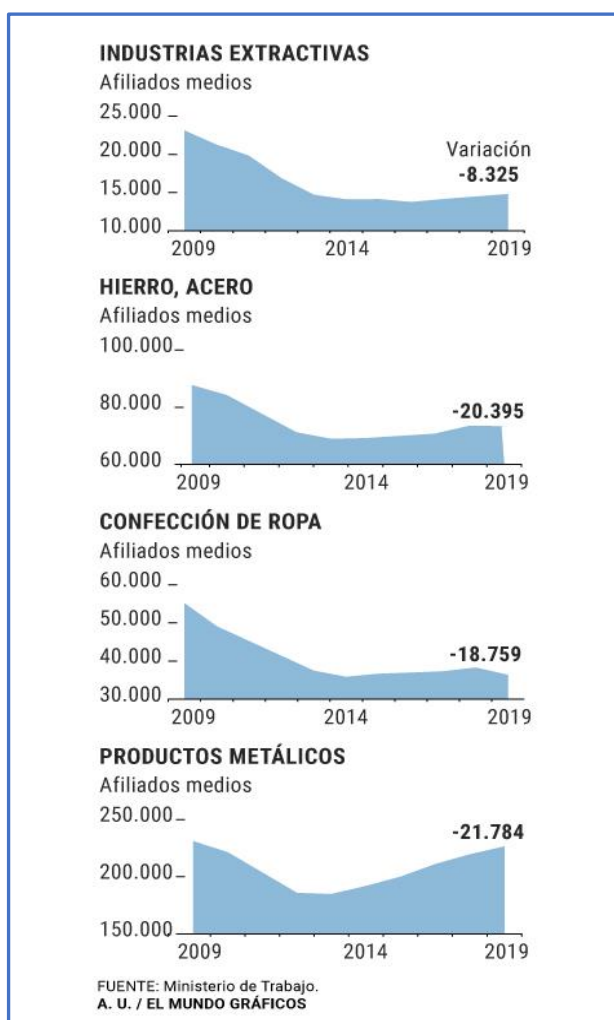
El textil es otro de los sectores que destruyó empleo en los 12 últimos meses en las ramas de confección de prendas y en la propia industria del cuero y del calzado. Entre ambas hay 3.000 afiliados menos, según la estadística de Trabajo. La destrucción de empleo industrial está también ligado a los elevados costes energéticos y a la transformación digital, si bien hay áreas específicas donde la causa es el simple declive de la propia actividad. Aquí destacan los 8.000 empleos perdidos en industrias extractivas como el carbón o los 20.000 en el campo de la metalurgia.

Es obvio que, en la variación trimestral en algunos sectores, tiene gran repercusión la estacionalidad del empleo, como en la industria alimentaria, en la que el empleo cayó en un 3,5% en términos trimestrales. Pero si hay una industria que está atravesando un momento complicado, esa es la alimentaria. En el último año, ha perdido nada menos que 28.000 empleos, un 6% del total (una gran parte de autónomos). Ha sido el principal causante de la recesión de las manufacturas, afectado por los aranceles y la competencia exterior.

²⁹ Ver “Análisis de la industria manufacturera española. Evolución sectorial”. Junio 2019. http://www.industria.ccoo.es/Yo_Industria

El sector químico y de minerales vivió una importante expansión en el último año, y también el de las bebidas. Su crecimiento no fue suficiente como para compensar toda la caída de actividad en el resto de la industria, pero sí contrarrestó sus efectos adversos. Sin embargo, en otras ramas las caídas del empleo no son estacionales, sino que está soportada en causas más estructurales o de incertidumbres sobre las proyecciones de la actividad.

Todos los sectores presentan tasas anuales negativas en las series corregidas de efectos estacionales y de calendario en diciembre de 2018. Los mayores descensos se dan en Bienes de consumo duradero (-12,7%), destacando el sector de automoción, por la demonización del diésel y la nueva normativa de circulación -WLTP-) y Energía (-11,2%), por las condiciones meteorológicas y el fuerte crecimiento en 2017. Es preciso recordar que el 40% (15% y 20%, respectivamente), lo ocupan el sector energético y el de automoción. Con golpes menos duros, se encuentran las caídas de los sectores químico, farmacéutico y metalúrgico.



El primer trimestre de 2019 se cerró con casi 2,5 millones de asalariados industriales, lo que supone un 2,6% más que en el mismo trimestre de 2018 (63.100 personas más) y un 0,3% más que en el trimestre inmediatamente anterior (8.500 más que en el cuarto trimestre de 2018).

EMPLEO INDUSTRIAL. EPA					
	2018T1	2018T2	2018T3	2018T4	2019T1
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS	32.800	30.100	32.500	32.900	30.700
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	2.174.600	2.225.900	2.217.600	2.218.000	2.229.100
SUMINISTRO ENERGÉTICO	71.500	74.100	82.900	87.300	89.600
SUMINISTRO DE AGUA Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS	140.000	143.100	152.300	135.300	132.600
TOTAL SECTOR INDUSTRIAL	2.418.900	2.473.200	2.485.300	2.473.500	2.482.000

La inversión en maquinaria y bienes de equipo se hundió un 1,5% en el último trimestre del año, la mayor caída en un año y medio. Esto significa que las empresas no están preocupadas por renovar sus equipos ni ampliar su capacidad productiva. Al contrario, en este momento de incertidumbre económica, las empresas prefieren ahorrar hasta conocer hasta dónde va a llegar la desaceleración actual.

El decreto de apoyo al sector industrial, aprobado por el Congreso el 21 de diciembre reza. *“En 2018 el sector industrial, tanto en magnitud como en empleo, ha moderado su crecimiento en mayor proporción que la economía española en su conjunto”*. Al mismo tiempo, por primera vez desde el comienzo de la crisis, las exportaciones españolas pierden peso en el PIB, teniendo en cuenta que una gran parte de las mismas son productos industriales. Los nuevos estándares medioambientales también han tenido efecto en esta situación.

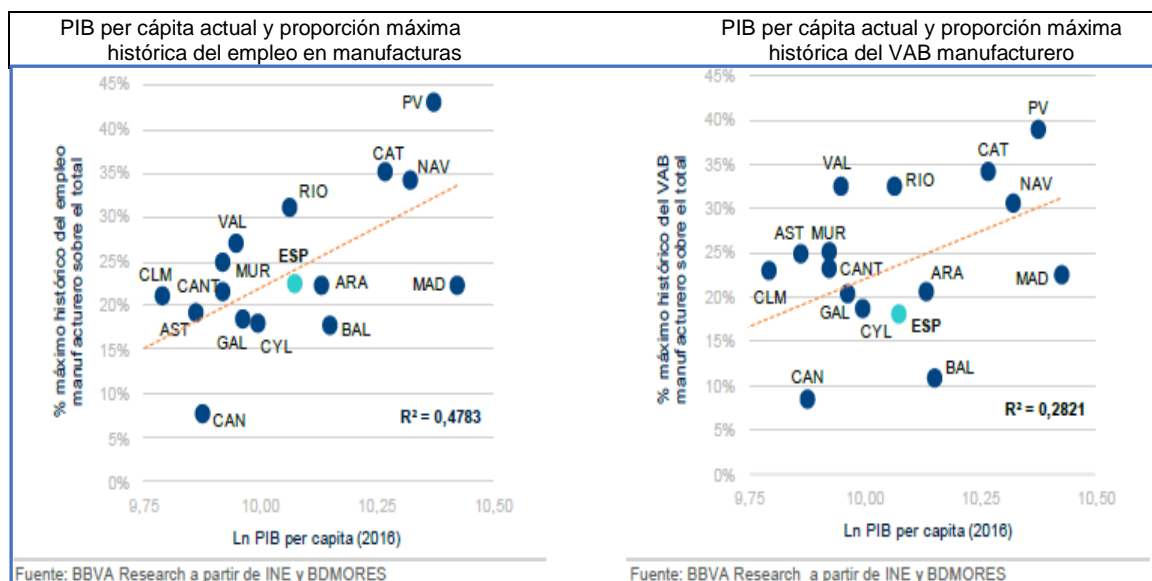
El gobierno tomó carrerilla y en un mes presentó la constitución de tres Agendas para Sectores Industriales: *cemento y aeronáutica en diciembre de 2018; naval y la industria química y del refino en enero de 2019*. De las 13 previstas y que mantiene el actual ejecutivo -el gobierno anterior creó las de automoción y el sector del papel, en 2017- falta la conformación de otras siete. Con este motivo, los secretarios generales de las federaciones de industria de CCOO y UGT, junto a las de construcción y servicios a la ciudadanía de CCOO, trasladaron a la Ministra de Industria, el pasado 12 de diciembre, su *“malestar por el procedimiento seguido para la elaboración de dichas Agendas”*. Como viene pasando en la mayoría de las decisiones gubernamentales, que afectan a la actividad de los sindicatos, se sigue sin contar con aquellos que *“conocemos en profundidad la realidad de los distintos sectores industriales”*.

Crecimiento de la precariedad del empleo industrial

La mayoría de CCAA españolas que disfrutaban de una mayor prosperidad el empleo manufacturero cae (País Vasco, Navarra, La Rioja y Cataluña); pero su renta per cápita sigue siendo superior a la media nacional durante y al final de dicho proceso. Por otra parte, el coste laboral medio en España, en 2018, asciende a 2.573 euros con una variación mínima en los últimos ocho años, aumentando únicamente a una tasa del 1,8%.

En el sector industrial, el salario medio es un 20% superior a la media nacional, y con un incremento del 8,3% desde el 2010, es decir, un 1% de aumento medio anual. Sin embargo, en los últimos cinco años el ritmo de crecimiento salarial

(aunque con evolución mejor al conjunto de la economía) se ralentiza, siendo la tasa media anual únicamente del 0,5%.



La relación del coste laboral medio en la industria, el análisis territorial por CCAA revela grandes diferencias entre ellas, que llega a un máximo del 43% entre el mínimo (Canarias) y el máximo (Madrid). Situación que se deriva del tipo de industria que se desarrolla en cada una de ellas. La evolución de los últimos ocho años también presenta grandes diferencias, con tasa máxima de casi el 15% de incremento en Galicia, frente a un descenso de 2,3% en Illes Balears.

Total Nacional	2018 (en €)	% s/ total economía	variacion 13-18	variacion 10-18
B_S Industria, construcción y servicios	2.573	100,0%	1,1%	1,8%
Industria	3.085	119,9%	2,6%	8,3%
Construcción	2.632	102,3%	-2,6%	2,1%
Servicios	2.476	96,2%	1,3%	0,9%

	Coste laboral Industria	% Salario s/nacional	Variacion 10-18
Total Nacional	3.085	100%	8,3%
01 Andalucía	2.765	90%	5,6%
02 Aragón	3.001	97%	8,2%
03 Asturias, Principado de	3.351	109%	14,2%
04 Balears, Illes	2.601	84%	-2,3%
05 Canarias	2.504	81%	5,2%
06 Cantabria	3.052	99%	10,4%
07 Castilla y León	2.835	92%	5,0%
08 Castilla - La Mancha	2.656	86%	8,0%
09 Cataluña	3.380	110%	8,4%
10 Comunitat Valenciana	2.598	84%	6,3%
11 Extremadura	2.351	76%	9,1%
12 Galicia	2.808	91%	14,9%
13 Madrid, Comunidad de	3.831	124%	10,7%
14 Murcia, Región de	2.621	85%	6,6%
15 Navarra, Comunidad Foral de	3.290	107%	11,7%
16 País Vasco	3.711	120%	13,9%
17 Rioja, La	2.701	88%	11,7%

La temporalidad afecta al 20% de la población asalariada, aunque tiene mayor incidencia entre las mujeres, que soportan dos puntos más de precariedad que

sus compañeros, alcanzando una tasa del 21,5%. Otra faceta de la precarización laboral es la rotación, que sigue en una tendencia creciente: entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre, registrando 2,3 millones de contratos laborales en el sector industrial español que, comparados con los 28.600 empleos asalariados industriales generados, arroja una tasa de rotación de 80 contratos por cada empleo nuevo, una tasa que avanza de manera contundente trimestre a trimestre. Si quitamos de la cuenta las conversiones a indefinido, nos encontramos con que tan solo el 5% de los contratos realizados son indefinidos, con las conversiones en el total se alcanza el 10%.

Sin embargo, hay que poner en valor la persistencia del contrato de relevo, cuyo número creció en 2018 un 26%, respecto al año anterior. Estos contratos no solo ayudan a rejuvenecer las plantillas, sino que fomentan la calidad del empleo, puesto que la persona incorporada (relevista) tiene más estabilidad y proyección profesional que en otros tipos de contratación temporal.

Por su parte, el desempleo industrial sigue ofreciendo mayor resistencia, siendo el que menos disminuye en la economía (un 1,6% frente al 12,3% general). En el cuarto trimestre de 2018 hay 171.300 desempleados en el sector industrial, 2.900 menos que hace un año. Son las mujeres las que llevan la peor parte, puesto que el número de desempleadas ha crecido en 5.800 trabajadoras, en tanto que el número de desempleados masculinos se ha reducido en unos 8.600 trabajadores.

Sectores como el de automoción, con exigencias de cualificaciones para acometer el reto del vehículo del futuro (en los procesos productivos, con la incorporación de la Industria 4.0 y en los productos el eléctrico y autónomo) o el naval (consecuencia del programa de desarrollo de nuevos buques contratados), se han dado cuenta de las dificultades a la hora de encontrar empleo cualificado para desarrollar sus nuevos proyectos. Lo mismo ocurre con el sector aeroespacial, a la hora de encauzar objetivos más destacados para el futuro.

Por otra parte, el año 2018 terminó con 825.600 temporeros y temporeras en el sector agrario. En los tres últimos meses se crearon 57.200 empleos, 4.900 de enero a diciembre. Los datos de la EPA confirman que el empleo se estanca en este sector, a pesar de la gran actividad estacional que se registró a final de año.

En los tres últimos meses de 2018 había 173.100 parados y paradas en el campo; en un trimestre el desempleo cayó en 21.300 personas y en un año experimentó un recorte del 13%. La caída de la tasa de paro no se corresponde con el ligero aumento que experimentó la ocupación anual (4.900 temporeros y temporeras), lo que confirma que son miles quienes optan por abandonar el sector.

La tasa de paro en el sector agrario se sitúa en el 17,3%. Cae 2,8 puntos frente al trimestre anterior y supera en 2,9 puntos la tasa global. Entre las mujeres llega al 24,1% y en los hombres se sitúa en el 15%. Aunque la bajada del paro es positiva, CCOO recuerda que el gran problema del empleo en el sector son las altas tasas de temporalidad y la rotación del empleo, provocadas por un

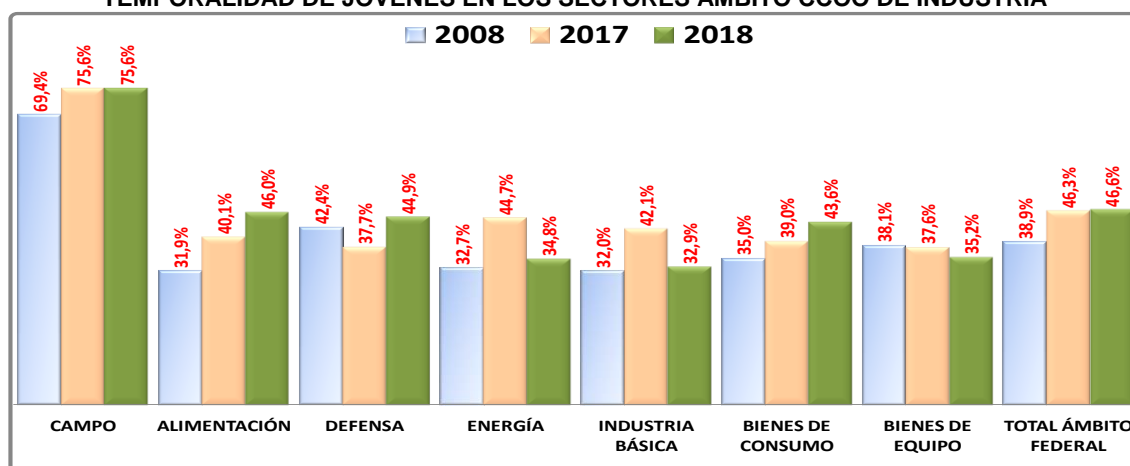
encadenamiento fraudulento de los contratos por obra o servicio determinado, cuando legalmente correspondería un contrato fijo discontinuo.

SUBEMPLEO POR EDAD EN LA INDUSTRIA

	Hasta 24	De 25 a 29	De 30 a 34	Menor de 35	De 35 o más	TOTAL
CAMPO	73,4%	67,4%	58,4%	65,6%	41,7%	49,5%
ALIMENTACIÓN	28,7%	26,4%	29,3%	28,2%	24,4%	25,4%
DEFENSA	28,0%	8,0%	10,9%	12,0%	22,0%	19,2%
ENERGÍA	36,9%	35,6%	15,8%	24,1%	17,6%	19,0%
INDUSTRIA						
BÁSICA	17,4%	36,6%	18,9%	25,3%	22,5%	23,1%
BIENES DE CONSUMO	30,2%	29,9%	29,7%	29,9%	25,6%	26,8%
BIENES DE EQUIPO	19,6%	29,8%	16,6%	21,1%	28,8%	26,8%
TOTAL ÁMBITO FEDERAL	38,9%	37,0%	28,2%	33,2%	27,8%	29,3%

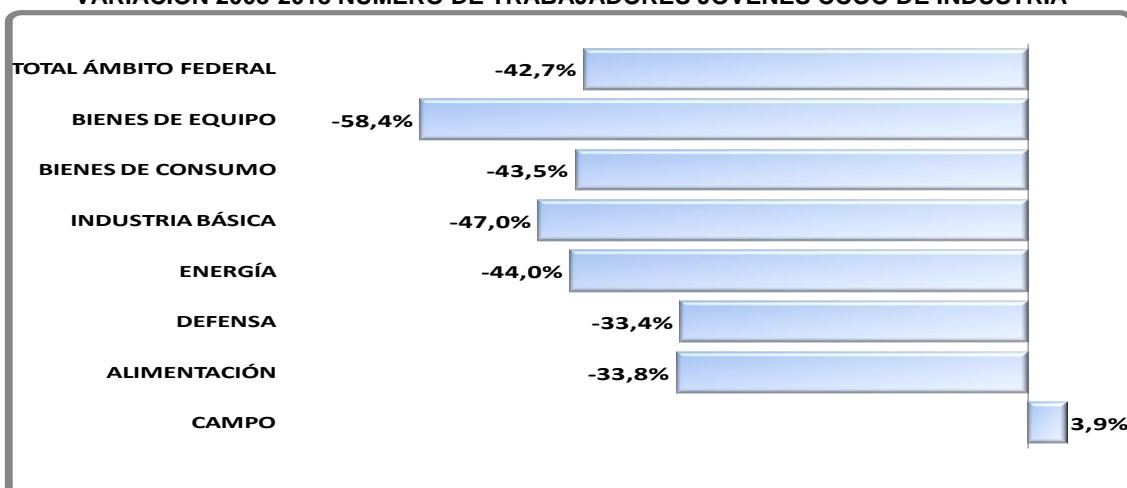
Además, es mayor la precariedad que soportan los jóvenes en la industria, medida como subempleo por sobre cualificación. En esta situación se encuentran el 33%, mientras que entre el total de nuestra población laboral alcanza el 29%. No obstante, hay que resaltar que se da más subempleo cuanto menor es el trabajador, probablemente por consecuencia del acceso al empleo por las categorías más bajas, tendencia que se ha mantenido en el tiempo. Sin duda, está relacionado con el hecho de que nuestra población entre 25 y 29 años cuenta con un 39% de personas con nivel formativo superior (universitario o FP superior).

TEMPORALIDAD DE JÓVENES EN LOS SECTORES ÁMBITO CCOO DE INDUSTRIA



En situación de empleo a tiempo parcial hay un total de 58.837 jóvenes, lo que supone el 35% de la población. Aquí la precariedad también es más acusada que en el caso de los mayores de 34 años, puesto que el 54% de los jóvenes sometidos a esta jornada están descontentos con la misma, siendo el 41% en el caso de la población mayor.

VARIACIÓN 2008-2018 NÚMERO DE TRABAJADORES JÓVENES CCOO DE INDUSTRIA



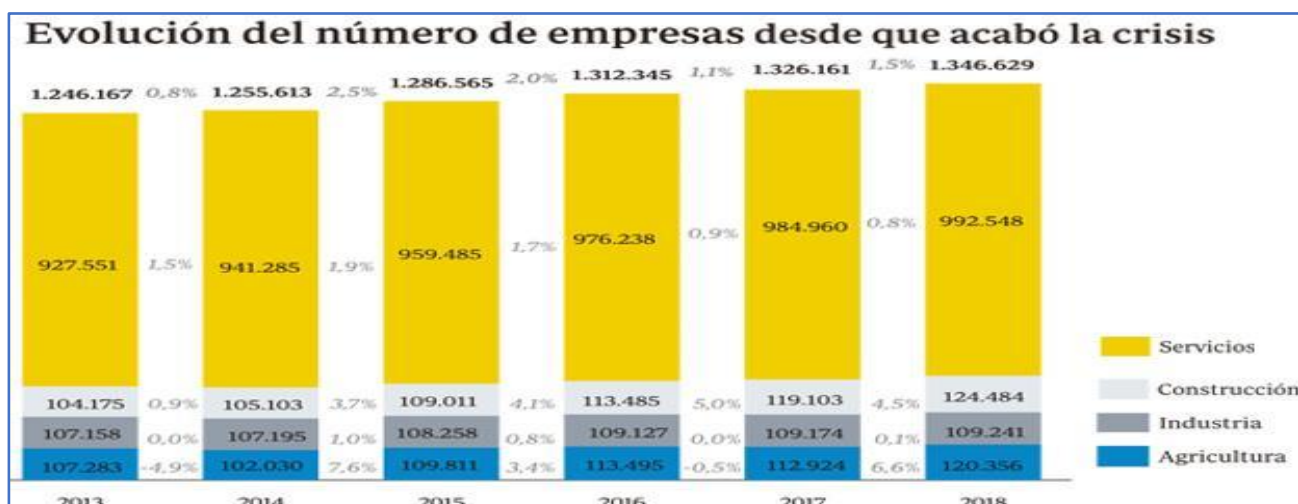
Este es uno de los subproductos de la extrema flexibilidad externa en la organización de los procesos de trabajo, que aporta nuevos vectores de precariedad laboral que multiplican la erosión de las rentas salariales y la inestabilidad al introducir jornadas irregulares y, a veces, impredecibles para el trabajador. Al fin y al cabo, no se trata más que de una nueva segmentación del mercado de trabajo que abunda en la disociación de la autopercepción de los trabajadores en su condición de obrero colectivo.

NIVEL FORMATIVO ÁMBITO CCOO DE INDUSTRIA SEGÚN EDAD							
		Hasta 24	De 25 a 29	De 30 a 34	Menor de 35	De 35 o más	TOTAL
CAMPO	HASTA PRIMARIOS	10,8%	18,6%	23,5%	18,3%	32,5%	27,9%
	SECUNDARIA 1ª ETAPA	61,0%	50,9%	49,1%	53,0%	43,5%	46,6%
	SECUNDARIA 2ª ETAPA	23,0%	17,0%	16,0%	18,3%	15,4%	16,3%
	FP GRADO SUPERIOR	3,6%	8,0%	3,8%	5,1%	3,9%	4,3%
	UNIVERSITARIOS	1,6%	5,4%	7,7%	5,2%	4,7%	4,9%
	TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
ALIMENTACIÓN	HASTA PRIMARIOS	6,7%	5,1%	7,0%	6,3%	8,9%	8,2%
	SECUNDARIA 1ª ETAPA	55,6%	36,2%	38,5%	41,4%	44,1%	43,3%
	SECUNDARIA 2ª ETAPA	19,1%	27,2%	14,3%	19,6%	22,1%	21,4%
	FP GRADO SUPERIOR	9,2%	12,7%	16,1%	13,5%	11,1%	11,8%
	UNIVERSITARIOS	9,4%	18,8%	24,1%	19,2%	13,8%	15,3%
	TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
DEFENSA	HASTA PRIMARIOS	18,3%	0,0%	0,0%	2,3%	1,2%	1,5%
	SECUNDARIA 1ª ETAPA	0,0%	14,1%	13,6%	12,1%	18,1%	16,4%
	SECUNDARIA 2ª ETAPA	14,6%	20,7%	32,4%	26,1%	20,9%	22,4%
	FP GRADO SUPERIOR	28,0%	8,0%	9,2%	11,2%	29,0%	24,0%
	UNIVERSITARIOS	39,0%	57,3%	44,7%	48,3%	30,7%	35,7%
	TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
ENERGÍA	HASTA PRIMARIOS	9,8%	0,0%	0,0%	0,9%	2,4%	2,1%
	SECUNDARIA 1ª ETAPA	29,5%	28,1%	24,4%	26,0%	24,0%	24,4%
	SECUNDARIA 2ª ETAPA	10,6%	12,8%	27,9%	21,5%	21,4%	21,4%
	FP GRADO SUPERIOR	36,9%	19,9%	19,4%	21,2%	19,8%	20,1%
	UNIVERSITARIOS	13,2%	39,2%	28,3%	30,3%	32,4%	31,9%
	TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
INDUSTRIA BÁSICA	HASTA PRIMARIOS	5,9%	2,2%	3,6%	3,4%	4,0%	3,8%
	SECUNDARIA 1ª ETAPA	43,3%	26,2%	40,3%	35,5%	29,1%	30,6%
	SECUNDARIA 2ª ETAPA	42,5%	14,1%	16,7%	19,3%	20,6%	20,3%
	FP GRADO SUPERIOR	7,5%	28,8%	15,3%	19,2%	18,5%	18,7%
	UNIVERSITARIOS	0,8%	28,6%	24,1%	22,5%	27,8%	26,6%
	TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
BIENES DE CONSUMO	HASTA PRIMARIOS	0,0%	5,3%	3,4%	3,5%	4,6%	4,3%
	SECUNDARIA 1ª ETAPA	26,0%	26,9%	34,5%	30,3%	32,8%	32,1%
	SECUNDARIA 2ª ETAPA	43,4%	26,0%	24,8%	28,5%	26,3%	26,9%
	FP GRADO SUPERIOR	24,5%	23,1%	24,5%	24,0%	21,7%	22,4%
	UNIVERSITARIOS	6,1%	18,8%	12,7%	13,7%	14,6%	14,3%
	TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
BIENES DE EQUIPO	HASTA PRIMARIOS	1,2%	3,7%	2,6%	2,7%	4,9%	4,3%
	SECUNDARIA 1ª ETAPA	22,4%	27,9%	34,0%	30,1%	27,9%	28,5%
	SECUNDARIA 2ª ETAPA	43,9%	22,9%	32,1%	31,3%	21,9%	24,4%
	FP GRADO SUPERIOR	21,8%	22,4%	17,5%	19,7%	26,8%	24,9%
	UNIVERSITARIOS	10,8%	23,1%	13,8%	16,1%	18,5%	17,9%
	TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOTAL ÁMBITO FEDERAL	HASTA PRIMARIOS	5,4%	6,8%	6,7%	6,5%	9,2%	8,5%
	SECUNDARIA 1ª ETAPA	41,1%	32,8%	36,9%	36,3%	33,5%	34,3%
	SECUNDARIA 2ª ETAPA	32,4%	21,7%	23,4%	24,6%	21,7%	22,5%
	FP GRADO SUPERIOR	14,4%	18,6%	16,3%	16,7%	18,4%	18,0%
	UNIVERSITARIOS	6,7%	20,0%	16,7%	15,9%	17,1%	16,8%
	TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

El tejido empresarial en la industria española

Respecto al tejido industrial, todos los sectores tienen más empresas que hace cinco años, pero no todos se han expandido con la misma intensidad. Proporcionalmente, el que más ha engordado ha sido el de la construcción. Actualmente hay en España un 20% más constructoras que hace cinco años, mientras que el censo de industrias ha aumentado en un exiguo 1,9%, el de empresas de servicios ha crecido un 7%, y el de empresas agropecuarias lo ha hecho en un 12%. Por cada nueva industria que nace en España se crean 20 empresas constructoras. Es lo que se está dando en nuestro país desde que arrancó la recuperación económica al acabar 2013.

A pesar de todo, en el tejido empresarial industrial el número de empresas crece en torno al 4%, duplicando la tasa que presenta toda la economía. En cifras, ha crecido 13.150 empresas, lo que aporta el 40% del crecimiento total del número de empresas españolas. Según los registros de la Seguridad Social, en España hay actualmente 1,35 millones de empresas con asalariados -la cifra no incluye a los autónomos que no tienen trabajadores a su cargo-. De ellas, 993.000 están encuadradas en el sector servicios, casi 125.000 en la construcción, 120.000 pertenecen al sector agropecuario y 109.000 son empresas industriales.



Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social (empresas con asalariados).

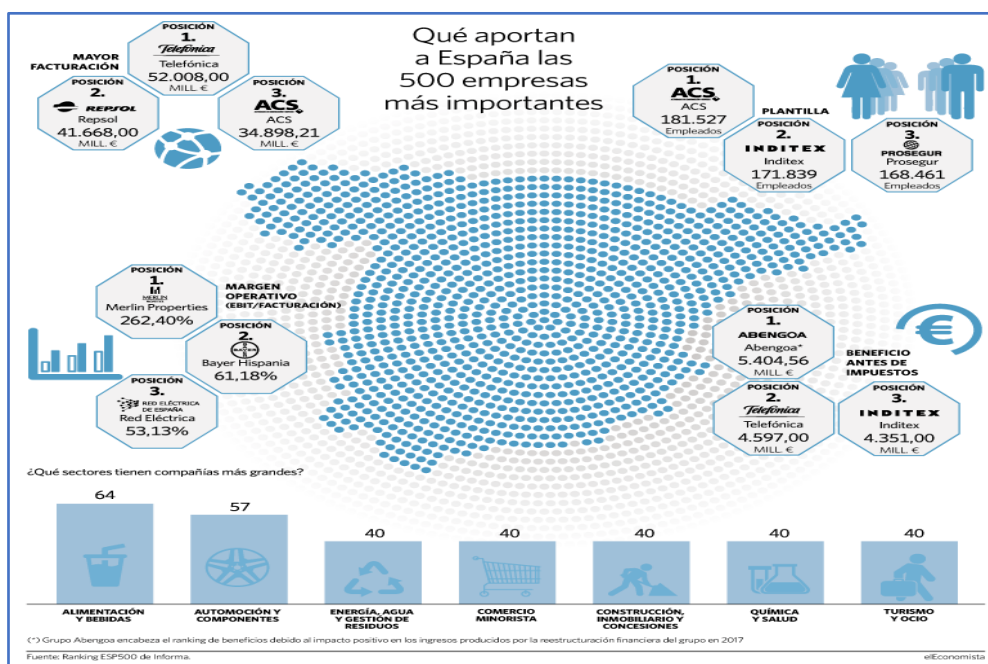
El sector agroalimentario es de los más importantes en España, seguido de la industria de los componentes de automoción, el turismo, las infraestructuras y la ingeniería. De las 500 mayores compañías no financieras por tamaño, hasta 121 -un 24%- pertenecen a estos dos sectores industriales. Los sectores de alimentación y de automoción son los dos que concentran un mayor número de grandes empresas en España. El primero con 64 compañías entre las 500 mayores empresas, mientras que el de la automoción concentra hasta 57 grandes firmas. Las siguen los sectores de energía, agua y gestión de residuos; el comercio minorista; la construcción, inmobiliario y concesiones; la química y salud; y el sector del turismo y ocio, todas ellas con 40 empresas³⁰.

³⁰ Primera edición del Ranking ESP500, la clasificación anual realizada por el Economista en colaboración con Informa. Sus datos ponen de manifiesto la caída del peso del sector industrial

El sector que más aporta al crecimiento total es el agrícola, cuyas explotaciones y empresas crecen en casi 4.300 unidades, lo que significa un 3,6%. El siguiente que más aporta es el de Bienes de Equipo, que crece en casi 3.000 empresas - un 3,2% en el último año-, sobre todo, por el crecimiento en el número de empresas que se dedican a la reparación y mantenimiento de Bienes de Equipo y el número de empresas dedicadas a la instalación tanto eléctrica como de fontanería.

La Industria Alimentaria aporta 2.364 nuevas empresas, un 11,4% más que en 2017. Este crecimiento se ha debido al número de empresas que se dedican a fabricar pan y pastas alimenticias. El de la Industria Base crece en 458 empresas, un 4,9% más que en 2017, donde han sido determinantes las Industrias Químicas (111 empresas más); las Industria de Metales Especiales y Forja (141) y la Siderurgia (106); por el contrario, la Industria Extractiva decreció en seis empresas.

El sector de la construcción ha sumado 20.300 empresas en cinco años; la industria, apenas 2.100. Bienes de Consumo aporta 2.714 empresas nuevas, un 4,8% más que en 2017. Salvo el sector de Gama Blanca, todos han crecido. El que más lo ha hecho ha sido el de Automoción, como consecuencia de la apertura de talleres de mantenimiento y reparación de vehículos.



En el caso del área de energía, el número de empresa crece en 281, un 3,8%, gracias a las eléctricas, en las que se dan de alta 245 generadores y comercializadores. Por último, del área de Defensa surgen 106 empresas según el DIRCE, un 12% más que en 2017, como resultado de la multiplicidad de empresas navales que han surgido al albor de la reactivación de los contratos en este sector.

en España en contraposición con el avance de las empresas del sector servicios. Entre las 500 mayores empresas no hay ninguna gran compañía de tecnología.

Comercio exterior y balanza comercial española

Las empresas españolas han afianzado su posición exportadora en Europa durante todos los años de la crisis. La proximidad geográfica, la libre circulación de mercancías y personas y el euro han hecho de este mercado el favorito para España. Estas relaciones comerciales han sido muy beneficiosas, pero ahora que Europa está pasando un mal momento, el contagio es inmediato. De hecho, la ralentización de la economía del Viejo Continente es más perjudicial para las exportaciones de España que la guerra comercial.

Las exportaciones del sector industrial han mostrada debilidad en el año 2018, mientras repuntan las importaciones. Reflejo de un escenario internacional plagado de incertidumbres por las disputas comerciales, la ralentización de China y Europa, el Brexit, las dificultades del automóvil. El efecto de Alemania³¹ tiene consecuencias en el resto de Europa y en España, arrastrando primero a Francia e Italia. Un 65% de las exportaciones de España se dirigen a la UE y el 50% a la zona euro.

En este terreno, la industria española solo aporta 14 puntos de PIB. Una parte significativa se achaca al automóvil, cuya producción de unidades disminuyó un 1% en 2018 (lo mismo que sobre el total de la economía) por las dificultades para adoptar los nuevos estándares medioambientales y por las dudas de los consumidores sobre qué tipo de motores comprar. La dependencia en este sector de Alemania es importante³². Este país es el principal proveedor de España y el segundo comprador tras Francia. Las exportaciones españolas a Alemania suponen el 10,7% de las ventas al exterior.

La industria del automóvil es una de las más afectadas por el declive, extendiéndose al resto de los sectores. Una parte importante del empeoramiento se debe al sector del automóvil, cuyas exportaciones nominales disminuyeron un 1,5% en 2018 (-5% la financieras). Tendencia que se explica por la virulencia de la guerra comercial y un entorno global cada vez más incierto. Otro factor que pesa sobre la industria es el de la adaptación al cambio climático. Una transición que incorpora la necesidad de reducir las emisiones de carbono y una oportunidad para disminuir nuestra dependencia a la importación de hidrocarburos y lograr una posición puntera en la producción de energías renovables. La divergencia entre los sectores más expuestos a la competencia internacional y los que dependen de la demanda interna no es sostenible.

Por otra parte, España es un país muy dependiente del exterior en lo que se refiere a energía: *el petróleo se importa y se exporta después refinado. El precio del crudo y sus vaivenes influyen mucho*. Si se deja de lado el capítulo energético, el saldo no energético arrojó un déficit de 1.880 millones de euros, superior al déficit de 1.124,4 registrado en enero de 2018.

³¹ Alemania supone casi un tercio de la economía de la zona euro y tiene como principales receptores de sus mercancías a China, EEUU, Francia y R. Unido.

³² Por un lado, España produce componentes para los fabricantes germanos de vehículos, que están sufriendo dificultades para adaptar la nueva normativa medioambiental y que venden menos, sobre todo a China. Por otra, buena parte de la producción española son vehículos más bien pequeños y medianos que se comercializan en el resto de Europa.

Las exportaciones españolas crecieron en 2018 por deajo del año anterior (2,9%) y alcanzar los 285.024 millones de euros, en medio de la ralentización económica, el Brexit y las tensiones comerciales. Esa subida obedeció a aumentos de precios. En volumen, las ventas al exterior retrocedieron un 0,1%, la primera caída desde 2009, cuando perdieron un 9% en plena crisis. Como las importaciones mantienen la senda ascendente (5,6%), en línea con la demanda interna, la aportación neta del sector exterior al crecimiento es claramente negativa. En este marco, España pierde el paso en las exportaciones con menos ventas a la zona euro, América Latina y China.

Con el crecimiento de las exportaciones, las importaciones, como ocurre en el momento en el que la actividad se recupera, crecen en mayor porcentaje, de ahí que el saldo comercial se deteriore. Estos déficits se compensan con las ventas de los servicios y el turismo para arrojar un saldo positivo con el exterior. El saldo exterior positivo empeoró en 2018, desde el 2,1% al 1,4% del PIB. Los bienes no energéticos, la energía y el turismo³³ acaparan el 65% del deterioro del saldo. Las ventas de bienes y servicios al exterior aumentan una tercera parte de lo que lo hacían en 2017 y la mitad de la participación en el PIB nominal.

La pérdida de dinamismo de las exportaciones se aprecia en la inversión empresarial en bienes de equipo, que sufre un acusado frenazo, así como las manufacturas de consumo, que también han moderado bastante sus crecimientos respecto a 2017. Justo los sectores que aportan un mayor valor añadido. Por países, lastraron mucho las ventas hacia Alemania, R. Unido, Italia o Turquía.

Con la crisis, las exportaciones españolas de bienes y servicios empezaron a ganar peso en la producción, hasta mediados de 2017. A partir de ahí empiezan a estabilizarse. Preocupa que las exportaciones hayan dejado de ser el motor de la economía española. Aunque el número de empresas exportadoras crece, retrocede el de compañías que exportan 250 millones o más.

Según el primer informe del Observatorio de Pymes Exportadoras, elaborado por MESIAS (Inteligencia Marca España)³⁴, los sectores que cuentan con mayor actividad exportadora en número de empresas son la industria y los servicios, con un 48,6% y un 38,3% del total, respectivamente. Le sigue de lejos el sector del transporte, con un 6,2%. El número de empresas que exportan regularmente aumentó hasta 51.768 organizaciones en el último ejercicio, un 2,4% más que en 2017, y alcanzó un nuevo récord. Los principales sectores en términos de peso sobre las exportaciones totales fueron los bienes de equipo (con un aumento del 10,4% interanual), alimentación, bebidas y tabaco (-1%), productos químicos (1,6%) y sector automóvil (-20,3%).

Por comunidades autónomas, La Rioja lidera el ranking en el sector industrial con el 76% de sus pymes exportadoras pertenecientes a este sector, seguida

³³ Por primera vez, este sector creció por debajo de la economía nacional, lo que no se producía desde el año 2009.

³⁴ Conclusiones del Observatorio Mesias de pymes exportadoras a partir de datos e Iberinform sobre casi 30.000 empresas.

por Navarra (69,7%) y País Vasco (63,6%). Mientras que en el sector servicios son Ceuta, Melilla y Canarias las que lideran esta lista.

Por primera vez, desde 2006, las exportaciones españolas de mercancías se han comportado peor que la media europea. Si crecieron un 2,9% en 2018, las de la media de la zona euro avanzaron a tasas del 4,4% anual. A partir de 2007 empezaron a volcarse con el exterior ante las primeras señales de contracción de la demanda interna. Desde entonces, la mejora ha sido prácticamente ininterrumpida. Pero la tendencia podría estar cambiando en un contexto de desaceleración generalizada en el exterior. Para este año *“inquieta la evolución de cara al comienzo de 2019. La tendencia a finales de año ha empeorado claramente”*³⁵.

El año 2019 arranca sin récord de exportaciones. Las ventas al exterior bajan y las importaciones se incrementan, marcando otro máximo histórico en el mes de enero. Como resultado, el déficit comercial de España -la brecha entre lo que compra y lo que vende al exterior- crece. La caída llega en medio de la desaceleración en el crecimiento que está atravesando la zona euro, donde se dirigen más de la mitad de las exportaciones españolas.



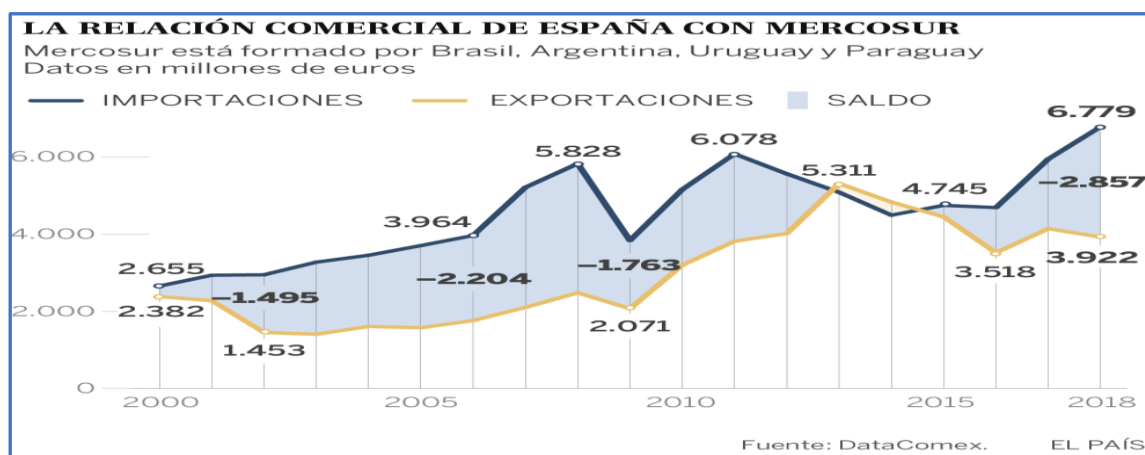
Fuente: Ministerio de Economía. EL PAÍS

Por primera vez, desde el inicio de la crisis, las exportaciones perderán peso en el conjunto de la economía tras crecimientos ininterrumpidos, desde el 15% del PIB de 2009 hasta el 24% de la actualidad, lo que implica una pérdida de competitividad, en la que los precios energéticos han jugado un papel predominante.

El reciente acuerdo UE-MERCOSUR ha producido cierto júbilo en la industria -sobre todo, las fábricas de coches- y gran preocupación en el campo. El pacto promete impulsar las exportaciones industriales (automóvil, maquinaria, textil calzado, ...) a un área hasta ahora muy cerrada, pero genera temores en agricultores, ganaderos (los productores de frutas y hortalizas, los de carne de vaca y ave, azúcar, etanol, arroz y miel). El sector del cítrico puede ser el más perjudicado, por su alto nivel actual de exportaciones a la UE y que se verán afectadas por los productos de americanos, mientras que el sector de automoción consigue llegar a un área hasta ahora muy protegida, que gravaba

³⁵ Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores.

la importación de vehículos con un arancel del 35%, y al que se exportaba de forma bastante limitada.



Un nuevo proyecto para la cohesión económica, social e industrial

En el mundo subsisten varios modelos de desarrollo: *el norteamericano (EEUU y R. Unido), basado en el éxito individual y el beneficio a corto plazo, y el modelo renano (Alemania, Bélgica, Holanda, los países del norte de Europa y Japón) que daba más relevancia al éxito colectivo, al valor del consenso y a los logros económicos y sociales a largo plazo.*

La globalización ha ampliado el escenario del debate. Ahora en el mundo se vislumbran tres grandes sistemas: *EEUU, China y Europa*. Los dos primeros están enzarzados en una desenfundada y peligrosa guerra comercial, en busca del dominio económico y militar. Europa ha ido perdiendo influencia en ambos terrenos, pero sigue siendo el modelo de referencia para los ciudadanos de todo el mundo que valoran los derechos sociales, la necesidad de actuar frente al cambio climático y la importancia de la paz: *fortalecer la cohesión de la UE es la única opción consecuente para asegurar su propia existencia y los valores y derechos que preconiza.*

Las tres últimas décadas han constituido la fase inicial de la transformación global. La construcción de una economía de mercado globalizada que ha estado dominada por las finanzas y las multinacionales estadounidenses. Los defensores de un sistema de libre mercado reforzaron las normas en beneficio del sector financiero y manipularon el sistema con derechos de propiedad intelectual. *“Los gobiernos, encabezados por el de EEUU, concedieron inmensos subsidios a sus empresas y recortaron los impuestos sobre el capital, lo que derivó en la economía de mercado menos libre de la historia”³⁶.*

Mientras tanto, el sistema de distribución de rentas del siglo XX se ha roto. Antes, la parte de las rentas correspondiente al capital y la parte correspondiente a la mano de obra solían ser más o menos constantes. Ahora, la parte del capital ha

³⁶ *“Es urgente una nueva agenda de izquierdas”*. Guy Standing es profesor titular e investigador en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres. El País 300619.

aumentado y la de los dueños de propiedades físicas, financieras e intelectuales ha aumentado todavía más deprisa. Por el contrario, los salarios se han estancado o han descendido en términos reales, especialmente entre el precariado. Para poder recortar impuestos, sobre todo a los ricos y el capital, las prestaciones y los servicios del Estado se han reducido o son más difíciles de obtener. Los empresarios han disminuido las prestaciones para gran parte de sus empleados. Y también se ha reducido el acceso a los servicios sociales, tan necesarios para los grupos de rentas bajas.

El colapso del sistema de distribución de rentas agudiza las desigualdades y refleja y refuerza la nueva estructura mundial de clases. Es fundamental entender esto para construir una nueva política progresista, capaz de combatir el populismo de derechas a ambos lados del Atlántico. Porque los grupos del precariado están creciendo y está empezando a forjarse una agenda política progresista, en parte por la inercia de los partidos socialdemócratas.

Lo que es evidente es que, si no cambian el proceso, se refuerza el capitalismo sin reglas de juego -es decir, la desregulación de sectores sin apenas mecanismos de supervisión- propiciando que las naciones de rentas altas dejen de ocupar su privilegiado lugar en el mundo. La primera revolución de la industria premió a la innovación y al capital, en detrimento de la protección del empleo y del trabajo, lo que hubo que conquistar con la movilización de los incipientes sindicatos. Las siguientes revoluciones incorporan la misma dinámica, por lo que el papel del sindicato para corregir los desequilibrios sociales sigue siendo importante. El único problema es la disposición de las instituciones, y con ello de las empresas, a la hora de compartir esos avances y otorgar al sindicato el papel que le corresponde para la defensa del empleo y de las condiciones de trabajo, preservando el bienestar social de la ciudadanía.

Se necesita crear un nuevo orden mundial, con un mejor punto de equilibrio. Sin instituciones globales fuertes se corre el riesgo de una fragmentación que vuelva a dar poder solo a los más fuertes. ¿Serán capaces de convencer chinos y europeos a los americanos de seguir jugando con las mismas reglas? El impacto económico de las tensiones comerciales, provocadas por las políticas de Donald Trump, están afectando más a Europa y a China que a EEUU, mientras que los países emergentes continuarán liderando el crecimiento a medio-largo plazo y sectores como, sobre todo, el tecnológico -en todos sus aspectos (robótica, inteligencia artificial, tratamiento masivo de datos, transporte, relaciones sociales...)- seguirán teniendo un importante impulso y siendo grandes generadores de valor a medio plazo.

Es sumamente preocupante, y que da una visión clara de los objetivos del capitalismo a ultranza, que el país más liberal a la hora de priorizar la política de libre mercado sobre el control institucional abogue, en nombre de la seguridad nacional, vetar decisiones tomadas por las empresas privadas respecto a sus proveedores. Aunque no sería la primera vez que órdenes ejecutivas de Trump terminan siendo primero anuladas y posteriormente suspendidas en los tribunales correspondientes, eso sí, habiendo generado antes un auténtico caos en los campos que se ven afectados.

En el sector tecnológico, ligado al consumo final, se contemplan las nuevas pautas de comportamiento de los usuarios, generando su uso casi un 35% de la población global. Nos hallamos a las puertas de una nueva era que permitirá mejorar todas las industrias, abastecer la hiperconectividad del Internet de las Cosas o facilitar una nueva experiencia ante los dispositivos digitales.

En este marco, es preciso recordar el pulso que, *en formato de guerra fría*, mantienen por la hegemonía tecnológica EEUU y China, una batalla que condicionará la evolución de la economía mundial. Lo que empezó como los primeros pasos de una guerra comercial en 2018, con la imposición de aranceles sobre un número creciente de productos, ha ido evolucionando hasta dejar ver la complejidad de la confrontación entre las dos potencias, donde EEUU ha puesto a las grandes compañías chinas del sector como ZTE, Tencent o Huawei, en el punto de mira de sus acciones. La *“nueva guerra fría”* es tecnológica. De tal forma que la emergencia de las empresas tecnológicas chinas en la economía global amenaza el dominio que hasta ahora tenían las empresas estadounidenses del sector.

El resultado del conflicto comercial entre EEUU y China marcará la tendencia definitiva. Mientras tanto, la estadounidense sigue siendo la locomotora que tira de la economía mundial y China confirma el proceso que vive en los últimos años de *“aterrizaje suave”*, aunque sigue duplicando el crecimiento económico de EEUU (6,6%). El ritmo de la zona euro se refleja en una mayor caída del crecimiento (1,7%), como consecuencia de la menor generación de empleo que se viene produciendo y que se prolongará.

Pero eso no es todo, el Consejo de Ministros de la UE ha analizado las implicaciones para la seguridad del despliegue de la quinta generación de telefonía móvil (5G). Define como alarmante y preocupante el panorama si lo unimos al desarrollo de la Inteligencia Artificial (AI): *“podría afectar a un cambio radical en el marco actual de seguridad pública, provocando la privatización de la seguridad y emergiendo nuevas formas de terrorismo que afecta a la vulnerabilidad de los ciudadanos, las economías y los países, aumentando el peligro de forma proporcional a su conectividad e interdependencia y disparándose con la llegada del 5G”*.

Por otra parte, es consciente de que sus empresas parten con una gran desventaja en el ámbito de la financiación. En Asia, sus compañías están repletas de capital público, mientras que EEUU cuenta con un mercado de capitales muy diversificado: *“el 86% de las empresas de la UE dependen aún de la financiación bancaria, proporción que no llega al 65% en EEUU, donde las firmas tienen acceso al capital de multitud de instrumentos financieros, desde fondos de capital riesgo a business angels”*³⁷. La estrategia de la UE pasa por completar la Unión del Mercado de Capitales, desplegar los planes de inversiones, en especial InvestEU, y adaptar las normas de competencia en el caso de sectores de interés europeo en los que los mercados financieros no lleguen.

³⁷ Según la Asociación para los Mercados Financieros en Europa (AFME, por sus siglas en inglés).

Mientras tanto, las grandes compañías mundiales diversifican sus negocios hacia actividades ajenas a las que vienen desarrollando, tratando de acomodarse al avance tecnológico y sus nuevas realidades. Lo que incorpora una mayor capacidad de inversión y, por tanto, la necesidad de abordar amplios procesos de compras, fusiones y absorciones. Por otra parte, la Gran Depresión forzó a que los grupos ampliara su ámbito de actuación a otros territorios, huyendo de los débiles mercados locales: Apple anuncia su incursión en el mundo de la televisión y las tarjetas de crédito; las petroleras derivan hacia energías limpias; la banca explota los servicios; las fábricas de automóviles ensayan fórmulas para que los coches no se compren; y las operadoras telefónicas hasta se atreven a dar préstamos personales.

El Massachusetts Institute of Technology (MIT) analiza las escisiones: *“han sucedido en bienes de consumo, como cuando Kraft escindió su negocio de comestibles en Norteamérica o cuando Alcoa separó los negocios de aluminio e ingeniería; o en tecnología, cuando HP separó los servicios del software de las impresoras”*. Los estudios cifran el éxito de la diversificación en el 40% o el 60% de los casos y se están utilizando desinversiones para financiar nuevas apuestas en tecnología, productos, mercados y geografías.

Mientras tanto, la OCDE desvela en su informe de 2019 que en el club de los países con economías desarrolladas muchos de los actuales empleos sí acabarán automatizados. Advierte que los países deben tomar medidas para garantizar que sus ciudadanos están preparados para asumir sus nuevos papeles en el mercado laboral. La advertencia es más clara en el caso de España: *“es uno de los países con más empleo en riesgo de ser automatizado - uno de cada cinco puestos de trabajo- y presenta bastantes carencias para hacer frente a este reto”*. La transición no será fácil y *“sin una acción inmediata”* la brecha entre la población que puede encontrar trabajo y la que no, crecerá.

De media, el 14% del empleo de los países de la OCDE (36 economías) están en riesgo de automatización. La horquilla se mueve entre el 6% de Noruega y el 34% de Eslovaquia. España está en la parte alta de la tabla, con el 21,7%. Además, otro 32% del empleo sufrirá *“una transformación radical por el avance de la tecnología”*. El organismo lanza una larga lista de alarmas: *“la población de las economías avanzadas está envejeciendo y en 2050 se espera que el 53% de los países tengan más de 65 años (ahora son cerca de 30%)³⁸; el 60% de los empleos no tiene las habilidades adecuadas para el nuevo empleo que llega; la formación no la recibe la población laboral que más la precisa; y los sistemas de protección social se han quedado obsoletos para muchos grupos, lo que eleva las tasas de trabajadores pobres”*.

Es urgente que el mundo reaccione ante los retos a través de nuevos sistemas fiscales, de incentivos a la educación y de unas plataformas de habilidades profesionales que permitan a los trabajadores ocupar empleos que en la

³⁸ En 1900 Europa representaba el 20% de la población mundial, en 1960 el 13,5% y, en 2015, ha bajado al 6,9%, con una estimación de llegar al 5% en 2040. La crisis demográfica combina dos factores: *el aumento de la esperanza de vida hasta los 81 años de media y una grave crisis de natalidad (la media de la UE es de 1,5 hijos por mujer y España llega a 1,2)*.

actualidad ni siquiera existen, por la automatización de las cadenas de valor de industrias y empresas mediante la robotización de sus modelos productivos.

Por otra parte, *el último informe del Relator Especial para la salud de la ONU*³⁹, que el 24 de junio fue enviado a Ginebra, destaca “*la importancia del entorno social, psicosocial, político, económico y físico a la hora de gozar de una buena salud mental y apunta la obligación de los Estados de establecer medidas que garanticen el respeto de los derechos humanos y propicien la vinculación social como alternativa al modelo biomédico, que utiliza criterios restringidos e individuales para la prevención de los problemas de salud mental*”.

El informe alerta de que “*los actuales avances se ven amenazados por un movimiento creciente de poderosos grupos de interés mundiales que se oponen a los principios universales de derechos humanos y sostienen que ha fracasado el orden mundial de la posguerra*”. Para ello, la actuación del sindicalismo viene siendo una base fundamental para paliar los problemas vinculados a la salud mental.

Superar la fuerte debilidad del proyecto europeo

Las elecciones europeas han constatado el crecimiento del populismo, que supone el rechazo o resistencia a la mediación de las instituciones políticas y, en consecuencia, la tendencia a ofrecer soluciones simples a problemas complejos. La posición populista abarca tanto la presunción de una identidad nacional atacada desde fuera por los inmigrantes, con las adherencias racistas que ello implica en los órdenes laboral y económico; como la presunción de que es sencillo acabar con la desigualdad y la injusticia identificando a los que están arriba como opresores de los de abajo.

La capacidad de reacción que se manifiesta ante las consecuencias negativas del cambio climático que nos abruma, debiera estar acompañada de un debate sobre el futuro de las políticas sociales en el mundo (miseria y pobreza; precariedad y desigualdad; emigración y xenofobia; homofobia y violencia de género; populismos y neofascismo; falta de transparencia de las organizaciones financieras mundiales y débil control de la ONU; ...), así como, de las consecuencias de un mercado laboral mundial de mano de obra que tiende a igualar a la baja las condiciones laborales. Lo que motiva la existencia de una extrema preocupación sobre el sistema económico, laboral y social que se está diseñando para el futuro.

El último Eurobarómetro, de noviembre 2018, ofrece una alarmante opinión: *los ciudadanos de los países del sur desconfían de la UE*. Se hace evidente que prácticamente toda la orilla mediterránea (España, Francia, Italia, Eslovenia, Grecia, Chipre) tiene una confianza en la UE inferior a la media. Se trata de una enorme bolsa de euroescepticismo que incluye a más de 180 millones de personas con un PIB de 6,6 billones de dólares. Un factor es la especial dureza

³⁹ Informe “*Sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental*”.

con la que la Gran Recesión ha golpeado a varios de estos países en la última década y que los ciudadanos asocian a la política monetaria de la UE y a la rigidez de la Zona Euro. En esta región, el paro es más alto que en el norte y la tasa de crecimiento del PIB (con la excepción de España), más baja.

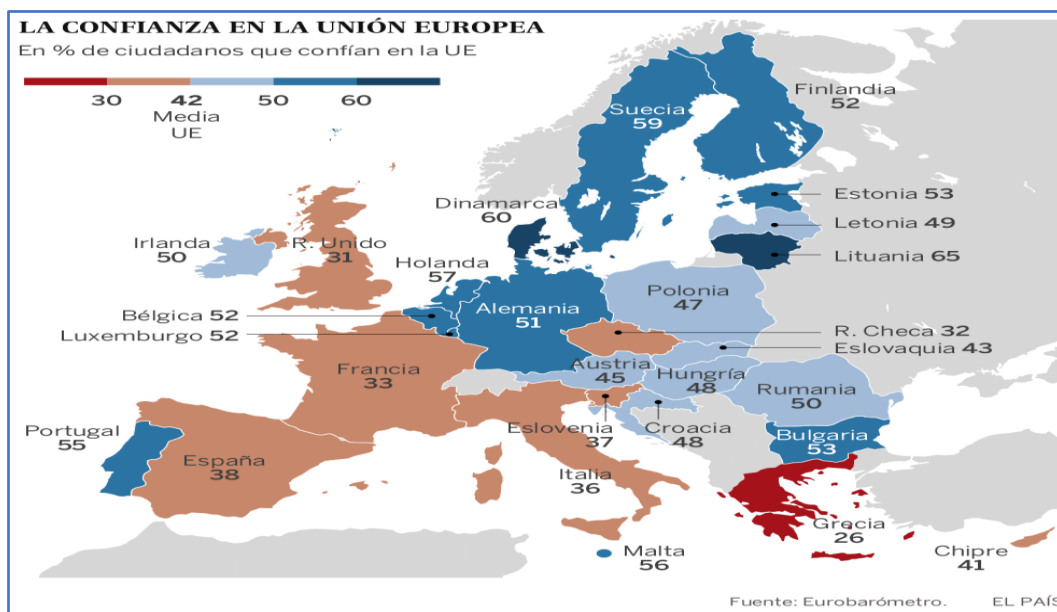
Ante la clara convergencia de intereses de todo el grupo para una mayor integración de la Zona Euro -avance en la unión bancaria, constitución de un presupuesto conjunto, etcétera-, estos países han sido incapaces de articular una sólida posición común en muchas materias. Esa desunión ha debilitado la capacidad de estos países de lograr respuestas comunitarias en línea con las expectativas de amplias capas de sus ciudadanías.

Debemos ser conscientes del momento difícil que vive la UE, lleno de riesgos y retos, y de la importancia del resultado de las elecciones al Parlamento Europeo de finales de mayo para el futuro de Europa a la hora de afrontar la inquietante perspectiva económica y social del continente. Destacar la alta participación (51%), por lo que el avance de la derecha ultra ha resultado más tímido. El abanico político se abre de forma sustancial, sin obviar la victoria xenófoba en Francia, Italia, el Partido del Brexit en R. Unido, los flamencos de Bélgica o la debacle en Grecia de Tsipra, así como la ya prevista de Hungría y Polonia, lo que refleja una seria advertencia y preocupación para el futuro.

Por otra parte, ni socialdemócratas ni conservadores alcanza una mayoría absoluta en la Eurocámara. Lo conservadores europeos serán la primera fuerza, requiriendo alianzas más amplias para gobernar, destacando la fuerte pérdida de socialdemócratas alemanes en favor de liberales y verdes, además del debilitamiento del eje francoalemán, lo que puede dificultar la consecución del modelo europeo del futuro.



Los avances de la ultraderecha derivan de los graves errores cometidos por las fuerzas democráticas: *aceptar la austeridad como única política económica posible y debilitar así el consenso político en torno al Estado de bienestar; además de aceptar la idea de que los populismos que prendieron entre los sectores sociales abandonados a su suerte por esta decisión planteaban correctamente los problemas, aunque ofrecían soluciones equivocadas.*



Lo que los populismos suelen ofrecer son recetas ideológicas incompatibles con el sistema democrático. La tendencia creciente del populismo de derechas en la UE resulta negativa para el impulso de una mayor integración europea lo que, en épocas de crisis, dificulta la predisposición de los países para apostar por un objetivo común.

Por otra parte, el fracaso del debate parlamentario inglés para la retirada del R. Unido de la UE (Brexit), incide de forma preocupante sobre el daño que puede producir en el futuro más inmediato. De tal forma que, lo que antes parecía improbable, un Brexit duro coge cada vez más cuerpo a medida que la cuenta atrás se aproxima a su fin. Al mismo tiempo, la cuarta economía de la UE, con una deuda insalvable, va a tener dificultades para un hipotético rescate. Mientras tanto, su gobierno ha apostado por el populismo nacionalista que confronta directamente con los objetivos de la UE.

Una UE en la que se mantiene la idea de que sus instituciones y organismos sufren una falta de responsabilidad democrática y de legitimidad frente a los ciudadanos europeos, porque éstos no tienen posibilidades de ejercer influencia en las actividades y decisiones de las instituciones comunitarias. Que quiso cubrir ese déficit con la creación del Parlamento Europeo, formado por miembros elegidos por los ciudadanos, y que ostenta el poder de aprobar o rechazar la legislación de la UE, pero supeditado a decisiones del Consejo de Ministros.

Tampoco se nos escapa la paradoja de que en países financieramente tan beneficiados por la UE haya incubado una *eurofobia* tan virulenta. Algunos plantean una vinculación entre pleno respeto de los valores comunitario y desembolsos. Pero esto desencadena un dilema moral: *¿deben pagar todos los ciudadanos por la actitud autoritaria de sus gobernantes? ¿Y no acabaría esto además por fomentar más aún sentimientos antieuropeos?*

Afrontamos una Comunidad que acomete procesos de difusión con demasiada lentitud y con cada vez más dificultades, no solo a la hora de mostrar posiciones

comunes, sino que muestra divisiones demasiado profundas, sobre todo, desde la última adhesión. La ciudadanía europea, el sindicalismo del continente, comparte las incertidumbres generadas por la evolución de la Europa Comunitaria durante la última década. En este marco, el sindicato, CCOO de Industria, no puede ser ajeno a esta realidad, sobre todo, en lo relacionada con la evolución de la industria europea y la española.

Lo que se trata es de no olvidar los compromisos básicos del proyecto europeo -al menos hasta finales de los noventa- enmarcados en una clara política de pactos sociales. Para ello, es preciso acometer la puesta en marcha de directivas ligadas a la negociación colectiva, al seguro de desempleo europeo, a las condiciones de trabajo, a la estrategia de igualdad de género, en definitiva, de cohesión social y territorial en Europa. Sobre todo, cuando los países están utilizando los beneficios sociales como arma para aplacar el descontento social en algunos casos (chalecos amarillos en Francia); para evitar la debilidad del gobierno en otros (España); para ganar las elecciones, en el caso del Movimiento 5 Estrellas italiano, con la promesa de un subsidio universal de ciudadanía; al igual que los ultraconservadores polacos, que ganaron con un generoso subsidio de familia; mientras que en Hungría se afronta la conocida ley de esclavitud, ...

La UE se apoya en la competencia generalizada entre territorios, sobre el dumping fiscal y social a favor de los actores económicos más móviles, y funciona objetivamente en detrimento de los más desfavorecidos. Mientras no tome fuertes medidas simbólicas para la reducción de las desigualdades, por ejemplo, un impuesto común que grave a los más ricos y permita bajar el de los más pobres, esa situación perdurará. Al mismo tiempo, se requiere un presupuesto europeo cuatro veces más importante que el actual, capaz de enfrentarse sin demoras a las carencias y de producir un conjunto de bienes públicos en el marco de una economía duradera y solidaria.

Un presupuesto financiado por cuatro grandes impuestos: *sobre los beneficios de las grandes empresas, de los ingresos más altos, de los altos patrimonios y de las emisiones de carbono*. Para financiar bienes comunes europeos, como un ambicioso programa de inversiones para transformar nuestro modelo de crecimiento, la investigación, la formación y las universidades europeas; financiar la acogida de migrantes o un seguro de desempleo europeo; podría, asimismo, otorgar un margen de maniobra presupuestario a los Estados miembros para reducir las cargas que afectan a los bajos salarios y al consumo, y que lastran a las clases populares europeas.

El pilar de los derechos sociales y la industrial europea

La economía tira, y la Gran Recesión es, en cifras globales, solo historia. La UE lleva 25 trimestres (seis años) de crecimiento económico ininterrumpido. Las finanzas públicas se han enderezado, de modo que el déficit presupuestario de los 28 se ha reducido desde la crisis a la décima parte: *del 6,6% del PIB en 2009 al 0,6% en 2018*. Y se ha dejado atrás la penosa política de austeridad excesiva.

El desempleo se ha reducido a la mitad y, desde 2014, se han creado 15 millones de puestos de trabajo. Pero aún hay cerca de 16 millones de parados. Por eso hay que completar y ampliar el giro social iniciado con timidez en la legislatura acabada, con la Garantía Juvenil de Empleo para los menores de 25 años y la proclamación del Pilar Europeo de Derechos Sociales, aún no vinculante.

Así ocurre con los jóvenes, que siguen duplicando la tasa media del paro, con el 14,6%, y con algunos territorios que, como España, la reduplica, con el 32,4%. O con los parados de larga duración. Al malestar social contribuye la mayor lentitud de los salarios en recuperarse que los beneficios o la economía en general. Entre 2010 y 2017 han crecido un 1,7%, cuando en el septenio previo a la crisis (2000 a 2007) lo hicieron al 2,5%. Y si en 2010 suponían el 57% de la tarta del PIB, ahora estamos en el 55% y bajando.

Los salarios tienen también más zonas oscuras: *el precariado, el exceso de trabajo temporal o a tiempo parcial indeseado*. Como de esos rincones sale la sombra, hay que iluminarlos. Para ello, del programa social de la Comisión habría que acelerar, en especial, tres proyectos: *salario mínimo (solo rige, todavía, en 22 de los 28 Estados miembros); políticas activas de empleo (sobre todo, reforzar la garantía juvenil y condicionar las ayudas a los éxitos cosechados); seguro de desempleo europeo (ligado al presupuesto de la eurozona)*.

Además, Europa, la UE, ha perdido el norte sobre la potencialidad de la industria para la economía del continente, lo que está colocando a la que fue primera potencia industrial en algo complementario de los actuales líderes (EEUU, China, Japón, Corea, ...). Situación que es imprescindible que se corrija, lo que solo sería posible con una Comisión que fuera consciente de la nueva realidad industrial global y europea. Incluso se manifiesta la evidencia, constatada en los cambios surgidos en las últimas décadas en algunas regiones europeas, de que la pérdida de tejido industrial lleva al predominio del apoyo de la ciudadanía a la derecha liberal y, en algunos casos, a la ultraderecha en el continente.

Ante las incursiones chinas en el continente y la negativa de la Comisión Europea a la fusión Siemens-Alstom, Alemania primero y Francia después volvieron a presionar -porque viene de lejos- por la generación de los llamados "*supercampeones*", con el objetivo de poder liderar la competencia mundial en mejores condiciones. Otros 17 países se han añadido al eje francoalemán para que revise las políticas de competencia y, sobre todo, trace una nueva hoja de ruta para la reindustrialización del continente. Ante esta propuesta, es necesaria una cuidadosa reflexión para evitar efectos indeseados de la intervención política en casos específicos. Y, sobre todo, porque incide directamente en el proyecto europeo, dañando su línea de flotación. La UE es consciente de que la dependencia del capital chino en algunos países, sobre todo en los del sur de Europa, introducirá una peligrosa cuña en la unidad de club.

Compartimos la adopción del Consejo Europeo, el pasado mes de noviembre, de unas conclusiones sobre "*Una futura estrategia de política industrial de la Unión Europea*", en las que urgía a la Comisión a elaborar un plan de acción a largo plazo para ese ámbito. Solo un mes después, llegaba la declaración de ese

grupo de 19 países ante “*La necesidad de una reindustrialización de Europa*”. Además de alentar la creación de empresas líderes, los países ponían énfasis en la movilización de todas las políticas y departamentos del ejecutivo comunitario para reducir las barreras regulatorias. “*El problema no es de competencia, sino de fragmentación de mercados. Aún debe armonizarse legislación y han de romperse monopolios nacionales para dar a las empresas la escala que necesitan. Los mercados de EEUU y China están completamente integrados, mientras que el europeo está fragmentado*”⁴⁰.

Para CCOO de Industria, desde la UE se debieran abordar mecanismos vinculantes que obligase a los miembros a cerrar la puerta a determinadas inversiones que fueran en contra de los intereses estratégicos europeos, en lugar de dejar que cada Estado tenga la última palabra. Pekín va a seguir dando salida a sus productos y asegurándose recursos desde Yibuti a Panamá. Lleva tejiendo alianzas desde los años ochenta, aunque Xi Jinping haya querido venderlo como el relanzamiento de la Ruta de la Seda.

Europa debe mantener el régimen de inversiones más abierto en el mundo, pero defendiendo sus intereses estratégicos y, para eso, necesita un control sobre las compras de compañías extranjeras que apuntan a los activos estratégicos del continente. Servirá de poco debatir sobre el futuro del empleo en Europa, el declive de la industria o la falta de innovación si no vigilamos la entrada de inversiones que no responden solamente a criterios económicos, sino políticos. Esto no tiene nada que ver con el proteccionismo: *Europa necesita inversión, incluida la china*. Pero cuando una industria entera dependa de una empresa y detrás de ella haya un Estado extranjero, hay que encender una luz para alumbrar la escena⁴¹.

La principal causa sigue siendo la ausencia de un mercado único real en el sector servicios, que impide que las empresas puedan alcanzar el tamaño crítico necesario para competir con China y EEUU. Los mercados siguen dominados por los sectores energético y financiero, frente a las empresas jóvenes vinculadas a las nuevas tecnologías de EEUU y Asia. El Consejo Europeo debiera dedicar una sesión monográfica sobre la industria que agrupe todas las mesas sectoriales sobre competitividad, telecomunicaciones, comercio o energía. Para “*revertir*” el proceso de desindustrialización en el que han entrado varios países tras la Gran Recesión.

Europa es consciente de lo que hay en juego: *el 25% del valor añadido bruto (VAB) de la Unión, dos tercios de sus exportaciones y 37 millones de puestos de trabajo, de los cuales 1,7 millones se han creado en el último lustro*. La política que ha trazado la Comisión Europea se apoya en cinco pilares: *el mercado único, la financiación, la transición hacia una producción verde, el capital humano y la política de competencia*. “*No hay una medida, sino una combinación de ellas para poder crear este ecosistema industrial*”, según la Comisión.

⁴⁰ Miguel Otero, investigador Real Instituto Elcano. Y Xavier Vives, profesor de Economía y Finanzas del IESE y asesor de políticas de competencia durante una década en Bruselas.

⁴¹ Ana Fuentes. Artículo de Opinión del País, del 16 de febrero de 2019.

Varios países europeos han ido perdiendo peso industrial y calidad de empleo, por no reaccionar a tiempo contra factores que han intensificado su impacto tales como la innovación, el desplazamiento geográfico de las industrias y la globalización. Los efectos laborales que incorpora son, sin duda, uno de los más relevantes en este contexto; pues es cierto que muchas tecnologías de automatización propenden a disminuir la mano de obra, pero otras, por ejemplo, en el campo de la infraestructura industrial (calidad, seguridad), el mantenimiento y la digitalización pueden comportar alta demanda de empleo.

Al mismo tiempo, está viviendo un momento clave para la industria, con grandes desafíos: *la expansión internacional, la innovación, la digitalización, la transición energética y la economía circular*. En un momento en el que su contribución al PIB europeo ha caído en 20 años del 23% al 19%, dejando de liderar la economía mundial en esta vertiente en los últimos 15 años.

No hay soluciones únicas: *cada sector debe hacer frente a sus problemáticas específicas*. En muchos casos, la tecnología es una de las mejores aliadas de las fábricas en su cruzada a favor de la sostenibilidad, especialmente la que se conoce como industria 4.0, que está íntimamente ligada a la inteligencia artificial y a la industria conectada.

Las elecciones europeas, el Brexit y el incremento de disputas comerciales son los principales desafíos y oportunidades que nos recuerdan la necesidad de garantizar una base industrial europea sólida, competitiva y sostenible como una cuestión de soberanía para Europa a través de objetivos que ya fueron marcados por las patronales europeas y que compartimos en grandes líneas⁴²:

1. Aumentar el presupuesto de la UE para investigación e innovación. La UE sigue estando por detrás de sus principales competidores (Corea, China, Japón, EEUU) en materia de inversiones en esta materia.
2. Identificar y priorizar las cadenas de valor industriales “*estratégicas*” a nivel europeo. Por la importancia derivada de la interrelación de compañías de diferentes tamaños para la economía europea.
3. Tener en cuenta las políticas comerciales y de competitividad de la UE. La creciente competencia internacional y las tendencias proteccionistas tienen un impacto negativo en la industria europea.
4. Acelerar la transición digital de las pymes. La UE necesita promover las capacidades digitales de las compañías (especialmente las empresas de capitalización media y startup innovadoras).
5. Orientar la política de cohesión de la UE hacia los objetivos de política industrial. Las actividades industriales deben implicarse plenamente en los territorios donde tengan ubicadas sus operaciones.

La Europa política, la económica, la social y de la ciudadanía, necesita de una industria fuerte para hacer realidad los objetivos del mantenimiento y

⁴² Comunicado de la Representación unificada de la Industria francesa (France Industrie), la Asociación Federal de Industrias Alemanas (Bundesverband der Deutschen Industrie e Industriellen Vereinigung) y la Cámara de Comercio de España, dirigido a la reunión del Consejo de Ministros de la UE del 18 de diciembre de 2018.

reforzamiento del Estado de Bienestar en el continente. Europa tiene que reforzar sus respuestas a estas decisiones globales y empresariales. Europa debe tomar nota de cómo algunos países y algunas grandes potencias, a través del establecimiento de aranceles o de otros instrumentos, están poniendo trabas al comercio internacional, mientras que en el continente se practican las reglas de libre mercado.

El "Gobierno" de la UE admite que la "*dimensión social*" ha quedado "*subordinada*" a otras áreas económicas, tras años de sobredosis de austeridad. Basándose en un estudio de la OCDE, que acompaña los dos documentos de trabajo, la presidencia de la UE detecta cuatro áreas clave que apoyan esa "*economía del bienestar*" que reivindica Europa: *la educación, la sanidad, la igualdad de género y la lucha contra la desigualdad dentro de los Estados miembros*. Es preciso que los ministros hallen la respuesta a la pregunta: *¿Cómo fortalecer el vínculo entre la política económica y las políticas de bienestar en el proceso de toma de decisiones de la UE?*

Por todo ello, la Confederación Europea de Sindicatos ha pedido a la nueva presidenta de la Comisión Europea que construya una alianza democrática en el Parlamento e involucre a los interlocutores sociales en la redacción del programa de trabajo. Además, todavía hay cierta ambigüedad en temas críticos como la gobernanza económica, el Estado de derecho y el Brexit.

Debe evitarse la incoherencia de que algunas compañías eviten los estándares utilizados mediante la deslocalización para después acabar vendiendo sus productos en el continente sin cumplir estas exigencias. Europa debe, de alguna manera, fortalecerse y ampliar las exigencias y plazos para que aquellas multinacionales que han recibido fondos públicos para su establecimiento tomen estas decisiones. No puede tolerarse que habiendo recibido apoyos públicos se les den facilidades, también, en el tiempo para que deslocalicen.

Para el sindicato, es urgente ampliar el plazo durante el que una empresa que ha recibido ayudas europeas debe garantizar el mantenimiento de las condiciones de empleo, actualmente fijado en cinco años desde la última recepción de ayudas públicas. La UE debería exigir a estas compañías "*certificados*" que pongan de manifiesto que para la elaboración y fabricación de esos productos fuera de la UE han cumplido con las mismas condiciones sociales, laborales y ambientales que se exigen en Europa. Al mismo tiempo, es preciso requerir de las grandes multinacionales, que se quieran instalar en el continente, que adquieran una parte de la compra de suministros (30-50%) a la industria de la UE.

La misma incertidumbre que se genera en España

En el ámbito político, el principal problema que ha venido acuciando a este país se deriva en que, en tres años y medio, se han celebrado tres elecciones legislativas y, todas ellas, han estado acompañadas de una fuerte inestabilidad política y, por tanto, para gobernar. La irrupción de Vox y el correlativo desplome de la derecha tradicional y de la nueva izquierda, indican las dificultades

existentes para lograr el equilibrio entre la agenda social y la nacional. Mientras tanto, los problemas reales se acrecientan: *salarios, dependencia, desigualdad, empleos para los y las jóvenes, formación, industria, energía, infraestructuras físicas y tecnológicas,*

La tramitación de los Presupuestos en el Congreso para 2019, que los expertos tachaban de “*ingresos inflados*”, y su rechazo conjuraba el riesgo de una situación ingobernable, con citas electorales y judiciales: *la convocatoria de elecciones municipales, autonómicas y europeas en mayo, y la celebración del juicio a los líderes políticos que participaron en la declaración unilateral de independencia de Cataluña, tras derogar la Constitución y el Estatut para imponerla por vías de hecho*. Alcanzó tales cotas que obliga al Gobierno a la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones legislativas, que tuvieron lugar el 28 de abril pasado.

Elecciones que se afrontaron con muchas incertidumbres, lo que facilitó un incremento muy sensible de la participación ciudadana. El Partido Popular (PP), tomando como referencia la alianza con la ultraderecha en Andalucía, se lanzó a competir con Vox en la recuperación de la España de la dictadura, mientras que la nueva formación de derechas, Ciudadanos, solo tiene como referencia el “*sorpasso*” al PP y fijar su política de alianzas similares a las del sur de España. Por otra parte, la nueva izquierda entra en un proceso de ruptura interno que presagiaban consecuencias directas en sus apoyos electorales.

La presión de los tres partidos de la derecha española no ha conseguido desbancar a la izquierda. Por el contrario, el PP ha padecido un revés de tales proporciones que amenazó la continuidad de su líder; en tanto que la nueva derecha, encarnada en Ciudadanos, ha fracasado en el intento de encabezar la opción conservadora en España, pese a haber aumentado sustancialmente su presencia en el Congreso. No cabe descartar la influencia ejercida por el discurso apocalíptico que ambas fuerzas han mantenido desde la moción de censura contra Mariano Rajoy, así como el pacto con el que gobiernan en Andalucía, en la irrupción de Vox y en la normalización de su programa de extrema derecha.

Las urnas también derrotaron los discursos extremistas sobre la cuestión territorial. Los defensores de las tesis independentistas unilaterales registraron una severa derrota en favor de la vía pactada. En el otro extremo, los partidarios de una recentralización amparada en una aplicación inconstitucional del artículo 155 tampoco obtuvieron los resultados deseados. Vox, PP y Ciudadanos no lograron un solo escaño en el País Vasco y en Cataluña solo obtuvieron 7 de los 48 diputados en juego. Y entre los tres no alcanzaron el apoyo requerido para articular una fórmula para el Gobierno central similar a la de Andalucía. La salvación del PP y la consolidación del triunvirato derechista se ha manifestado con la gobernabilidad de Madrid, tras las elecciones autonómicas y locales.

El Parlamento que sale de estas elecciones refleja una importante recuperación de la izquierda, gracias a los apoyos recibidos por parte del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y al avance de las formaciones políticas nacionalista (vascas y catalanas). Aunque quedó claro que en Cataluña el independentismo no cuenta con la supuesta “*mayoría social*” que suelen atribuirse sus líderes.

Pese a la victoria, por primera vez, en unas generales de un partido secesionista -ERC-, solo el 39% de los catalanes optaron por opciones independentistas. Estos resultados no pueden interpretarse, sin embargo, como una invitación al olvido del problema territorial ni de la necesidad de adoptar iniciativas políticas dentro de la Constitución y de un imprescindible consenso entre las fuerzas parlamentarias. UnidasPodemos frenó la caída que vaticinaban las encuestas, pasando de reclamar un proceso constituyente a exigir el riguroso cumplimiento de la Constitución de 1978.

Aunque la situación generada por las elecciones legislativas del 28 de abril sigue reflejando un espectro electoral muy disperso, al mismo tiempo, permite diferentes alternativas de investidura, lo que no imposibilita una nueva convocatoria, como en 2016, reincidiendo la izquierda en una actitud alejada de la voluntad de sus bases, así como la de resignarse a un precario Gobierno en minoría. El actual panorama parlamentario debe permitir la configuración de un Gobierno fuerte y duradero, porque las elecciones han mejorado las condiciones. Estamos mejor que ayer. No se trata de encontrar solo un acuerdo de investidura a corto plazo sino de un pacto de legislatura para cuatro años.

Mientras tanto, en este nuevo marco, el gobierno en funciones recurrió a mecanismos constantes de Reales Decretos legislativos extraordinarios que, por una parte, facilita la puesta en marcha compromisos sociales que no tuvieron luz durante la corta legislatura (ocho meses), pero que, por otra, impiden abordar reformas de calado y que retroalimentan la crispación. Porque España se encuentra con una industria que sigue encadenada a un modelo productivo basado en los servicios de bajo valor añadido (hostelería, comercio, servicios auxiliares) con un peso muy bajo de la industria y los servicios de alto valor añadido, lo que nos condena a un empleo precario y de bajos salarios, con muchas fluctuaciones estacionales e insuficientes para dar una oportunidad de empleo a su población.

En consecuencia, no se observa un cambio en el modelo liderado por la industria y los sectores de contenido tecnológico alto, lo que pone en duda la solidez a medio plazo de la mejora de la afiliación a la Seguridad Social y la rebaja del paro, como se ha evidenciado en las etapas de recesión.

Con una deuda pública del 97% del PIB. Sin una política energética o de innovación y desarrollo tecnológico y digital definida, todos ellos (reformas, deuda, políticas de largo plazo) temas de los que apenas se habla en las campañas electorales, difícilmente podrán hacerse efectivas. Pocos partidos hablan de una verdadera reforma de las pensiones, cuando todos han votado a favor de una revalorización conforme al IPC en entornos preelectorales. Carentes de intención pedagógica, tampoco se refiere la importancia de las políticas medioambientales, energéticas, de innovación o digitalización, los nuevos empleos (con mayor formación del capital humano y más tecnológicos) y sus réditos económicos. Son aspectos que han estado en los programas electorales como un guion constante pero escasa o nulumamente comentado y vendido al ciudadano. Porque requieren inversiones y sacrificios de corto plazo, pero suponen un cambio total en los hábitos y modos de vida.

España necesita desarrollar una “*cultura industrial*” que explique, defienda y promueva, con las precisiones pertinentes, las realidades industriales en nuestro país. Ante una situación de orfandad que padece desde hace décadas y proveniente de las preocupaciones prioritarias de la agenda política, la industria está acostumbrada a moverse por sí sola para resolver problemas misceláneos, desde la financiación hasta la seguridad laboral. Y ello, a pesar de tener un peso difícilmente igualable en el bienestar del país, que depende críticamente de algunos efectos industriales que son indispensables en nuestra civilización como es, por ejemplo, la electricidad (que genera el bien industrial más efímero del mercado, el kilovatio-hora, porque entre su generación y su consumo no pasa más allá de un milisegundo).

Tampoco se puede olvidar que, al hablar de política industrial, la mayoría de los ciudadanos considera sólo la fábrica en sí, a pesar de que lo consumido o disfrutado no son los procesos industriales, sino sus productos; cómo los automóviles y los kilovatios-hora. Pero pretender disfrutar de éstos sin que haya fábricas es una contradicción. Al mismo tiempo, nos enfrentamos a una transición energética sin precedentes, deseando abandonar los procesos de combustión y electrificar muchas actividades para las que no tiene aún tecnologías tan maduras y comprobadas como aquella. Y ello va a exigir un reacondicionamiento de la actividad fabril, mediante unas tecnologías que son conocidas a nivel piloto, pero no están industrializadas.

Políticas de reindustrialización ...

Entre 1960 y 1980 se produjo un aumento de la importancia relativa del sector manufacturero en la economía española, hasta llegar a representar alrededor del 18% del VAB real y cerca del 22% del empleo. Sin embargo, durante las siguientes cuatro décadas, la tendencia cambió y comenzó un proceso paulatino de desindustrialización que se ha acelerado desde el año 2000. Como resultado, la proporción del VAB a precios constantes y del empleo que representa este sector se ha reducido al 14% y al 10%, respectivamente, en 2016.

Es preciso recordar que la industria genera un tejido social y económico, no solo ofrece mejores salarios sino desarrollo profesional. Es la que fija población y hace a la economía menos vulnerable, incluyendo un pobre ecosistema innovador, con bajo nivel de sofisticación de los negocios y obstáculos a la transferencia tecnológica. El sector público, las administraciones, deben dejar de atender múltiples demandas individuales e inconexas y pasar a definir objetivos claros dirigidos a una industria integral en nuestro país.

Para 2019, CCOO de Industria se propuso apostar por el desarrollo del Pacto de Estado por la Industria en nuestro país, que el Gobierno del PP dejó estancado y que el del PSOE no termina de impulsar. Objetivo que, dado el largo proceso de tramitación del nuevo gobierno, acompañado de una fuerte incertidumbre a la hora de conseguir los apoyos suficientes, se desvanece para este año.

El sindicato sabe que se requiere de mucha voluntad política, que hay que reforzar el diálogo social y que la Administración debe comprometerse a

coordinar las políticas que se definan. Antes de tomar una decisión que perjudique de forma irreversible estas expectativas, reclama que se faciliten los instrumentos para que no impacte de forma negativa en la industria, la economía y el empleo. A las comunidades autónomas les toca apostar de forma decidida por la industria y cambiar radicalmente el modelo educativo y formativo.

CCOO de Industria cree que se viven momentos clave para la industria, que plantean grandes desafíos. Echa de menos medidas e instrumentos de actuación ministerial y gubernamental que afronten un futuro industrial digitalizado, por los efectos que se esperan en el empleo, en las relaciones laborales y en la organización de las empresas. Son temas que, pese a su importancia, no se incorporaron a las mesas de diálogo social.

Con el arranque del nuevo año, el sindicato recordó al Gobierno que debe crear las condiciones estructurales para que ese cambio se desarrolle mediante inversiones en I+D+i, en formación, internacionalización y financiación, desde la iniciativa privada, principalmente. CCOO sabe que se debe pasar de un modelo basado en sectores intensivos en mano de obra, a otro que incorpore un cambio tecnológico. Además, hay que incidir en el tamaño de las empresas, dar respuesta a la especialización productiva, aumentar el peso de actividades de alta tecnología y reducir la brecha tecnológica entre regiones y sectores.

Como menciona el científico Pere Puigdomènech⁴³, desde la incorporación de España a las Comunidades Europeas (1986) *“la participación de investigadores españoles en los proyectos europeos ha representado un factor esencial en la modernización de la ciencia en nuestro país. Ello se ha hecho sin que el Estado español haya tenido, como en tantos otros campos, una gran influencia en las decisiones europeas”*. Sugiere que nuestro país se hiciera notar en la discusión del Presupuesto que incluye importantes partidas para la investigación científica.

Hace falta aumentar la inversión pública y reorientarla hacia la mejora de la calidad y el contenido tecnológico de la producción. Los servicios de alto valor añadido; los servicios a las personas; la reorientación del sector de la construcción hacia la rehabilitación y la eficiencia energética; y un sector industrial diversificado con presencia creciente de los sectores de futuro, deben ser la base del nuevo modelo.

Por otra parte, informes como el que ha hecho público la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), sobre el sistema de subvenciones que se aplica en España, concluye que no puede determinar si las subvenciones que concede la Administración sirven realmente de algo. Una vez analizado el Programa de Reindustrialización y Competitividad Industrial (RCI), durante el período 2008-2016, con 4.900 millones de euros en préstamos que no parecen mejorar la competitividad empresarial perseguida. Tienen un impacto en inversiones y empleo modesto, con un coste financiero y de morosidad alto.

El programa no se concentra en las necesidades reales del sector ni con objetivos cuantificables ya que no está claro su objetivo prioritario, dificultando

⁴³ *“Ida y vuelta a Europa”*. Tribuna El País del 26 de junio de 2019.

su evaluación y resultados. Se gestiona con poca eficiencia, derivada de la Ley General de Subvenciones. El Ministerio de Industria, que cuestiona el informe, dice que la última convocatoria mejora los sistemas de evaluación.

CCOO de Industria lleva años cuestionando estos programas desde su creación, hace 20 años, derivado de su escasa utilidad por no tener objetivos de orientación industrial claros. Por todo ello, España requiere de acciones preventivas dirigidas hacia el fortalecimiento de la capacidad de adaptación del tejido industrial ante los desafíos comerciales, digitales y medioambientales o un plan específico para sectores en gran dificultad como el del automóvil o la siderurgia. Lo que debe ir precedido de la voluntad europea a la hora de ser un acto proactivo de la política económica más que un guardián del cumplimiento de normas contables.

... y para la transición energética

La descarbonización del sistema eléctrico mediante el aprovechamiento masivo de las renovables es un reto técnico, pero sobre todo una gran oportunidad económica para un país con tanto sol y viento, y tan dependiente de combustibles fósiles importados. El Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), presentado por el Gobierno en Bruselas, prevé la instalación de más 50.000 MW de nueva capacidad renovable en la próxima década, lo que va a provocar una profunda transformación del mix eléctrico para que en 2030 tres cuartas partes de nuestra electricidad tenga ese origen. Según la opinión de los expertos el mercado de energía eléctrica actual, organizado o bilateral, no será capaz de movilizar la inversión en las renovables que se necesita hasta ese año.

La generación renovable, que se caracteriza por su muy bajo coste variable y elevada simultaneidad, cuando alcanza altos porcentajes de penetración canibaliza su propio mercado, deprimiendo su precio. Las subastas competitivas aparecen como una solución más adecuada: revelarían el coste más bajo en cada momento de la nueva generación renovable, facilitarían la financiación de las inversiones al reducir la incertidumbre sobre los flujos de ingresos y harían que el consumidor se beneficiara de menores costes y menor volatilidad en su factura.

Es importante aprovechar el continuo abaratamiento de las renovables, convertir la inversión en palanca de reindustrialización, y acompañar su desarrollo al del almacenamiento, las interconexiones y otras herramientas que doten de firmeza y flexibilidad al sistema eléctrico. Criterios de política energética aconsejan modular el principio de neutralidad tecnológica. El debate sobre si las subastas deben ser por tecnologías debe tener muy en cuenta la evolución de sus costes y sus prestaciones, para asegurar la senda más eficiente hacia la descarbonización. También se discute si lo que debe fijar la subasta es una retribución a la inversión, como complemento a la que obtenga la generación renovable en el mercado, o una retribución a la energía producida⁴⁴.

⁴⁴ Luís Atienza Serna. Ex ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En este importante e influyente debate, CCOO de Industria sabe que cualquier transición que se emprenda requiere de dos premisas: *evitar la pérdida de tejido económico y preservar el empleo*. En el caso de la transición energética, su objetivo es reducir el alto coste energético que provoca la alta dependencia. Para conseguirlo, es imprescindible evitar un coste sin generar otro. En opinión de CCOO de Industria, es preciso apostar por el mix energético, reformar y regular de forma más efectiva el desarrollo del sistema eléctrico (generación, ordenación territorial, eficiencia, fiscalidad, ...) y establecer medidas medioambientales que eviten el cambio climático y que favorezcan la competitividad de las empresas españolas.

Si atendemos a la situación de la industria básica electrointensiva, hasta que se imponga una realidad en la que los costes de electricidad sean más bajos que los competidores de nuestro entorno, es imprescindible desarrollar instrumentos transitorios de apoyo, homologables a nivel europeo, como puente para asegurar su competitividad, porque es casi imposible recuperar el tejido industrial perdido. Es preciso que el tejido empresarial (empresas energéticas, de automóviles o los grandes consumidores de energía), los sindicatos y la administración se impliquen en un proceso: *que derive en un Transición Industrial para la Transición Energética que además de buscar los objetivos de descarbonización, fortalezca el tejido industrial y tecnológico*.

Ha tenido que producirse el conflicto de ALCOA para que el gobierno decida iniciar el trámite de legislar medidas dirigidas a sectores electrointensivos de este país. El Ejecutivo está en funciones y el comprometido *Estatuto del Consumidor Electrointensivo* -la herramienta para equiparar a las grandes empresas a sus competidoras en Francia o Alemania- está en el horno, rechazado y denigrado por el Ministerio de Transición Ecológica y que, en otros países de la UE, es ya una realidad desde hace tiempo. Para determinadas empresas y centenares de trabajadores y trabajadoras, este anuncio llega tarde y más cuando el pasado mes de septiembre podría haberse iniciado el proceso. Mientras tanto, se desploman las rebajas en la factura eléctrica para el sector, que se canalizaban a través de subastas en bloques de interrumpibilidad y que son pagos por desconectarse de la red en caso necesario⁴⁵.

De las 20 actividades con mayor demanda de electricidad, que absorben casi el 85% del total, solo seis mostraron avances interanuales. La metalurgia, con caída mensual del 17,6% y del 8% en el año, explica por sí sola más de la mitad del descenso observado en el indicador general que elabora Red Eléctrica Española (REE). La amenaza de contracción en el sector es evidente y el Gobierno, ahora en funciones, teme nuevos anuncios de reducciones en la producción y expedientes de regulación de empleo (ERE). Solo la industria textil, la alimentaria o los productos electrónicos quedan fuera de la zona de sombra.

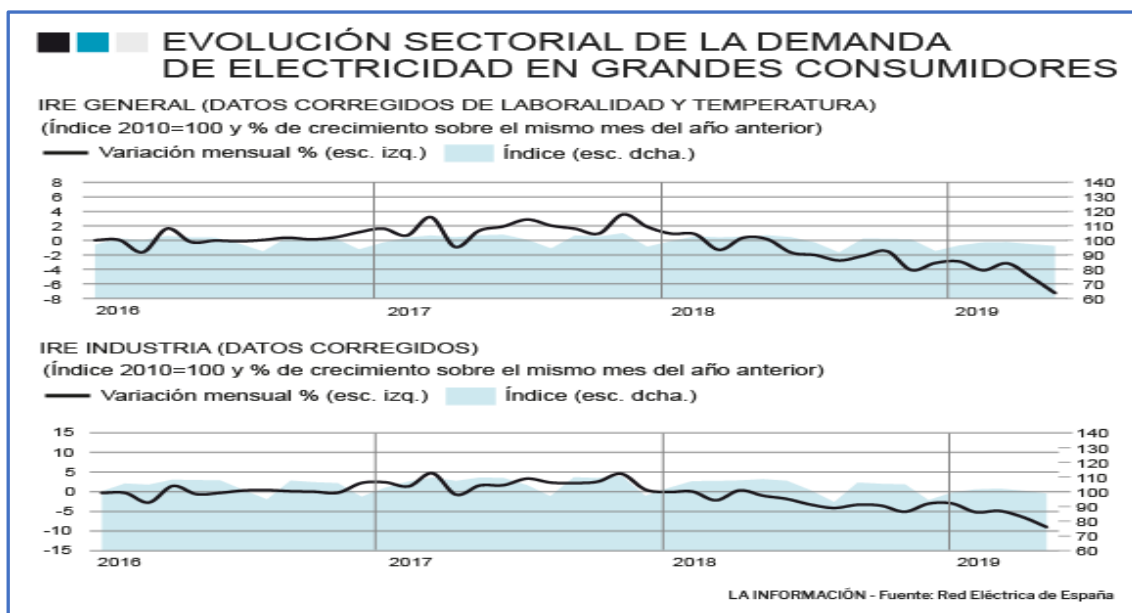
Los industriales del sector quieren reducir los peajes que pagan por transporte y distribución, los costes de financiación del desarrollo de las energías renovables -incluidos también en los peajes-, los impuestos (eléctrico y municipal), la

⁴⁵ Entre las dos adjudicaciones del año, las empresas recibirán 196 millones. Es la cifra más baja en los seis años que se lleva haciendo este mecanismo de ayudas a los grandes consumidores. Y está muy alejada de los 500 millones que recibían hace apenas un par de años.

interrumpibilidad y la compensación de costes indirectos del CO₂. El reciente anuncio que certificó la subasta de como “la última” exige medidas y una política industrial definida que compense la desaparición de estas ayudas.

La realidad es que afrontamos sectores económicos que a nivel de empleo no han conseguido levantar cabeza una década después de la caída en recesión de la economía española. Y muchos de estos sectores tienen una cosa en común: *sus actividades pertenecen al campo de la industria*. Es preciso que se establezcan compromisos dirigidos hacia el establecimiento de contratos de suministro eléctrico a largo plazo (PPA), lo que marca la diferencia de precios eléctricos finales, en relación a Alemania y Francia⁴⁶, constituyendo uno de los principales hándicaps con los que se encuentra la industria española. Si no hay en el horizonte un precio competitivo de la energía, “*difícilmente se conseguirán inversiones a medio plazo por parte de las multinacionales. Ahí nos jugamos el futuro de una parte muy importante del sector industrial. Es necesario aplicar una política preventiva que resuelva los problemas antes de que se produzcan: no se trata de que luego todo el mundo se rasgue las vestiduras ante un anuncio de cierre*”⁴⁷.

Por otra parte, una transición energética creíble hacia el 100% de suministro mediante las renovables exige contar durante un cierto periodo con *energías firmes de respaldo* para cubrir los vacíos de producción de la eólica o la solar. De ahí que la pretensión inicial del Gobierno de cerrar de forma drástica las siete nucleares que operan en España se considera una opción doctrinal y poco realista. Aunque ha costado mucho el cambio de actitud, la propuesta que en estos momentos maneja podría ajustarse más a la necesidad de suministro creciente de electricidad.



No solo se necesitan soluciones tecnológicas para la generación eólica y solar, la digitalización, la eficiencia energética o las baterías -que nos son suficientes

⁴⁶ En los años 2017 y 2018 fueron de 20 o 25 euros, según la asociación patronal AEGE.

⁴⁷ Agustín Martín, secretario general de CCOO de Industria.

para acometer la descarbonización del transporte terrestre, marítimo o aéreo, el almacenamiento de generación renovable o la captura o confinamiento de CO₂, sin la conformación de una clara estrategia industrial que asegure que las empresas puedan asumir el período de transición de forma competitiva y sin traumas territoriales, sociales, económicos e industriales. El ejemplo se aprecia en la industria de automoción, donde se debe trabajar por una renovación del parque convencional, además del claro posicionamiento de la industria en la electrificación o que los propietarios de los vehículos esperen a que se abaraten los coches eléctricos.

Apuestas sindicales de actuación

El nuevo Gobierno tendrá que concretar una agenda de cambio social y laboral, insinuada durante los meses que van desde la moción de censura hasta las elecciones de finales de abril y cuyo principal objetivo es corregir los efectos más dañinos de las políticas de ajuste aplicadas en plena crisis económica sobre la médula del Estado de bienestar, es decir, sobre la protección social, las pensiones, la educación y la sanidad. Y sobre la negociación colectiva.

El Gobierno y el Parlamento habrán de reactivar el Pacto de Toledo para decidir qué medidas deben aplicarse con rapidez en el sistema de pensiones, en particular qué parte de los costes de las prestaciones tiene que ser asumida por los Presupuestos del Estado, y en qué plazo. El segundo gran pilar de la agenda social es la rectificación de la reforma laboral de 2012. Es posible desarrollarlas con la ventaja de un Gobierno más apoyado en el Parlamento y sin ambigüedad alguna sobre su magnitud. El primer impulso del nuevo Ejecutivo debería aprovecharse para iniciar con urgencia la reversión de las distintas reformas laborales impuesta durante la crisis.

Es crucial para la estabilidad económica que el sistema de protección eleve las prestaciones, aumente la cobertura y sea capaz de buscar empleo a los parados. El modelo actual, caótico y fragmentado, dilapida miles de millones de euros cada año. En materia de empleo hay que corregir la arbitrariedad empresarial, facilitada por la reforma, que han permitido lesivas actuaciones de las empresas en materia de expedientes de regulación de empleo y sus efectos muy negativos sobre las condiciones de trabajo.

Aunque sea el Gobierno quien impulse la agenda social, tiene que contar con los partidos políticos, los sindicatos y las patronales. Sin mesas de negociación y acuerdos con la oposición, cualquier reforma durará con mucho lo que una legislatura. El propósito de una negociación es conseguir un acuerdo político con los agentes económicos para fijar unos parámetros mínimos del Estado de bienestar, incluyendo el reconocimiento del papel de los salarios en el crecimiento. No se trata de mirar hacia atrás, sino hacia delante. Y detrás de todo ello, está la madre de todas las reformas: *la fiscal*.

Por otra parte, la OCDE señala a España como una zona de alto riesgo. Con el avance de la tecnología y la robotización, tiene una perspectiva bastante complicada: *es uno de los países con elevado porcentaje de empleos corre el*

riesgo de ser sustituido por autómatas. En su caso, el 21,7% de los puestos de trabajo registra un "alto riesgo de automatización". Solo Grecia, Eslovenia y Eslovaquia presentan un riesgo mayor. Además, otro 30,2% de los trabajadores ocupa puestos con una elevada probabilidad (que cifra entre el 50% y el 70%) de sufrir una profunda transformación.

El análisis de riesgos y fortalezas arroja varios toques de atención a España, sobre todo, por la dualidad del mercado de trabajo que existe entre temporales e indefinidos y entre jóvenes y mayores. La organización internacional calcula que, en España, solo el 45% de los empleados temporales y el 32% de los trabajadores por cuenta propia participan en alguna formación al año, frente al 56% de los empleados con contrato indefinido y a tiempo completo. De hecho, las desigualdades de ingresos han progresado en España desde el estallido de la crisis en 2007, y se mantienen por encima de la media de los países más ricos.

Entre las recetas que ofrece, destaca que es "*crucial*" que la legislación asegure la protección del empleo. "*Muchos trabajadores atípicos están total o parcialmente fuera de él. Así, los derechos y la protección de éstos deben ser reforzados: combatiendo el falso trabajo por cuenta propia, eliminando incentivos fiscales que fomentan una errónea clasificación de los trabajadores; extendiendo la protección a la zona gris situada entre el trabajo por cuenta propia y el empleo dependiente, incluyendo a los trabajadores de plataforma; y reequilibrando el poder de negociación, actualmente favorable a los empleadores*".

También recuerda el referido a la educación porque, aunque ha disminuido la tasa de abandono escolar prematuro, continúa siendo alta. De hecho, en 2016 poco más del 80% de los alumnos terminaban el ciclo superior de la educación secundaria en España, cuando la media de los países avanzados estaba por encima del 85%. En este campo, las principales asignaturas pendientes son mejorar la calidad de los profesores con un esfuerzo en la universidad y en su preparación y la formación profesional, con su desarrollo, su modernización y una ampliación del recurso a la alternancia en las empresas. Es necesario que mejore la enseñanza en la universidad y el aprendizaje con prácticas en el trabajo. La Formación Profesional debe continuar modernizándose. El modelo de Formación Profesional Dual, que combina estudios con trabajo, tiene que extenderse.

"*Más gasto social y mayor progresividad presupuestaria*" es la idea fuerza básica de la actualización del Programa de Estabilidad 2019-2022 para España que el Gobierno presentó a finales de abril a Bruselas. Más gasto social para compensar que en España ha aumentado la *desigualdad en salarios, renta, consumo y riqueza, distribución generacional, territorio y género*. Así lo constatan los organismos internacionales y así lo venimos denunciando desde CCOO desde el año 2009.

En años electorales, el Gobierno sigue financiando las rebajas fiscales y las bonificaciones a la contratación a costa de la reducción del gasto social (pensiones, desempleo, ...) y del consumo del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Los incentivos fiscales son transferencias de recursos públicos a las empresas, actividades, industrias enteras o regiones. La fiscalidad para la

derecha política es un objeto de deseo electoral, cuando debiera conformar un instrumento permanente para gestionar infraestructuras físicas y tecnológicas, educación, sanidad, En definitiva, el crecimiento económico y el Estado de Bienestar. Los ingresos fiscales de España, medidos en proporción del PIB, ascendieron en 2018 al 38,9% del PIB, cerca de ocho puntos menos que el promedio de los países de la eurozona. Francia es el que más recauda (53,8%) e Irlanda es el país con los impuestos más bajos (26%).

Pero, siendo conscientes de que los recursos siempre son escasos, es preciso escoger entre ellos, lo que supone apostar por pensiones (universales y dignas), educación (abandono escolar), energía (cambio climático), vivienda (burbuja y acceso a los jóvenes al alquiler y compraventa), laboral (la precariedad), tecnológica e industria (como factor de valor y de ingresos), la reforma territorial... En este marco, el proceso de desindustrialización de España es imparable. Las estadísticas oficiales reflejan como esa actividad económica ha ido perdiendo peso en el PIB y en el empleo generado en España frente al imparable crecimiento de los servicios, encabezados por el comercio y la hostelería.

Para reforzar los pilares ante una posible crisis, algo fundamental es tener pilares. Y en España se han debilitado demasiado y durante demasiado tiempo. Pese a que el empleo ha mejorado en los años de crecimiento, el paro está todavía por encima del 13%. Es lo que sucede por haber aceptado como normal las facilidades para expulsar trabajadores del mercado cuando vienen mal dadas y para incorporarlos, mediante subvenciones, cuando la carga de trabajo se recupera.

En los países más desarrollados, la tendencia es repartir el empleo disponible y reducir la jornada. En España, lo habitual es tolerar la ineficiencia y el incumplimiento de la legislación. Así se llegó a alcanzar una tasa de paro del 26,2% en abril de 2013. El país tiene dos prioridades que acometer: *ayudar a los parados de larga duración, reforzar los resultados educativos y mejorar la innovación de la economía*. Lo que se justifica por el aumento de la pobreza, la debilidad del sistema educativo para afrontar los cambios, el débil crecimiento de la productividad y el declive sustancial del gasto en innovación.

La desigualdad de ingresos ha aumentado desde 2007 y continúa por encima de la media de la OCDE, en parte debido al elevado desempleo y a la caída de ingresos en los hogares de rentas bajas. La OCDE apunta que el 20% más pobre gana solo un 6% del total de los ingresos, lejos del 9% que obtienen en los mejores países.

Proyecto Industria, transición energética y movilidad sostenible (ITEMS)

EEUU y China se dieron una tregua en la cumbre del G-20 de Osaka, pero en ningún caso han puesto fin a su guerra comercial. La Administración de Donald Trump sigue con sus políticas proteccionistas y las economías de sus socios comerciales como México, Brasil o Sudáfrica han empezado a retroceder. A todo ello, se añaden más tensiones en Oriente Próximo, que amenazan con encarecer

los precios del petróleo. Además de persistir los riesgos dentro de la UE, el principal de los cuales sigue siendo la posibilidad de una salida a las bravas de R. Unido.

El parón de la producción industrial mundial es la punta visible de una triple transición que exige reformas:

- El repliegue del multilateralismo, ejemplificado por los intentos fallidos del G20 de resolver la cuasi parálisis de la OMC y del surgimiento de tensiones proteccionistas. Las relaciones bilaterales toman el relevo, como lo muestra el alza exponencial del número de acuerdos regionales o bilaterales -cerca de 300, el doble que hace diez años-. El resultado es una dislocación de las cadenas productivas y una recomposición en base a la nueva realidad, un proceso que llevará cierto tiempo.
- Por otra parte, la industria está en primera línea de la revolución digital y de la robotización. Si bien a corto plazo aparecen los costes de ajuste, con el tiempo cabría esperar un efecto positivo, como en anteriores periodos de cambio tecnológico, aunque surgirán de forma mucho más lenta y precaria, y sin incluir a todos los perjudicados por los cambios.
- La transición hacia un modelo energético bajo en carbono plantea importantes desafíos, que ya se reflejan en el sector del automóvil (con una caída de matriculaciones en los últimos nueve meses en España), aunque a largo plazo representa una oportunidad para nuestra economía, dependiendo de la capacidad para gestionar costes más bajos e independencia energética.

En este marco, el papel de las políticas públicas es crucial. Minimizar los costes requiere la puesta en marcha de políticas activas de empleo como las ya se están desplegando en Alemania para evitar despidos masivos e ineficientes en la industria. Y a falta de reformas del modelo industrial y energético, dando la espalda al actual sistema de ayudas que ha mostrado su ineficiencia. La acuciante escasez de personal cualificado, desde instaladores de paneles solares hasta especialistas de ciberseguridad o sanidad, muestra el camino que queda por recorrer.

Aunque sea prematuro denominar a la actual situación como crisis industrial, el futuro dependerá de la puesta en marcha de una estrategia tecnológica y energética que responda a las mutaciones en marcha. Por todo ello, y en este marco, el sindicato ha iniciado un proceso de elaboración de posición de cara a la actuación futura de la federación ante lo que ha definido como: *Industria, transición energética y movilidad sostenible*. Porque la transición energética implica una profunda transformación de la forma de producir y consumir energía, de la movilidad, de los procesos industriales. Además de la forma de construir y rehabilitar edificios, y de los sistemas de climatización.

Trabajo que, durante los próximos seis meses, pretende definir el futuro de la industria, teniendo como principal referencia las consecuencias de una transición energética que CCOO de Industria viene defendiendo y proponiendo desde hace varios años, y la urgencia de acometer un proceso de movilidad sostenible que supone un cambio disruptivo de la política del transporte en el mundo, con

efectos directos en el cambio de negocio, de empleo y desarrollo tecnológico en la industria.

El borrador de la futura ley de cambio climático y transición energética ha abierto el debate sobre sus consecuencias a largo plazo para la economía española y, en particular, para el tejido industrial del país. Supone la inversión de 200.000 millones de euros hasta 2030, con la característica de que tendrá un gran peso de origen privado, (relación de 80/20 entre privado y público en renovables). Del total de la inversión, el 40% (80.000 millones) corresponde a nuevos parques de energía eólica y plantas fotovoltaicas, entre otras, para las que habrá que realizar nuevas subastas.

Eso supone una media de 18.000 millones al año, que, además de las energías renovables, cubrirá redes de transporte, eficiencia de los edificios, calefacción, etc. Asimismo, incluye el cierre de las plantas de carbón y de las centrales nucleares y el cambio en movilidad, con la implantación del coche eléctrico en sustitución de forma paulatina de la gasolina y el diésel. Además de un esfuerzo tecnológico importante, que estimule la innovación y la maduración de las tecnologías, para que el cambio se produzca. ¿Esta España preparada, desde el punto de vista financiero y tecnológico para acometer este proyecto? O se trata de una ilusión que comenzó a desarrollar el gobierno anterior del PSOE (2005-2009) y que terminó en un rotundo fracaso.

En este marco se desenvuelve la necesidad de retomar el “*Acuerdo Estratégico del Sector de la Automoción*” iniciado en octubre de 2018 por el Ministerio de Industria y retomado en febrero de 2019, al mismo tiempo que se disolvían las Cortes españolas. No hubo acuerdo en la reunión, porque no se reflejan los aspectos más actuales y que están afectando de forma traumática al sector (renovación parque, infraestructuras de carga y demonización de los vehículos diésel). Todas las partes -cinco patronales y los dos sindicatos mayoritarios- recordamos al ministerio los desmanes creados en el sector como consecuencia de la actitud de sus ministerios durante los últimos meses.

En definitiva, el sindicato cree que el futuro pasa por acometer un proyecto integral para la industria. Propone al Gobierno que deje de tapar huecos y de actuar sobre los déficits de forma aislada. Que deje de desarrollar programas que carecen de compromisos de reindustrialización y de políticas de desarrollo tecnológico, esenciales para preservar el tejido productivo y la competitividad de la industria, olvidando, también, el compromiso que contrajo de desarrollar el Pacto de Estado por la Industria que presentaron los agentes económicos y sociales a finales de 2016. En este marco, lo que se evidencia es la incapacidad del gobierno a la hora de entender que las respuestas a las debilidades de la industria no se abordan mediante la profusión de Reales Decreto legislativos, cayendo en el error de acometer medidas de forma aislada, sin tener en cuenta que la respuesta de futuro es actuar en proyectos integrales para la industria y no actuando sobre sus déficits por separado.

Por otra parte, se precisa el desarrollo de una nueva Ley de Industria, iniciada en enero de 2019, como cimiento sobre el que se compatibilicen lo tecnológico, lo social, lo económico y lo ambiental. Un cálculo oficioso, hecho desde la

Comisión de Industria del Congreso, indica que una ley de ese porte requeriría dos años. Hay que mantener y acrecentar una iniciativa de “*cultura industrial que mantenga la atención social y política, y contribuya a la mejoría general del sector*”⁴⁸.

La actual etapa de crecimiento viene marcada por el fuerte repunte de beneficios y dividendos y la precariedad del empleo creado, lo que aumenta la desigualdad y lastra las posibilidades de desarrollo. El grueso del PIB está formado por la demanda interna agregada y su principal componente es el consumo interno, que viene favorecido por el crecimiento del empleo, seguido a gran distancia por la inversión. Para impulsar el consumo interno es imprescindible también el crecimiento de los salarios medios. Además, la recuperación de la inversión depende de la confianza del sector privado en la sostenibilidad de la actual fase de crecimiento y de la recuperación del gasto y la inversión pública tras años de recortes.

El agotamiento de los factores coyunturales -“*vientos de cola*”-, como la bajada del precio del petróleo; la devaluación del euro; la política expansiva del Banco Central Europeo, que redujo la prima de riesgo y los tipos de interés; o la pujanza turística ante la inestabilidad de otros destinos alternativos positivos, condiciona la evolución del crecimiento de la economía española, que se ha moderado en 2018, con previsión que siga la misma dinámica en 2019.

CCOO de Industria defiende cambios del modelo productivo y laboral para generar y consolidar empleo de calidad y con derechos que ponga freno a la precariedad y la desigualdad. El objetivo es sacar a la economía de su patrón tradicional de bajo valor añadido, aumentar la inversión pública y reorientarla hacia la mejora de la calidad y el contenido tecnológico de la producción.

El problema fundamental sigue siendo que, si no se soluciona la baja calidad del empleo que arrastramos, no será posible afrontar con garantías ni la reducción de la desigualdad económica y social, ni la reducción de la pobreza, ni la sostenibilidad y mejora de las pensiones, ni siquiera la consecución, de manera estable, de unas cuentas públicas saneadas. Porque todos los desequilibrios tienen su origen en el sistemático desperdicio de recursos que supone para el país aceptar un modelo de crecimiento con empleos poco productivos, inseguros y mal retribuidos.

El gobierno de turno debe asumir que ese cambio en la calidad del empleo es una estrategia de país prioritaria y que dirigir los recursos adecuados (intelectuales y financieros) a ello exige voluntad política para acometer los cambios oportunos tanto en la política económica general como en la laboral.

Las empresas más eficientes, las que apuestan por el conocimiento y la aportación participativa de los trabajadores como unos de sus factores de desarrollo esenciales (que las hay, y lo estamos comprobando en el desarrollo de proyecto ITEMS), debieran asumir el protagonismo en ese discurso para el cambio. Todo ello, aliándose con los sindicatos para impulsar un pacto por el

⁴⁸ Agustín Martín Martínez, secretario general de CCOO de Industria en el debate sobre la Ley de Industria en febrero de 2019.

crecimiento y el empleo decente que pusiera el acento en mejorar aquellos factores verdaderamente influyentes sobre la competitividad a largo plazo en la nueva economía y que van mucho más allá de los costes laborales.